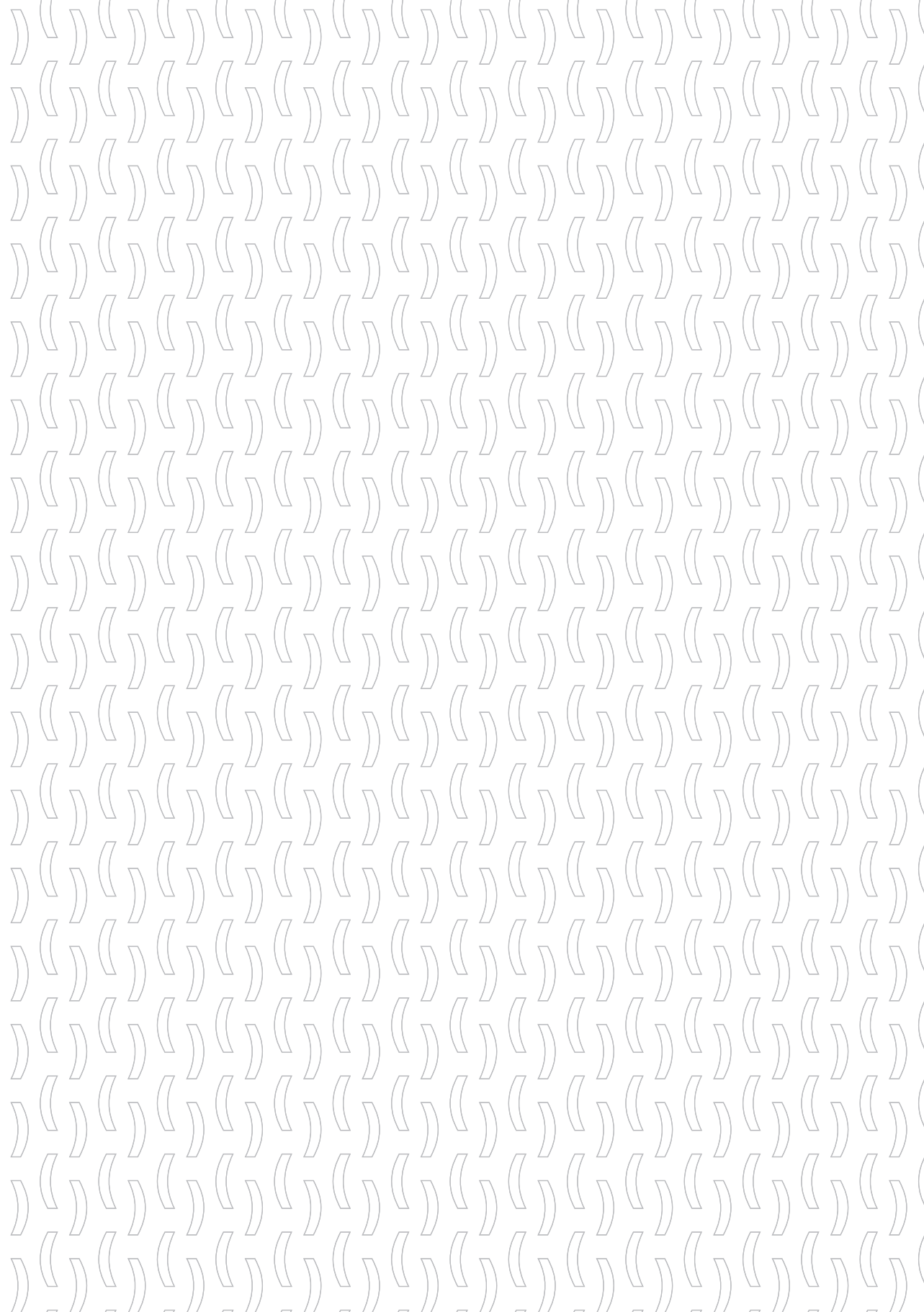
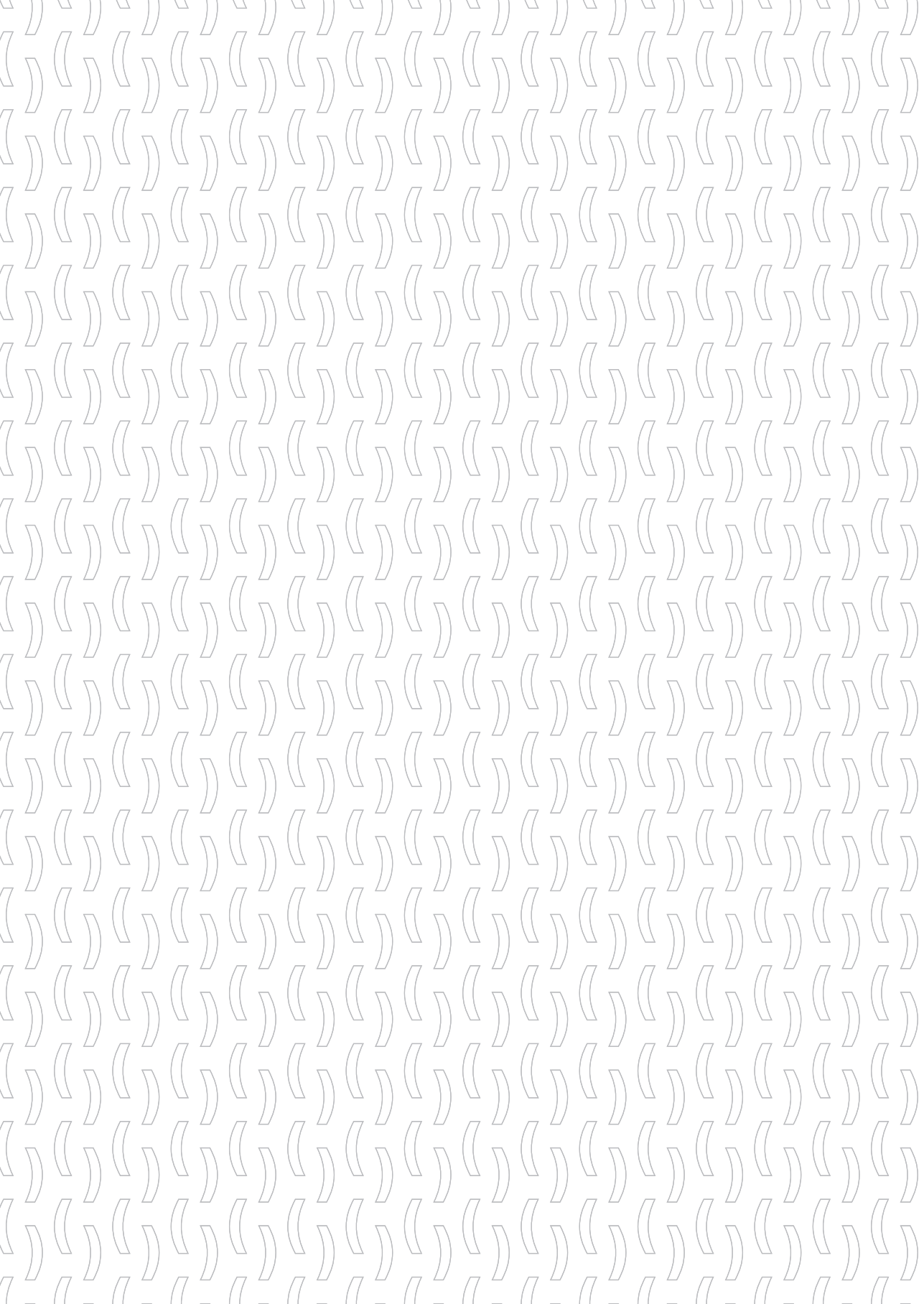




NEOLIBERALISMO: ¿FIN DE CICLO O METAMORFOSIS?

ÁLVARO GARCÍA LINERA / SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA / MANUEL GRACIA SANTOS / ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ / RUTH FERRERO-TURRIÓN / MÓNICA CLUA LOSADA / GERMÁN LLORCA-ABAD / IGNACIO MURO BENAYAS / CARLOS JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / FLORENT MARCELLESI / ESTEBAN HERNÁNDEZ / MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP / ALICIA H. PULEO GARCÍA





Edición:

Confederación Sindical
de Comisiones Obreras
Fernández de la Hoz, 12
28004 – MADRID

reflexionydebate.gs@ccoo.es

Dirección Editorial:

Joseba Eceolaza Latorre
Carlos Gutiérrez Calderón
Marcelo Ortega Picazo
Fernando Rocha Sánchez
Olga Ruiz de León Onrubia
Aida Sánchez Rodríguez

**Producción editorial,
maquetación e impresión:**

Grupo Editorial Cinca

Ilustración de cubierta:

Guillermo Casanova
@guille_casanova_corral

Consejo Editorial:

Luis Enrique Alonso Benito
Henar Álvarez Cuesta
Eva Antón Fernández
Dafne Calvo Miguel
Cecilia Castaño Collado
Joseba Eceolaza Latorre
Carlos Entenza Martínez
Gabriel Flores Sánchez
Carlos Gutiérrez Calderón
Vicente López Martínez
Cristina Monge Lasierra
Marcelo Ortega Picazo
Javier Pacheco Serradilla
José Antonio Pérez Pérez-Foronda
Carlos Prieto Rodríguez
Fernando Rocha Sánchez
Paula Rodríguez-Modroño
Aida Sánchez Rodríguez
Ana Belén Sánchez
Carmen Vidal Barbero

ISSN: 1889-4135

Depósito legal: M. 42.536-2001

**(reflexión
y debate)**



gaceta sindical

tercera época

Índice

Neoliberalismo: ¿fin de ciclo o metamorfosis?

<i>Nueva etapa: Con memoria, con futuro</i> Dirección Editorial	7
<i>Presentación: ¿Qué queda del neoliberalismo?</i>	9
<i>¿Policrisis? ¿Interregno? ¿Tiempo liminal?</i> <i>El crepúsculo del orden neoliberal global</i> Álvaro García Linera	19
<i>Nuevo orden social e internacional: claves para una interpretación crítica</i> Santiago Álvarez Cantalapiedra	31
<i>De Nixon a Trump: auge y ruptura de la globalización hasta ahora conocida</i> Manuel Gracia Santos	43
<i>Hacia un neoliberalismo de guerra</i> Enrique Vega Fernández	61
<i>La Unión Europea entre la autonomía estratégica y el vasallaje funcional</i> Ruth Ferrero-Turrión	83
<i>Neoliberalismo autoritario y giro moral: la reorganización del orden social tras la crisis</i> Mònica Clua Losada	99
<i>Neoliberalismo y posverdad: la batalla por el sentido común</i> Germán Llorca-Abad	115
<i>Tecnológicas y poder. La disputa del Estado</i> Ignacio Muro Benayas	125

<i>Taylorismo digital y despotismo empresarial</i> Carlos Jesús Fernández Rodríguez	139
<i>¿Cómo puede la transición ecológica y justa derrotar al imperio fósil?</i> Florent Marcellesi	151
<i>Las ciudades pequeñas e intermedias: un retrato del problema de España</i> Esteban Hernández	165
<i>Nuevo contrato social y política de lo común</i> María Eugenia Rodríguez Palop	177
<i>El debate sobre la libertad y otros ideales ilustrados para un futuro sostenible</i> Alicia H. Puleo García	189

Nueva etapa: Con memoria, con futuro

Dirección Editorial

Corría el año 1991. La primera guerra de Irak, conocida como la Guerra del Golfo, marcaba un hito decisivo en la configuración de un nuevo orden internacional. Dos años antes había caído el Muro de Berlín. Ese mismo año se disolvería la Unión Soviética. Se cerraba así el ciclo histórico de la Guerra Fría.

Entonces, como hoy, eran tiempos de cambio. Tiempos que exigían estudio, reflexión y debate para comprender las transformaciones en marcha y tratar de interpretar el rumbo del mundo. En ese contexto, CCOO impulsó la publicación del primer número monográfico de *Gaceta Sindical*, titulado «Reflexiones después de la guerra del Golfo y el nuevo orden internacional», cuya coordinación asumió nuestro querido Jorge Aragón, entonces responsable del Gabinete Económico del sindicato. Aquella publicación fue el germen de lo que después sería *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate*.

Ese número presentaba ya la estructura que después mantendría *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate*: un tema monográfico abordado por varios autores desde distintas especialidades y perspectivas. Y sí, autores, en masculino, porque entre todas las firmas solo había una mujer. Eran otros tiempos, y conviene no olvidarlo.

Tras once números monográficos dedicados a diversos temas –que se iban intercalando entre los números mensuales de *Gaceta Sindical* cuando se consideraba necesario– el VII Congreso de CCOO, celebrado en el año 2000, dio paso, en el marco de un proyecto de reorganización de las publicaciones con-

federales, a una nueva etapa de la revista, ya con el nombre de *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate*. Manolo Morales asumió entonces la dirección y se impulsaron un nuevo diseño y formato. Como señaló, «ha cambiado la forma, pero no la idea motriz que siempre animó a GS: la idea de reflexión, de pluralidad, de debate, más allá de verdades –tan inexistentes en el terreno social– y, por supuesto, de dogmas». En esta nueva etapa, la periodicidad fue irregular: entre octubre de 2001 y diciembre de 2006 se publicaron siete números.

El fallecimiento de Manolo Morales dio paso a una segunda etapa bajo la dirección de Jorge Aragón. Como señalaron en la presentación Fernando Lezcano y el propio Jorge, «se renuevan las formas, pero no el fondo». Se modificaron la maqueta de la revista y el Consejo Editorial, y se estableció una periodicidad de dos números anuales, que se mantuvo de forma ininterrumpida hasta 2023. Durante esta segunda etapa se publicaron treinta y cuatro números.

La existencia de *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate* a lo largo de todos estos años, y en contextos muy diversos, expresa una necesidad profunda del sindicato: comprender e interpretar con rigor el mundo en el que interviene para poder transformarlo. Esta revista ha enriquecido nuestra mirada, nuestro discurso y nuestra acción sindical con análisis y perspectivas valiosas para orientarnos en cada momento histórico. También ha sido un espacio de encuentro que ha permitido al sindicato estrechar vínculos con el mundo académico y de la investigación, así como con toda aquella persona con conocimientos especializados que tuviera algo que aportar, sin apriorismos, ni dogmas. En definitiva, ha contribuido a hacer de CCOO la organización que es hoy.

En el tiempo presente, atravesado por profundas transformaciones del capitalismo contemporáneo en todos los órdenes y por una incertidumbre radical, resulta cada vez más difícil interpretar adecuadamente los fenómenos sociales. En este interregno faltan brújulas que nos orienten. Precisamente por eso, el proyecto de *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate* es hoy más necesario que nunca para el sindicato.

En la nueva etapa que ahora iniciamos, como en otros momentos de cambio en la historia de la publicación, afrontamos el reto de mantener un contenido capaz de enriquecer, fortalecer y estimular la intervención sindical; de acercar al sindicato a las voces más cualificadas en las materias abordadas; de preservar este instrumento como espacio de encuentro con otros mundos; y, al mismo tiempo, de acometer la imprescindible actualización del diseño de la publicación y reforzar la difusión en un entorno digital hoy decisivo.

Cambiamos para renovar y reafirmar el proyecto. Con memoria, con futuro.

Presentación: ¿Qué queda del neoliberalismo?*

En el desquiciado desorden que caracteriza desde el año 2020 a la situación mundial, la palabra neoliberalismo sigue viva a pesar de que muchas de sus creencias y los modelos neoliberales de capitalismo y globalización que durante cuatro décadas organizaron el mundo han comenzado a desmoronarse. Mientras que el neoliberalismo, tanto en su vertiente de doctrina económica operativa como en su condición de corriente ideológica dominante, es más cosa del pasado que del futuro, ideas y propuestas que identificamos como neoliberales siguen formando parte del debate político y la conversación pública.

Este número de *Gaceta Sindical. Reflexión y Debate* pretende por ello tener en cuenta las nuevas estructuras económicas, éticas y sociales que ya operan en las políticas existentes. No se trata de un listado cerrado de preocupaciones, pero los artículos que aquí se publican nos pueden ayudar a identificar la magnitud del cambio que estamos viviendo y pueden orientarnos para poder combatir los peores efectos de esa transición que ya vislumbramos. Vivimos un periodo frontera en el que todavía hay rasgos del neoliberalismo anterior, pero ya se percibe una superación de algunos de los mitos fundacionales del mismo.

Durante aproximadamente cuatro décadas, entre 1980 y 2020, el neoliberalismo gobernó el mundo y lo hizo girar al ritmo que marcaban los países y sectores sociales más poderosos, que se enriquecieron como nunca lo habían hecho. Durante ese reinado neoliberal, una parte significativa de las clases trabajadoras del mundo capitalista desarrollado perdieron salarios reales, empleos manufactureros bien remunerados y protección social, lo que contribuyó a su alejamiento

* La Dirección Editorial agradece a Gabriel Flores, miembro del Consejo Editorial, la elaboración de esta presentación.

de las fuerzas de izquierdas que anteriormente habían representado sus intereses. El desigual impacto económico, social y territorial de las políticas neoliberales puede considerarse una de las causas que explican la paradójica situación actual, en la que el neoliberalismo decae mientras los debates sobre el neoliberalismo siguen resonando en la opinión pública.

En ámbitos académicos, la hegemonía neoliberal, el desempeño de sus políticas o el discursar de sus diferentes facciones y versiones ocuparon un papel relevante en las tareas de análisis que han enriquecido la comprensión de esa época histórica y de las ideas y políticas que la sustentaron.

En años más recientes, a raíz de la profunda crisis multidimensional que ocasionó en 2020 la pandemia de la covid-19 y dejó de nuevo al descubierto, como en la crisis financiera global de 2008, el fracaso de los principios y las políticas neoliberales para afrontarla, el análisis abordó también los posibles futuros del neoliberalismo, barajándose hipótesis y respuestas para todos los gustos. Habrá que esperar algún tiempo para que los hechos y los datos permitan atisbar qué escenario, entre los muchos posibles, acaba asentándose.

¿De qué hablamos cuando hablamos del neoliberalismo?

Dado que se trata de un término con múltiples interpretaciones cargadas de connotaciones políticas e ideológicas y que, a menudo, se utiliza como línea de confrontación entre las izquierdas, que suelen denigrarlo, y las derechas, que generalmente lo ensalzan, convendría examinar algunas de las definiciones que sirven de telón de fondo a los debates sobre el neoliberalismo.

La Real Academia Española (RAE) ofrece una definición vaga: «Teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado». Puede ser un buen punto de partida, pero no es suficiente para delimitar el contorno o identificar los diversos componentes y las principales características del neoliberalismo. Un par de distinciones ayudarían a enriquecer esa definición y a entender el fenómeno.

Primera, esa mínima intervención estatal no fue tan mínima. Numerosos terrenos y actividades recibieron una atención prioritaria: seguridad nacional y defensa, orden público, control de fronteras o acción gubernamental orientada a liberar capacidades empresariales y eliminar restricciones a la incesante búsqueda de rentabilidad. Sin olvidar los notables recursos públicos dedicados a desarrollar un marco normativo e institucional caracterizado por la existencia de derechos

de propiedad privada robustos, mercados desregulados y libre comercio internacional con instituciones y reglas globales que lo propiciaran.

Segunda, el neoliberalismo no está vertebrado por la única idea del Estado mínimo. Lo componen también una teoría económica, un proyecto político, modelos particulares de funcionamiento del capitalismo y la globalización o una ideología y un conjunto de creencias que dan sentido y justifican a los diversos componentes del engranaje neoliberal. Así, por ejemplo, la creencia ahistórica de que el mercado surge espontáneamente y siempre asigna eficientemente los recursos, heredada del liberalismo clásico, desembocó en acciones normativas destinadas a minimizar el gasto público, limitar la intervención económica del Estado y ofrecer a la iniciativa privada parte de la gestión de unos bienes públicos menguantes.

Más allá del significado que ofrece la RAE se encuentran descripciones con mayor densidad ideológica y más implicadas en la lucha política y la batalla cultural.

Las izquierdas suelen aceptar las ideas que denuncian al neoliberalismo como un proyecto de clase que pretende restablecer las condiciones de acumulación del capital, restaurar el poder de las elites económicas y extraer rentas y riquezas a favor del capital (David Harvey, 2005). Y subrayan el escaso interés mostrado por las fuerzas neoliberales en la defensa de los valores democráticos o su convivencia con regímenes dictatoriales.

Las derechas, por su parte, acostumbran a defender las bondades y ventajas de un orden competitivo que genera prosperidad, protege la libertad individual y coordina conocimientos dispersos en la sociedad y muy diferentes decisiones y acciones de los individuos gracias a unos mercados libres, un marco institucional apropiado y un Estado limitado (Friedrich Hayek, 1947). Y destacan el fracaso histórico del socialismo y de las políticas y concepciones keynesianas en los objetivos fundamentales de sostener de forma duradera el crecimiento económico y la libertad de los individuos.

Este tipo de descripciones ayudaron a izquierdas y a derechas a estructurar sus opiniones y a construir relatos coherentes que se acomodaban bien a las necesidades de suministrar munición a las pugnas políticas y las batallas culturales en las etapas de ascenso y auge del neoliberalismo, pero en el momento actual de búsqueda de un nuevo orden global han perdido buena parte de esa utilidad.

En 2025, Estados Unidos, la gran potencia que fue una de las principales beneficiarias del dominio neoliberal, dio la espalda a los modelos de globalización y

capitalismo neoliberales. La administración Trump y los poderes que la respaldan consideran que esos modelos y políticas neoliberales ya no resultan beneficiosos para los intereses estadounidenses o benefician más a los de sus competidores y buscan nuevos soportes institucionales y herramientas políticas para preservar la hegemonía mundial de Estados Unidos y debilitar a China, su principal rival sistémico. El neoliberalismo comienza así un periodo de descomposición en el que la razón de la fuerza pasa a ocupar una posición preponderante. En esa nueva situación, una parte sustancial de la conversación pública en torno al neoliberalismo se nutre de inercias de un pasado que está en pleno proceso de deconstrucción o ha dejado de existir.

¿Qué rasgos del neoliberalismo están desapareciendo?

Las ideas y la acción política de Trump en el primer año de su segundo mandato presidencial permiten identificar qué características del neoliberalismo se desdibujan o decaen.

En primer lugar, la colaboración económica de Estados Unidos con sus tradicionales socios occidentales y los tratados de libre comercio dejan de considerarse fuentes de beneficios mutuos y son desplazados por guerras comerciales, imposiciones arancelarias y amenazas militares. En paralelo, las ventajas de la especialización productiva y la deslocalización internacional de capitales y actividades económicas dejan de ser apreciadas. En ese nuevo contexto, las instituciones y normas multilaterales, que eran un incentivo para la colaboración, facilitaban el cumplimiento de los acuerdos y disponían de autoridad para imponer sanciones o prevenir y desescalar conflictos, pierden protagonismo y son ignoradas o cuestionadas.

En segundo lugar, las autoridades gubernamentales dejan de promover y justificar el libre movimiento internacional de factores productivos porque consideran que puede perjudicar la actividad económica doméstica y crear vulnerabilidades y dependencias. Del mismo modo, la creencia en que el Estado debe interferir lo menos posible en la asignación de recursos productivos, la oferta de bienes o la regulación de los mercados se sustituye por una creciente intervención pública en la definición de los objetivos económicos y en la regulación a favor de los sectores y empresas que se encargarán de cumplir esos objetivos. Así, la reindustrialización, la relocalización de empresas y actividades económicas, el apoyo financiero y fiscal a empresas y sectores que se consideran estratégicos, el impulso de campeones empresariales globales y la intervención diplomática y militar para conseguir nuevos mercados y contratos a las empresas nacionales

o evitar que otros Estados apliquen normas administrativas o fiscales que sean consideradas perjudiciales o abusivas, han pasado a ser tareas estatales tan legítimas como esenciales.

En tercer lugar, el cosmopolitismo ideológico sustentado en intereses y valores universales que facilitaban el reconocimiento de la pluralidad de identidades nacionales existentes y la cooperación entre países se sustituye por ideologías nacionalistas excluyentes que cuestionan las reglas e instituciones globales de carácter multilateral. El resultado es que los países se preparan para defender sus intereses, integridad territorial y soberanía nacional mediante una fuerza militar capaz de disuadir o imponerse.

Éstas son algunas de las novedades que muestran hasta qué punto la ideología y las políticas neoliberales se están deshilachando y son sustituidas por ideas y políticas más intervencionistas, más agresivas y menos cooperativas. Además, lo que quedaba en el neoliberalismo de los valores liberales vinculados a los derechos humanos, la democracia o la igualdad civil sufre un fuerte acoso y experimenta un franco retroceso.

En todo caso, del pensamiento neoliberal quedan restos, algunos componentes e inercias. Por ejemplo, la extrema admiración por el beneficio y la riqueza patrimonial, la presión política y cultural a favor del recorte de impuestos, especialmente de los que afectan a las rentas del capital, a las altas rentas del trabajo y a los grandes patrimonios y herencias, o el culto al crecimiento económico, sin reparar en los costes relacionados con externalidades, impactos sociales y medioambientales o consecuencias en términos de desigualdad y cambio climático.

Respecto al modelo de globalización neoliberal, no cabe dar por hecho que su descomposición vaya a suponer la desaparición de la globalización. Hay demasiados intereses en juego y muchos actores económicos que intentarán preservar parte de la globalización alcanzada y ensayarán nuevas vías y modos para lograrlo. Pero las presiones y tendencias ya existentes apuntan a unos intercambios comerciales globales más limitados o fragmentados; unos movimientos financieros internacionales sometidos a mayores restricciones; y unas cadenas de valor y suministro menos extensas y complejas que las que se construyeron tras la implosión en 1989 de los sistemas de tipo soviético en Europa; la integración de la economía china en el mercado mundial o la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos globales de producción y comercialización.

La decadencia del modelo capitalista neoliberal tampoco presupone la muerte del sistema capitalista, que no ha agotado su capacidad de impulsar la acumu-

lación de capital, está demostrando su reconocida flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones de un mundo convulso y cuenta con el apoyo de grandes poderes nacionales y globales. Las características del nuevo modelo capitalista por construir están por ver y serán el resultado de las pugnas y los acuerdos entre los muchos agentes políticos, económicos y sociales capaces de participar e influir en su construcción.

Apuntes y conclusiones finales

La demolición del neoliberalismo a la que estamos asistiendo no implica ni deja de implicar la desaparición de la globalización o el capitalismo. En el corto o el medio plazo, en los que tiene sentido hacer previsiones fundamentadas, el capitalismo seguirá vivo, seguramente con otros ropajes y un nuevo modelo, y la globalización, quizás demediada, más fragmentada y con mayores conflictos, sobrevivirá.

Lo que nadie sabe ni puede saber es cuándo o qué modelos sustituirán a los anteriores modelos de capitalismo y globalización neoliberales que están desmantelándose. Entre otras cosas, porque dependerá de lo que hagan los muchos actores y poderes que ya están influyendo o intentarán influir en los procesos de cambio y transformación que se han iniciado.

Ni los análisis ni la imaginación pueden sustituir a la acción política o la lucha social. Las reflexiones y los debates públicos sirven de inspiración al qué hacer, pero lo decisivo para impulsar los cambios y defender los derechos y libertades de las grandes mayorías sociales seguirá siendo construir organización y fraguar amplias alianzas democráticas y progresistas. Serán imprescindibles fuerzas políticas, sindicales, sociales y culturales capaces de escuchar y representar a la mayoría social, defender sus condiciones de vida y reforzar los valores y las prácticas sociales que facilitan el diálogo, la convivencia y la democracia.

Creo que vale la pena terminar estas reflexiones con una breve incursión sobre la maleabilidad del lenguaje. Me serviré para ello de una de las citas más repetidas cuando se trata de pensar en el uso y el significado de las palabras. Se encuentra en una conocida obra de Lewis Carroll, cuya segunda parte, *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí*, se publicó en 1871:

«—Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso—, significa lo que yo quiero que signifique..., ni más ni menos.

–La cuestión es –dijo Alicia– si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–La cuestión es –dijo Humpty Dumpty– quién es el amo..., eso es todo».

En el cuento de Alicia, al igual que en cualquier espacio cerrado a influencias externas, Humpty Dumpty tiene razón, porque las palabras sirven de trincheras y casamatas que evitan influencias externas e impiden que el árbol eternamente de la vida se cuele en su interior y acabe trastocando los significados que el poder y la costumbre imponen. Pero la duda que plantea Alicia es relevante, porque en la república de las palabras son el pueblo o la comunidad de usuarios de un idioma los soberanos que determinan el sentido más extendido de cada palabra. O así era hasta el extraordinario desarrollo de las nuevas tecnologías y la enorme influencia de los nuevos canales de información, desinformación y comunicación.

La pretensión de esta introducción es proporcionar un relativamente amplio marco de referencias para el diálogo y la reflexión a propósito del neoliberalismo y de lo que queda de las ideas, teorías y políticas que sustentaron su hegemonía. También, señalar algunos escollos que pueden hacer naufragar el debate o dificultar la conversación. Escollos como, por ejemplo, los siguientes: agotarse en el intento de adivinar el futuro o qué sucesor del neoliberalismo acabará imponiéndose; confundir la actual deconstrucción de los modelos neoliberales de globalización y capitalismo con el fin del capitalismo y la globalización; descartar toda posibilidad a que algunos de los rasgos del neoliberalismo sigan siendo funcionales durante un más o menos largo periodo de decadencia o, en su caso, encuentren acomodo en los nuevos modelos de globalización y capitalismo que están por construir y por nombrar; sustituir la pausa con la que debe encararse el análisis (siempre abierto, inconcluso y a la espera de nuevos datos, indicios y pruebas) por la inmediatez, la pasión o la contundencia que requieren los relatos políticos.

* * *

El conjunto de textos que integran este número parte de una intuición compartida: vivimos un momento de transición histórica profunda, marcado por la crisis del orden neoliberal y la emergencia de nuevas configuraciones de poder aún inestables. **Álvaro García Linera** describe este tiempo como un momento limi-

nal o de interregno, en el que lo viejo se desvanece sin que lo nuevo haya logrado consolidarse, generando desorientación pero también potencial de cambio. Como señala **Santiago Álvarez Cantalapiedra**, asistimos a la gestación de un nuevo orden social e internacional que pone fin al consenso neoliberal y abre un escenario de incertidumbre donde se amplían, simultáneamente, las posibilidades de regresión y de transformación. En la misma línea, **Manuel Gracia Santos** señala los cambios irreversibles producidos en la globalización que hasta ahora hemos conocido, entre otras cosas por la nueva posición de EEUU, y la intensificación de los riesgos globales.

La dimensión geopolítica atraviesa igualmente buena parte de los análisis. **Enrique Vega Fernández** interpreta la creciente centralidad de la guerra como expresión de un neoliberalismo que recurre de forma cada vez más explícita al poder militar para garantizar el control de recursos y territorios. **Ruth Ferrero**, por su parte, examina la posición de la Unión Europea en un orden internacional en transición, marcada por la tensión entre autonomía estratégica y dependencia estructural

Varios artículos analizan la transformación del capitalismo contemporáneo y sus formas de dominación. **Mònica Clua Losada** sostiene que el neoliberalismo no ha desaparecido, sino que ha mutado hacia una fase más autoritaria y moralizadora, mientras **Germán Llorca-Abad** se adentra en la dimensión cultural y comunicativa del presente, mostrando cómo la articulación entre neoliberalismo y posverdad ha erosionado el papel de los hechos, fragmentado las comunidades y debilitado los consensos democráticos. **Ignacio Muro Benayas** subraya que el Estado sigue siendo un actor central, aunque cada vez más disputado por intereses privados y, en particular, por el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas. Esta reconfiguración se expresa también en el ámbito laboral, donde **Carlos J. Fernández Rodríguez** identifica la emergencia de un «taylorismo digital» que intensifica el control y la precarización en la economía de plataformas.

Florent Marcellesi analiza la evolución de la transición ecológica, desde su reciente hegemonía cultural hasta el actual momento de retroceso, condicionado por la ofensiva de los intereses fósiles y las corrientes reaccionarias. Esta transformación del sentido común se conecta con los efectos sociales y territoriales que analiza **Esteban Hernández**, quien pone el foco en el declive de las ciudades pequeñas e intermedias en España como expresión de un modelo económico que concentra oportunidades y recursos en determinados espacios.

Finalmente, otros textos abordan la crisis de los marcos normativos e ideológicos de la modernidad. **María Eugenia Rodríguez Palop** propone repensar el contrato social desde la lógica de lo común, incorporando una visión relacional de la ciudadanía y una apuesta por la justicia social y ecológica. En paralelo, **Alicia H. Puleo** reivindica el legado de la Ilustración –especialmente sus ideales de libertad, razón y pluralismo– como herramientas imprescindibles para afrontar los riesgos contemporáneos, entre ellos las nuevas formas de control biopolítico asociadas al desarrollo tecnológico.

En conjunto, este número ofrece un mapa plural pero coherente de un tiempo de transición en el que confluyen crisis económicas, ecológicas, políticas y culturales. Un tiempo, como apuntan varias de las personas colaboradoras aquí reunidas, en el que la incertidumbre no es solo un síntoma de descomposición, sino también la condición de posibilidad para imaginar y construir nuevos horizontes de organización social más justos y sostenibles.

¿Policrisis? ¿Interregno? ¿Tiempo liminal? El crepúsculo del orden neoliberal global

Álvaro García Linera

Sociólogo

Ex-vicepresidente de Bolivia (2006-2019)

Estamos viviendo tiempos ásperos y confusos. Por todas partes del mundo afloran crisis económicas; estanflación; ralentización del crecimiento de la productividad; fragmentación geoeconómica; guerras arancelarias; nacionalismos económicos; desglobalización; ocaso de la unipolaridad; crisis climática; desafección democrática; ascenso de autoritarismos electorales.

El ambiente general que embarga a la mayoría de las sociedades es el del malestar generalizado, frustración, rencores despertados, odios, estupor y asfixiantes incertidumbres.

Por ello, no es raro que por todos lados estén surgiendo lecturas apocalípticas respecto al «advenimiento del fin de los tiempos». No se trata solo de las reverberantes escatologías religiosas que promete la inminente llegada de la redención celestial, sino también de la proliferación de debates políticos y filosóficos sobre el derrumbe de la «civilización»; la llegada de un «Armagedón» que dirimirá con fuego purificador la batalla entre «occidente» y «oriente»; o el colapso ecológico y demográfico que terminará con la vida tal como hoy la conocemos, etc.

En medio de todo ello, la pregunta que uno se hace es ¿cómo ubicarnos en un tiempo que parece inaprensible? Y, lo más importante, ¿cómo situarnos en el tiempo para transformarlo por uno más condescendiente con el bienestar y la justicia social?

Las teorías convencionales que se usaban en tiempos de «normalidad», hoy son incompetentes para abordar esta vorágine de anomalías. Las manidas categorías de «globalización», «nichos de oportunidad», «libre mercado», «governabilidad», «liberalismo político», etc. se muestran agotadas e inútiles para dar cuenta de un mundo que ha perdido horizonte y predictibilidad.

Sin embargo, en un esfuerzo para comprender la complejidad del presente, en los últimos años han surgido varios conceptos de apoyo para intentar aprehender esta realidad esquiua.

Uno de ellos es el de «policrisis»

Recuperando un término formulado por E. Morin en los años noventa, el profesor A. Tooze, C. Hobson y otros han propuesto la categoría de policrisis para referirse al momento excepcional y caótico que actualmente está viviendo el mundo. Posteriormente, el Foro Económico Mundial de Davos y el Banco Mundial han adoptado el término para hacer sus evaluaciones sobre la situación global actual.

En su acepción simple, policrisis hace referencia a la convergencia de muchas crisis independientes ocurriendo simultáneamente, superponiéndose y retroalimentándose entre ellas. En particular, para Tooze es la manera de nombrar la perplejidad general que estas perturbaciones provocan y la pérdida de confianza en los dispositivos de conocimiento que se tienen para descifrar el porvenir. Es un tipo de «crisis de conocimiento» respecto a la trayectoria global de los acontecimientos que ahora se presentan como caóticos.

Si bien esta categoría ayuda a establecer el tránsito por un «punto de inflexión crítico» del curso histórico, carece de contenido más allá de la descripción patética del agolpamiento de múltiples crisis. El propio Tooze, en una reciente autocrítica, reconoce que es una «teoría débil» que, además, no permite «especificar los factores que las impulsan» ni mucho menos «el peso específico» de cada una de ellas. Lo que a la larga resulta «confuso e inútil».

Uno de los mayores problemas con esta interpretación es que se concentra en el aparato de producción de conocimientos que poseen las teorías sociales contemporáneas, esto es, en un déficit académico. Cuando en realidad la incertidumbre y el caos que nombra es una experiencia social y, por tanto, tiene que ver con las propias estructuras económicas, que han perdido el vigor del crecimiento; y de los mecanismos de legitimación política, que se muestran desgastados al momento de alcanzar consensos activos de las sociedades. Por otra parte, la categoría policrisis carece de historicidad, pues se limita a enunciar el horror de un abismo en el que todo pareciera colapsar sin salida alguna, incluido el propio curso histórico.

Interregno

Fue Gramsci, que vivió un tiempo parecido al presente, el que propuso el concepto de interregno para referirse a las cualidades de un punto de transición histórica, pero, precisamente, con la carga de un hecho social general y preludio de un nuevo «orden» social.

Recogiendo una categoría usada para designar los complejos e irregulares tiempos que emergen del fin de un soberano hasta la entronización de uno nuevo (del latín «inter», entre; «regnum», reinado), el interregno en Gramsci designa la «muerte de las viejas ideologías» que mantenían el consenso social de las clases dominantes. Por ello, es el tiempo en que esas clases dejan de ser dirigentes y quedan solo como dominantes; como detentadoras de la «pura fuerza de la coerción».

Si bien es un momento de tránsito, de una forma de legitimación a otra, el interregno señala una «crisis de autoridad» cuya resolución históricamente normal queda bloqueada. Las masas populares se «separan» de la ideología dominante, pero no para abrazar inmediatamente otra sino para sumergirse en un «escepticismo generalizado» hacia todas las «teorías y fórmulas generales». Así, en medio de esta «muerte de las viejas ideologías», lo que prevalece como cohesión social es el vínculo del «puro hecho económico», el «cinismo» descarnado en política y, claro, la coerción.

«Lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer», continua Gramsci, abriendo un espacio de incertidumbre general. Moller Stahl argumenta que el interregno sería un tiempo de pérdida de fe en las ideologías dominantes porque habría una competencia de varios proyectos ideológicos con suficiente respaldo en la sociedad. Pero, en realidad, para Gramsci, lo que caracteriza el interregno no es un mercado competitivo de ideologías, sino el derrumbe de todas ellas. Es la experiencia del vacío de creencias movilizadoras. Es en este inicial aplanamiento ideológico que empuja a los pueblos a «no creer en lo que creían antes», del que luego surgen, necesariamente, las condiciones para la «formación de una nueva cultura» y la disputa entre distintos proyectos ideológicos para conquistar la hegemonía. Solo entonces hay espacio para una «expansión sin precedentes» de lo nuevo. Gramsci creía que podía ser la ideología socialista. Pero no descartaba la «restauración de lo viejo» o, peor, la emergencia de los «más diversos fenómenos morbosos».

La conceptualización gramsciana es sumamente potente para comprender el presente. La debilidad que tiene es que concentra la explicación, y la resolución, de la «crisis de autoridad» en la ideología, dejando de lado la economía que, como veremos después, es tan decisiva como la primera. Además, pero esto ya no es atribuible a Gramsci, el uso actual del concepto interregno se ha reducido a una mera adjetivación paralizante, casi nihilista, de las «monstruosidades» contemporáneas de la vida política.

Tiempo liminal

Con este concepto recogemos las virtudes de los dos anteriormente mencionados y buscamos superar sus limitaciones.

Inicialmente, el término liminalidad fue propuesto por los antropólogos Gennep y Turner para estudiar el tránsito a estados estructurales de la vida de un pueblo, como la guerra, la escasez, la abundancia, etc. Es un tiempo de disolución y descomposición de las normas prevalecientes en el que lo viejo y lo nuevo «no están ni vivos ni muertos, por un lado, y a la vez están vivos y muertos, por otro». Por ello, es el «reino de la posibilidad pura», de la que surge toda posible configuración posterior.

Proponemos utilizar el concepto de tiempo liminal para caracterizar las condiciones objetivas y la manera subjetiva con la que todos los actores sociales experimentan la dirección del tiempo histórico de sus vidas, en momentos de transición de un régimen mundial de acumulación económica y legitimación política a otro.

Señala el cierre de una época y el inicio de una nueva, pero no como tránsito gradual ni como una apacible mezcla anfibia, sino como una avalancha de rupturas existenciales carentes de sustituto, dejando a su paso un vacío, una desesperante ausencia íntima. Es un corte abrupto en la experiencia del sentido del tiempo social y deja a las personas sin reemplazo imaginado ni premonición plausible durante varios años, quizá décadas. Es el momento de transición en el que el viejo orden de previsiones colectivas se cansa, deja de cautivar. Y, esto es lo desgarrador, sin que surja nada sólido y duradero que lo sustituya. Dando lugar a un periodo temporal, que puede durar una o dos décadas, de desencanto, de irritación social, de polarizaciones, de adhesiones y entusiasmos cortos seguidos de nuevas decepciones.

El tiempo liminal tiene las siguientes características que definen la finalización de un ciclo de acumulación-legitimación y la ausencia temporal de sustituto:

Crisis económica general. No hay crepúsculo de creencias sociales sin deterioro del soporte material económico que lo arropó. Cuando la economía crece, los ingresos monetarios mejoran; la movilidad social, rápida o lenta, es verificable, y las jerarquías de reconocimiento se afianzan, las adhesiones morales entre gobernantes y gobernados son estables. El mundo se presenta con un destino imaginado. Esto cambia cuando hay una parálisis del ascenso social, una caída del estatus, un recorte de la capacidad de gasto o un freno a la asequibilidad a los bienes socialmente disponibles. Es decir, cuando emerge una crisis econó-

mica. Ello marca el declive estructural de toda una época, y es verificable por la caída del crecimiento económico (PIB), la ralentización del aumento de la productividad, la pérdida de dinamismo del consumo, el aumento de la desigualdad y la frustración colectiva. Como ahora.

Si nos fijamos con atención en el transcurso de los últimos 150 años, las sociedades del mundo han atravesado tres ciclos económicos de aproximadamente 40-60 años que, pese a sus diferencias internas, tienen una misma trayectoria de crecimiento, expansión, estabilización, declive, recesión y ocaso. Los ciclos de Kondratiev son una aproximación a este curso.

Tuvimos el ciclo liberal de 1870 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial del siglo XX, cuando se inicia su descenso. Luego el ciclo del «Estado del bienestar», o del «capitalismo de Estado», a mediados de los años 30, que entraría en su fase descendente a fines de los años 60. Finalmente, el ciclo neoliberal que despuntó en los años 80, hasta mostrar signos de envejecimiento a partir de la «gran recesión» del 2007-09. Y entre el viejo ciclo y el nuevo ciclo está el tiempo liminal que, algún momento, tendrá que dar lugar a un nuevo ciclo histórico de estabilidad.

Ver el tiempo liminal de esta manera desfataliza la historia, pues habla de un torbellino social donde finalmente se dirimirá el nuevo ciclo de estabilización económica (capitalista, o no). Tooze argumenta que eso es «prometer» demasiado y que no se puede decir lo que vendrá. Pero, si esto fuera así, se acepta la idea de que las sociedades pueden vivir indefinidamente en la incertidumbre estratégica, lo que desdice la experiencia de toda la historia escrita conocida. O, mejor aún, que el capitalismo hubiera alcanzado su límite insuperable, cuando en realidad los límites históricos siempre son producidos socialmente.

De momento, los datos de la crisis son inobjetable:

Bajo crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial. Entre 1970 y 1982, el crecimiento de la riqueza económica mundial cayó del 5% al 2,7% anual. Eso puso fin al Estado de bienestar y al desarrollismo y dio paso al neoliberalismo, que logró aumentar el crecimiento al 3,1% durante 28 años. Pero desde el 2010 al 2023, nuevamente se cayó en un raquíto crecimiento del 2,7% en promedio por año. El Banco Mundial (BM) calcula que entre el 2023 y el 2030 será aún peor, pues el crecimiento caerá a un 2,2%.

Según el Bank for International Settlements (BIS), el crecimiento del comercio mundial, baluarte del globalismo neoliberal, en la última década se ha detenido. Sumadas importaciones y exportaciones del comercio mundial respecto al PIB

global, entre 1870 y 1915 subieron del 20 al 30%. Entre las dos guerras mundiales cayeron al 15%. Tras la segunda guerra mundial, hasta 1980, se elevó al 35% y, en toda la etapa neoliberal trepó hasta alcanzar el 60%. Tras la crisis de 2008 este ascenso se ha paralizado. No ha desaparecido el globalismo comercial. Ha perdido impulso, se retrae y comienza a fragmentarse.

La productividad en las principales economías de occidente ha disminuido en las últimas décadas. En EE UU, en los años 60, creció cerca del 2,3% en promedio anual. En los 70 creció menos del 1%. Fue un síntoma de la crisis que se vivió entonces. En los años 80, noventa y primera década del 2000, la productividad aumentó del 1,5 al 2%. Pero nuevamente en la década del 2010-2020 cayó a menos del 1,5. En la zona del euro, del 3% anual en la década de los 60, no ha parado de caer hasta estancarse actualmente en el 0,5%.

Divergencia de elites. Cuando el estancamiento económico se prolonga, las elites empresariales y políticas rompen sus acuerdos previos que encausaron la bonanza. Divergen en cómo salir de la crisis. Las propuestas se crispan. Todas apuntan a distintos lados. Unos buscan nuevos aliados, otros aumentar sus exigencias frente a los demás, en tanto que los más audaces propondrán nuevos cursos económicos que impulsen el crecimiento y la distribución. Estamos ante una mutación de los bloques de poder con propensión hegemónica.

Las derechas que rompen el conservadurismo en ruinas se escoran a la extrema derecha, proponiendo regresar a la pura «lealtad neoliberal» de los ajustes macro y el disciplinamiento de las clases populares. Otras, propugnarán levantar murallas arancelarias para recuperar protagonismo manufacturero; pero manteniendo para adentro el uso neoliberal de los recursos públicos estatales. Cada cual apuesta a ser más radical que las anteriores para diferenciarse del declive general.

Las normas que hasta aquí prevalecieron como «horizonte de época» colapsan. El libre mercado, la globalización, la austeridad fiscal y el «Estado mínimo», que durante 4 décadas fueron el sentido común de cualquier política pública «moderna», se repliegan para dar paso a una carrera por aranceles en contra de los más eficientes (China), a políticas proteccionistas; endeudamientos públicos agigantados y nacionalismos económicos de todo tipo, industriales, tecnológicos y militares.

Según el FMI, las restricciones al libre comercio –que durante décadas eran excepciones de países marginales– de 200 al año han pasado a más de 3000 en el 2024, impulsadas fundamentalmente por los países económicamente más poderosos. Primero vino «hagamos nuevamente grande a América». Luego le siguió la búsqueda de la «soberanía europea»; del plan «hecho in China»; del

«Plan Brasil». Del globalismo liberal como cumbre suprema de la historia hemos pasado al soberanismo y los mercados segmentados por subordinaciones geopolíticas.

Pero es también tiempo en que las izquierdas y progresismos salgan de su marginalidad y podrán hallar oídos receptores con la aplicación de nuevos caminos para mejorar la economía y los ingresos populares: subir impuestos a las grandes empresas, incentivar la demanda con gasto público, desplegar políticas neo-industrialistas, nacionalizar empresas estratégicas, etc.

Si los primeros fallan, las políticas de izquierda podrán llegar a los gobiernos. Pero si la izquierda falla, la venganza será feroz y las derechas revanchistas buscarán terminar con cualquier atisbo de oposición popular.

Con todo, ninguna propuesta alternativa se afianzará plenamente. Izquierdas y derechas se sucederán en los gobiernos en medio de expectativas y decepciones escalonadas. En tanto no surja un nuevo modelo de acumulación sustentado en un soporte productivo que permita un crecimiento económico duradero, al menos en los países económicamente más poderosos, lo más probable es que asistamos a oleadas y contraoleadas simultáneas de proyectos políticos enfrentados, dando lugar a un sistema político polarizado.

Suspensión del tiempo histórico. En medio de este declive y malestar general, los viejos sistemas de legitimación se agrietan y desploman en cámara lenta, desvaneciendo el horizonte predictivo con el cual las personas depositaban sus esperanzas movilizadoras.

Al no haber un mañana que imaginariamente mejore el presente, tampoco hay un camino, recto o tortuoso, fragmentado o ininterrumpido, mediante el cual acortar los dilemas del presente con respecto al bienestar imaginado. Entonces el tiempo histórico desaparece, pues este supone un flujo, turbulento y discontinuo pero dirigido hacia un horizonte, una meta, un destino. Ante el vacío de porvenir, la sociedad se sumerge en la experiencia corporal de un tiempo suspendido, carente de flujo con respecto a fines; navegando en un presente sin sentido y dilatado hasta el infinito.

El tiempo físico se comprime en una vorágine de hechos y exigencias, pero el tiempo histórico, que da un sentido a las múltiples acciones de las personas, está detenido porque no hay horizonte que le dé vida y movimiento. El futuro se presenta inescrutable, y los trozos de vida personal como pliegues sin cohesión alguna. El futuro se ha extinguido, el presente se ha desquiciado. El rumbo de la vida social ha sido secuestrado.

Protagonismo estatal. Rotos los viejos pactos y certidumbres, los bloques políticos emergentes buscan apoyarse en la fuerza bruta del poder del Estado (económica y política) para imponer lo que consideran la salida a la crisis. La nueva regla del juego interestatal que emerge es que hoy no existen reglas. En el tiempo de transición liminal todo es lícito; en primer lugar y sobre todo, la fuerza, la coacción entre Estados para imponer a los otros lo que los gobiernos, y las empresas cobijadas en él, necesitan. No importa si estas son empresas «nacionales» o transnacionales. Lo importante es que tengan como sede un Estado, y aprovecharán la fuerza política, económica y coercitiva que tiene ese Estado para lograr créditos internos, subvenciones, protecciones arancelarias, chantajes a otros Estados para eximirse de impuestos y, claro, para ocupar sus mercados.

Se desata un interregno caótico donde los Estados actúan como desenfrenados leviatanes hobbesianos, lanzados unos contra los otros. La única barrera que se imponen es la que emerge de los límites de sus recursos y poder. En función de eso miden realistamente sus esferas de control e influencia.

Ya no hay «valores» a los que adherirse. Ni democracia, ni derechos humanos, ni justicia. Solo el poder. El poder de ocupar. El poder de ganar. El poder de usurpar. El poder de rentabilizar. El poder de humillar, atemorizar y someter.

Hemos entrado a un pórtico histórico «salvaje» regido por la ley de la fuerza de los Estados (económica y militar). Las personas que escenifican esta brutalidad del mundo no son efímeras casualidades. Son la representación morbosa de una necesaria ruptura desbocada. No terminarán cuando sean reemplazados en las siguientes elecciones. Forman parte de la borrascosa transición hacia un nuevo orden global estable; pero es una transición que durará más de una década; sembrando violencia, odios y canibalismos intraestatales que dejarán heridas por siglos.

El que esta inflexión del orden tome formas crueles y violentas carentes de narrativas legitimadoras puede ser visto como el síntoma del crepúsculo de un régimen de dominación. En este caso, del ciclo globalista (40 años) y del ciclo hegemónico norteamericano (100 años). Todo declive de una autoridad exacerbada la desesperación de quienes lo usufructuaron, llevándolos a intentar detener lo inevitable de manera violenta. Es lo que la historiadora Tuchman ha denominado la «frivolidad belicosa de los imperios seniles». Pero también la brutalidad es un síntoma del tormentoso nacimiento del orden nuevo. Es la recurrente «partera» de la historia a la que se refería Marx en el famoso capítulo XXIV de *El Capital*, donde describe no solo como se forma el Estado moderno, sino, además, cómo el Estado es una «potencia económica» que ayuda al nacimiento de toda nueva forma social. La violenta intervención estatal es una marca de nacimiento del

capitalismo y, por ello, de todos los nuevos ciclos largos con los que se renueva la acumulación de riqueza e inversiones. La embravecida coacción estatal es una característica propia de los tiempos liminales. Como el actual.

En medio de estas monstruosidades desnudas con las que están actuando los grandes Estados, es posible distinguir el nacimiento de unos principios de regularidad que, de aquí a un tiempo, podrán cimentar el nuevo orden internacional que emergerá y se estabilizará durante las siguientes décadas. Estas regularidades son:

1. Los Estados ya no son solo el soporte de la acumulación de los capitales, como lo fueron en el neoliberalismo; ahora son también parte del comando y reorganización territorializada de esa acumulación. China, Corea, Japón, Vietnam son ejemplos exitosos de ello. EEUU y la UE seguirán el camino, pero no bajo la forma de Estado-empresario, como lo hicieron los primeros, sino como Estado incubador, protector y alimentador de «sus» empresas privadas en sus áreas de influencia. Pero, además, como un medio de expansión de la infraestructura del Estado a través de empresas privadas.

2. Los Estados del mundo se diferenciarán entre Estados patrones y Estados vasallos, según su capacidad infraestructural, su poderío económico, su cohesión política y logística militar. Los primeros, delimitando áreas de control y autonomía de las empresas que tienen residencia en sus territorios. Los segundos, como proveedores de insumos y exclusividad comercial hacia los primeros.

3. La soberanía ya no es un reconocimiento pactado por tratados internacionales. Es fuerza económica, sólida legitimidad interna, capacidad de defenderse y posibilidad de infringir daños a otros estados. Quienes no tengan esos atributos devendrán en Estados de servidumbre.

4. Las áreas de influencia, regional o continental, serán flexibles, sometidas a las presiones de irradiación de los capitales en busca de mercados. Pero la elasticidad de las fronteras no dependerá de acuerdos comerciales, sino de oleadas de guerras arancelarias, chantajes geopolíticos e intromisiones en la vida interna de los Estados. De un «orden internacional» para los mercados, en el que los estados eran la plataforma sobre la que se desplazaba el protagonismo de la libre circulación de los capitales, pasaremos a un «orden global» de los Estados que conquistan, a la fuerza, para «sus» capitales, espacios regionales y puntuales mercados globales.

5. El régimen de legitimación gubernamental interno gradualmente dejará de lado el ideologema liberal globalista para centrarse en temas de seguridad regional, «grandeza» nacional y soberanía.

Disponibilidad social. Sin embargo, ninguna sociedad puede vivir indefinidamente en la incertidumbre estratégica. Es un tema de necesaria cohesión social duradera, de métodos de legitimación de cualquier forma de gobierno y, también, de efectos drásticos en la economía.

Por ello, al estupor y desasosiego social, en algún momento le ha de seguir, abruptamente, una disponibilidad cognitiva a revocar viejas narrativas y a aferrarse a unas nuevas, las que sean, pero con las que sea factible encontrar soluciones a las ansiedades y necesidades que agobian. Será el momento de la cristalización de un nuevo sistema de creencias que restituya la flecha del porvenir al tiempo histórico dirigido a una meta mínimamente verificable. En el fondo, se trata de la formación de un nuevo modelo de legitimación y dominación que, obligatoriamente, deberá venir acompañado, o cabalgando, un nuevo modelo de acumulación económica y un nuevo bloque de clases sociales en el poder que lidere esos cambios.

Sin soporte económico-tecnológico sostenible en el tiempo, no hay posibilidad de un nuevo horizonte predictivo duradero.

La apertura cognitiva no tiene rumbo preestablecido ni fecha anticipada. No es un artificio discursivo ni una mera combinación de acuerdos cupulares. Son creencias bien fundadas, esto es, expectativas de futuro que poseen gradualmente un soporte mínimo de veracidad material en las mejoras de las condiciones de vida de la mayor parte de las personas y que, de mantenerse en el tiempo, dan lugar a un nuevo ciclo de expansión económica. Puede tomar rumbos conservadores, por ejemplo, variantes posfascistas; hiper neoliberales para «adentro» y soberanistas para «afuera»; o también reformistas, o inclusive, revolucionarias. La lucha política de ese momento, la audacia con la que las distintas fuerzas políticas concurren a esa disponibilidad cognitiva de la sociedad, influirá en la naturaleza del nuevo ciclo del tiempo histórico.

Mas eso vendrá después. Por ahora, el mundo está apenas en medio de esta vorágine liminal.

Nuevo orden social e internacional: claves para una interpretación crítica

Santiago Álvarez Cantalapiedra

*Doctor en Economía y director del Área Ecosocial de FUHEM
y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*

Lejos quedan los tiempos en que todo parecía transcurrir con cierta previsibilidad. Ciertamente los cambios nunca han dejado de sucederse, pero se producían a un ritmo que permitía asimilarlos. De ahí que el futuro se afrontara con confianza. Ahora las tornas han cambiado. Es como si todo se hubiera acelerado y el futuro se hubiera convertido en una fuente de amenazas. Este es el clima cultural de las últimas décadas, que han sido pródigas en acontecimientos. Efectivamente, el mundo está cambiando dramáticamente en los últimos años. Parafraseando a Keynes podríamos afirmar que cuando esperábamos lo inevitable, ha sucedido lo impensado. Hace no tanto lo inevitable era la necesidad imperiosa de afrontar dos de los retos que el capitalismo había provocado: el cambio climático y la pérdida de cohesión social como consecuencias del incremento de las desigualdades globales. Lo impensado fue una pandemia universal, el retorno de la guerra al centro de Europa con la vuelta a una demencial carrera armamentística; la aceleración del cambio tecnológico de la mano de la digitalización y la inteligencia artificial, y la manifestación abrupta de un nuevo orden que llevaba décadas fraguándose.

En tiempos de cambios profundos los límites de lo posible se ensanchan en todas direcciones, tanto reaccionarias como emancipadoras, unas veces a favor de las élites y otras en beneficio de las mayorías sociales.

La emergencia de un nuevo orden

Oímos con insistencia que estamos asistiendo a la implantación de un nuevo orden social e internacional. El retorno de Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año ha acelerado el desarrollo de unos acontecimientos que se venían cocinando a fuego lento desde hace más de tres lustros. Es cierto, el nuevo orden que se está asentando no solo es fruto de la triste actualidad que estamos viendo en los EEUU –con la caza de inmigrantes y la deriva autoritaria de Trump– o en las relaciones internacionales, donde se percibe el tránsito desde un orden multilateral basado en el derecho internacional a otro en el que prima el ejercicio más despiadado del poder y las pulsiones imperialistas. Es también algo que se venía

mostrando a lo largo de las dos últimas décadas, y que tuvo como detonante la Gran Recesión del 2008 y su clausura definitiva con la pandemia del año 2020: el consenso neoliberal que había reinado las últimas cuatro décadas ha saltado por los aires y asistimos a la definición y el asentamiento de un nuevo orden social.

Orden social y su evolución

Antes de entrar a caracterizar sus rasgos, es obligado precisar qué se entiende por «orden social». Se ha convertido en una expresión de uso común que puede significar ya cualquier cosa. Por orden social entiendo una determinada configuración de poder definida por juegos de dominación y compromiso entre clases sociales y fracciones de clase, tanto en el plano interno de los estados como en las relaciones –económicas, políticas y militares– que establecen entre ellos.¹

Los órdenes sociales emergen tras reestructuraciones profundas en el capitalismo. Desde finales del siglo XIX, momento en el que apareció el capitalismo organizado con rasgos contemporáneos, se han sucedido sucesivos órdenes sociales, cada uno de los cuales empieza y termina con una crisis estructural:

- 1) La crisis de 1890 inauguró el *orden liberal*, cuya vigencia alcanzó hasta los años veinte del siglo pasado.
- 2) La Gran Depresión de los años treinta del siglo XX abrió la puerta al *orden socialdemócrata*, también llamado «compromiso social keynesiano de izquierdas», que tuvo su momento álgido en las décadas posteriores a la segunda posguerra.
- 3) El periodo de crisis de los años 70 del siglo XX precipitó el comienzo del *orden neoliberal*.
- 4) La Gran Recesión, desencadenada en el año 2008, representa el inicio del tránsito hacia un nuevo orden social que cabe calificar de *orden autoritario nacional nativista* por los rasgos que presenta.

¹ Una definición que sigue a la propuesta por Duménil y Lévy (2014) y que he utilizado en mi libro *La gran encrucijada* (Álvarez Cantalapiedra, 2019).

Así pues, los órdenes sociales van asociados a fases del capitalismo y, por cómo se han denominado, es posible identificar la existencia de un orden político en su seno. La expresión «orden político» connota un conjunto de ideologías, políticas y arreglos institucionales (Gerstle, 2023).

Por consiguiente, si un orden social representa una configuración de poder a partir de alianzas y compromisos entre clases y fracciones de clase, y si de él se deriva un determinado orden político, entonces hay que detenerse un momento para prestar atención a dos cosas: por un lado, a la estructura social que subyace tras ese orden y, por otro, al discurso ideológico que resulta hegemónico por la capacidad de inspirar y justificar las políticas y las intervenciones públicas que se llevan a cabo.

Cada orden refleja una determinada estructura social

En el capitalismo, según Marx, la posición que se ocupa en el proceso productivo, de acuerdo con la división social fija del trabajo y la relación con los medios de producción, define las diferentes clases sociales. Marx diferenció las dos principales de su época: la clase capitalista o burguesa, constituida por los propietarios de los medios de producción, y la de los trabajadores asalariados que, al estar separados de esos medios, contribuyen al producto social con la venta de la fuerza de trabajo. Desde entonces el capitalismo se ha transformado profundamente, de manera que el capitalismo que despunta con el comienzo del siglo XX empezó a mostrar una estructura social más compleja.

Una de las caracterizaciones que ha cosechado mayor fortuna es aquella que, atendiendo al nivel de ingresos y de riqueza, describe la actual sociedad de clases a partir de la siguiente triada: las clases populares, medias y altas. Las clases populares se corresponderían con el 50 por ciento más pobre de la población, las clases medias con el siguiente 40 por ciento y las clases altas con el 10 por ciento más rico. Todas ofrecen grados variables de heterogeneidad en su interior, pero –siguiendo a Piketty (2021)– dentro de las últimas cabría distinguir, dada su relevancia e influencia sobre el conjunto social, entre «clases acomodadas» (el primer 9 por ciento, los menos ricos) y «clases dominantes» (el 1 por ciento superior).

Ahora bien, en la práctica la identidad de clase es flexible y multidimensional. No puede reducirse únicamente a un umbral de ingresos o a un nivel de posesión de riqueza. La clase social no depende solamente de la propiedad de medios de producción ni del valor de las posesiones o del nivel de ingresos, también de-

pende del nivel de estudios, de la profesión, del sector de actividad, del género, del origen regional o extranjero, o de la identidad étnica y religiosa. Aspectos, todos ellos, cambiantes y flexibles en función del contexto sociohistórico.

Teniendo presente lo anterior, pero sin caer en una flexibilidad tan abierta que conduzca a la mera subjetividad, puede ser útil describir la estructura social tal y como lo hacen Duménil y Lévy (2014). Según estos autores, en las sociedades capitalistas occidentales adquieren una relevancia creciente aquellos agentes – los cuadros técnicos y profesionales– que desarrollan una función intermediaria entre propietarios y el resto de las personas trabajadoras que constituyen las llamadas «clases populares», compuestas a su vez por los «trabajadores/as de cuello blanco» (empleados/as) y los «obreros/as».² Queda así incorporado –además del ingreso o la retribución– el nivel de cualificación y las características sociolaborales en la definición de la estructura social. Los cuadros, sin ser propietarios, tienen una vinculación con los medios de producción grande en la medida en que toman el conjunto de decisiones que implican su uso; y sin dejar de ser trabajadores, se benefician sin embargo de una fracción del plus trabajo en virtud de la relación particular que mantienen con los medios de producción, al asumir las funciones que en ellos delega el capital.

En consecuencia, según esta aproximación, la estructura social en el capitalismo contemporáneo se encontraría caracterizada básicamente por tres clases heterogéneas: capitalistas (que incluye la clase dirigente y la clase alta acomodada cuya riqueza descansa básicamente en la posesión de activos financieros), cuadros (profesionales y técnicos de alta cualificación) y clases populares (formada por empleados/as y obreros/as).

Si, como se ha comentado, la sucesión de los distintos órdenes sociales sirve para dar cuenta a lo largo del tiempo de las distintas configuraciones de poder a partir de las luchas y compromisos entre las distintas clases sociales o fracciones de clase que estructuran a la sociedad, entonces podríamos señalar que:

² Nos encontramos así, según defienden los autores, ante una auténtica clase social: «Los cuadros constituyen para nosotros algo más que una simple categoría social; una clase social, en el sentido pleno del término» (Duménil y Lévy, 2014, p. 26). Aunque se ha usado con profusión, particularmente en la literatura anglosajona, la expresión «empleados de cuello blanco» para designar a quienes desempeñan funciones de intermediación entre los capitalistas y los trabajadores de la producción, los cuadros se diferencian de los empleados por su capacidad de iniciativa, autoridad y nivel de rentas. Las fronteras existentes entre cuadros y empleados son tan numerosas como las convergencias que unen a empleados y obreros, por lo que cabría distinguir con claridad a los cuadros del resto de trabajadores y trabajadoras, que constituirían lo que se suele denominar clases populares.

- El *orden socialdemócrata* se caracterizó por lograr vincular a los cuadros con las clases populares en una alianza liderada por los primeros.
- El *orden neoliberal*, a su vez, logró un compromiso entre las clases propietarias y los cuadros en detrimento de las clases populares.
- En el actual *orden autoritario nacional nativista* lo que parece que se está tratando de forjar es una alianza ente las clases altas (acomodadas y dirigentes, con un protagonismo destacado de los tecno-oligarcas) y ciertos sectores de las clases populares. Se trata de una hipótesis para nada disparatada, si se atiende el respaldo cosechado por Trump, Marine Le Pen u otros dirigentes de la extrema derecha, tanto de la oligarquía más pudiente como de amplios sectores populares.

Cada orden refleja un determinado consenso ideológico

Un orden social connota un orden político-ideológico. En el plano del discurso, cada orden exitoso lo es porque ha logrado un cierto consenso ideológico. El orden socialdemócrata, por ejemplo, se asentó sobre un pacto implícito que concedía a las clases populares determinadas ventajas materiales (la mejora de los salarios, redes de protección social, acceso universal a ciertos espacios desmercantilizados como la educación o la sanidad, etc.) a cambio de la renuncia a determinadas reivindicaciones cualitativas (cuestionar la propiedad privada o cualquier otro aspecto sustancial del capitalismo).³ El New Deal en los EEUU y los Estados de bienestar europeos materializaron institucionalmente dichos acuerdos, mientras que la intervención pública se inspiraba en el paradigma keynesiano.

³ El intervencionismo del Estado en la economía, con sectores nacionalizados y elementos de planificación indicativa, condujo a una época con elevadas tasas de acumulación y mejora continuada en los niveles de vida de la población, caracterizada por un reparto menos desigual de la renta y la riqueza, un sector financiero al servicio de la economía productiva, un gobierno de las empresas con criterios más amplios que la simple generación de valor para el accionista, unos Estados que ofrecían protección social y cierta redistribución y una actividad económica centrada en su mayor parte en el propio territorio nacional. El movimiento obrero favoreció esos cambios, pero nunca llegó a disponer del poder, por lo que el papel de agente principal en la sociedad surgida tras la posguerra quedó reservado a los cuadros. Este orden social –también calificado de «socialdemócrata» e interpretado como un «compromiso de izquierdas»– funcionó de manera exitosa gracias a que la productividad del trabajo experimentó incrementos sin precedentes (permitiendo aumentar el poder de compra y la protección social sin afectar a la rentabilidad del capital) y a que, en el plano internacional, la vigencia del orden surgido de Bretton Woods proporcionó gran estabilidad a las relaciones económicas entre los países.

El orden neoliberal, a su vez, cuestionó el consenso anterior e implantó uno nuevo basado en la primacía: 1) del mercado frente al Estado; 2) del individuo frente a la sociedad; 3) de lo privado frente a lo público y 4) los valores de cambio frente a los valores de uso (es decir, la primacía de las mercancías frente a los bienes y servicios, como expresión del protagonismo de los mercados sobre cualquier otra forma de provisión). El paradigma económico estaba inspirado por las distintas escuelas neoclásicas y las políticas económicas sintetizadas en lo que se denominó Consenso de Washington.⁴

Concordando con el ascenso de un orden político, la ideología dominante muestra su capacidad para doblegar e integrar a la oposición hasta hacer posible un cierto «consenso». Así, por ejemplo, el neoliberalismo logró un éxito sin precedentes en este campo. Generó un discurso aceptado y asumido incluso por sus oponentes, capturados en un espacio del que no pudieron escapar. En este sentido, los gobiernos de Felipe González, Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder o Barak Obama fueron tan neoliberales como los de Margaret Thatcher o Ronald Reagan.

Cuando un orden político pierde esa capacidad de integración o se resquebraja el consenso, comienza su declive. Los consensos nunca son perfectos, pues los conflictos y contradicciones ideológicas son constantes. En el orden neoliberal hubo siempre una pugna constante entre –siguiendo las denominaciones de Gerstle (2023)– «neovictorianos» y «cosmopolitas», originando las llamadas «guerras culturales» y la polarización ideológica-afectiva en la que aún estamos.

El orden actual, en el plano ideológico, surge de las contradicciones y fracturas del consenso neoliberal. Frente a la multiculturalidad y el cosmopolitismo de las sociedades abiertas y la apuesta por la globalización presentes en el orden anterior surge ahora la reacción etnonacionalista y proteccionista. Se observa con claridad en las políticas del gobierno Trump que privilegian o discriminan a determinados grupos y sectores sociales según el origen étnico, la religión o la orientación sexual. En las relaciones económicas, la apertura internacional está siendo sustituida por una visión neomercantilista que impone un proteccionismo discrecional (Milanović, 2024). La retórica democrática interpretada por el orden neoliberal a partir de la idea de la conveniencia de contrapesos a la acción de

⁴ El término «Consenso de Washington» fue acuñado por el economista John Williamson en 1989. Se refiere a un conjunto de recomendaciones de política económica como la reducción del gasto público y disciplina fiscal, la reforma tributaria regresiva, apertura comercial irrestricta, la liberalización de los tipos de cambio, los movimientos del capital y del sector financiero, etc. para favorecer que las fuerzas del mercado organizaran la sociedad.

los gobiernos (división de poderes, autonomía de los bancos centrales y existencia de autoridades administrativas independientes con funciones atribuidas de supervisión externa) se encuentra cuestionada por tendencias autoritarias e intervencionistas (téngase presente la actitud de Trump frente a Jerome Powel, presidente de la Reserva Federal, nombrado por él mismo durante su primer mandato, o la afirmación de Trump de que no tiene más límite que su propia «moral»). Así pues, se sale de la crisis del orden neoliberal a través de un contramovimiento reactivo que supone una clausura en clave autoritaria (Fraser, 2012).

Nuevo orden internacional

El orden social y el orden internacional se relacionan de forma bidireccional. El orden social impuesto en los EEUU está configurando el nuevo orden internacional y este, a su vez, está influyendo en las configuraciones internas en cada uno de los países. Dejando al margen cómo se concreta en cada país, en el plano internacional el orden que va emergiendo de las ruinas de décadas de globalización neoliberal presenta ya algunos rasgos incontrovertibles.

En primer lugar, se caracteriza por el abandono de la diplomacia y el cumplimiento de las normas. El embrutecimiento de las relaciones internacionales no es nada nuevo, pero al menos antes se guardaban más las formas. Ahora se desdeñan el multilateralismo y los valores que encarnan instituciones como la ONU, el Tribunal Penal Internacional o la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, lo anterior no es sino la manifestación de un cambio más profundo en la manera de manejar las relaciones internacionales: la imposición de la lógica imperial y la importancia de la geopolítica con las zonas de influencia. La utilización de los aranceles como arma de presión política⁵ y la llamada Doctrina Donroe, como corolario moderno de la vieja Doctrina Monroe, representan la voluntad de los EEUU de controlar el hemisferio occidental y limitar la influencia de los competidores extranjeros (principalmente China). En tercer lugar, la imposición de la lógica de las grandes potencias frente a la cooperación internacional supone, en la práctica, un mayor peso de la acción estatal en un contexto involutivo que conduce hacia nuevas modalidades autoritarias y militaristas.

⁵ La decisión del 20 de febrero de 2026 tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de declarar ilegales buena parte de los aranceles no parece que pueda lograr revertir esta tendencia al manifestar el presidente Trump que se acogerá a otros resquicios legales para seguir imponiéndolos.

Para comprender bien el tránsito hacia este nuevo orden mundial que se desarrolla sobre la reafirmación de los intereses nacionales y en la confrontación entre potencias que encarnan diferentes tipos de capitalismo con intereses globales en pugna,⁶ no hay que perder de vista en ningún momento un contexto marcado fundamentalmente por tres acontecimientos: 1) el cambio climático y la transición energética; 2) la multipolaridad en un mundo de geografía económica cambiante y 3) la relevancia que adquiere el poder tecnológico asociado al mundo digital.⁷

En primer lugar, cada vez son más relevantes los efectos que tanto el cambio climático como la transición energética tienen en el tensionamiento de la geopolítica actual. Sirva un botón de muestra: los efectos del calentamiento global sobre el deshielo del Ártico están abriendo enormes posibilidades tanto de explotación minera como de apertura de nuevas rutas marítimas. Solo hay que mirar el mapa del Ártico para comprobar que la mayor parte de las fronteras marítimas de la zona están bajo control ruso, noruego, danés (Groenlandia) o canadiense. Así se comprende mejor el interés de Trump sobre Groenlandia y su manifestado deseo de integrar a Canadá como Estado número cincuenta y uno de la Unión.

A su vez, la transición energética tiene también claras implicaciones sobre la geopolítica al aumentar la dependencia de los minerales que hacen posible la incorporación de las renovables al mix energético. Ha quedado en evidencia que detrás de los procesos de negociación para tratar de conseguir el cese de la guerra en Ucrania pesa la disputa global por el control de recursos estratégicos. La exigencia de Trump a Ucrania, reclamando una parte sustancial de sus minerales como compensación por la ayuda militar prestada, pero sobre todo las concesiones políticas a Rusia (como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y del control de las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporíyia), ponen de manifiesto que detrás de las buenas relaciones con Putin está la pretensión de EEUU de poder acceder también a los minerales estratégicos de Siberia (particularmente a los yacimientos de Tomtor y Zashikhinskoye) con los que garantizar la seguridad en el suministro de materiales críticos y tierras raras. Por otro lado, no hace falta recordar que China controla el procesamiento del litio, el cobalto y las tierras raras, lo que le otorga una posición dominante sobre insumos claves en la transición energética y digital y en la industria militar,

⁶ Branko Milanović (2020) contraponen dos tipos de capitalismo, el capitalismo meritocrático liberal y el capitalismo político, liderados respectivamente por EEUU y China. Por cómo se configuran en la práctica podría ser más conveniente llamar, al primero, capitalismo corporativo transnacional y, al segundo, capitalismo de estado.

⁷ Sigo lo que he expuesto con algo más de detalle en Álvarez Cantalapiedra (2025: pp. 5-11).

que constituyen los ejes que articulan hoy las transformaciones productivas en Occidente.

En segundo lugar, el mundo se ha vuelto cada vez más multipolar a medida que el centro de gravedad económica se desplaza hacia Asia oriental. Los cambios en la estructura económica mundial, el declive de la economía de los Estados Unidos y el ascenso de la china (junto con la de otros países, como la India o Brasil) muestran bien a las claras cómo el viejo centro del capitalismo pierde peso relativo y relevancia en el conjunto mundial (Berzosa, 2026). La pugna de los EEUU con China por liderar la economía mundial será una de las principales claves en la comprensión de los próximos tiempos.

Finalmente, el campo tecnológico se presenta como uno de los principales frentes de batalla para quienes están impulsando este nuevo orden, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Los tecnoligarcas han financiado la campaña de Trump y, a cambio, presionan para operar libres de regulaciones en Europa y otros países (sobre todo en actividades como la inteligencia artificial). También evidencian la fusión entre el poder económico y político. Las grandes tecnológicas es posible que terminen asumiendo funciones propias del Estado, particularmente en lo que se refiere a los sistemas educativos administrados por plataformas de aprendizaje automático, en los sistemas de salud gestionados por algoritmos predictivos, en tribunales digitales con bases de datos jurisprudenciales que, ayudadas de la inteligencia artificial, permitan resolver litigios en tiempo real, o asumiendo capacidades en los capítulos de defensa y seguridad nacional (Musk ya ha mostrado su influencia al desplegar su red de comunicaciones por satélites Starlink en Ucrania). Acemoglu y Johnson (2023) han resaltado el momento crítico que vivimos en cuanto a las relaciones de la tecnología con la democracia y la gobernanza internacional.

Últimas consideraciones

La pérdida de hegemonía de los EEUU viene acompañada de su reafirmación imperial. El dominio internacional de una potencia suele tener como componentes el unilateralismo y la hegemonía. El unilateralismo encarna la facultad de configurar las reglas del juego en las relaciones internacionales en función de los propios intereses, pero la hegemonía significa además tener la capacidad de hacerlo sin recurrir a la fuerza, pudiendo apelar simplemente a la persuasión y presión política. Todo indica que el unilateralismo norteamericano ha dejado de sostenerse sobre la hegemonía y que, sin ella, no le cabe ya más recurso que apelar al lenguaje y a la lógica de la fuerza. El abandono de herramientas de *soft*

power (como la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID) y la reclamación constante al incremento del gasto militar en Europa así lo ponen de manifiesto. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que se expande por Oriente Medio y amenaza con hundir a toda la región en el caos y golpear la economía mundial, se lleva a cabo en el momento más violento vivido desde la Guerra Fría.

En consecuencia, el orden emergente –sostenido sobre una nueva alianza de fracciones de clase y un nuevo consenso ideológico– presenta rasgos preocupantes en cuanto que parece encaminado, más que a afrontar los desafíos que tenemos planteados (con la crisis ecosocial en el centro), a cerrar las vías del multilateralismo y la democracia, deslizándose hacia formas de imposición unilateral y autoritarias –tanto en el interior de cada sociedad como en el plano internacional– que amenazan seriamente a la democracia y la paz.

Referencias bibliográficas

- ACEMOGLU, Daron y JOHNSON, Simon (2023): *Poder y progreso*, Deusto.
- ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, Santiago (2019): *La gran encrucijada. Crisis ecosocial y cambio de paradigma*, Ediciones HOAC.
- ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, Santiago (2021): «Repensar la economía en la crisis ecosocial. Esbozos para una transición ecosocialista», *Nuestra Bandera*, n.º 251 (segundo trimestre), pp. 33-44.
- ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, Santiago (2025): «Orden imperial y amenazas a la paz y la democracia», *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, n.º 169, FUHEM, pp. 5-11.
- BERZOSA, Carlos (2026): «Los cambios en la estructura económica mundial y su influencia en la geopolítica internacional (II)», *nuevatribuna.es* [<https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/capitalismo-cambios-estructura-economia-mundial-geopolitica-internacional/20260224193252247348.html>, 24 de febrero de 2026].
- DUMÉNIL, Gérard y LÉVY, Dominique (2014): *La gran bifurcación*, Catarata/FUHEM.
- FRASER, Nancy (2012): «Reflexiones en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista», *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, n.º 118, FUHEM, pp. 13-28.
- GERSTLE, Gary (2023): *Auge y caída del orden neoliberal*, Península.
- MILANOVIĆ, Branko (2020): *Capitalismo, nada más*, Taurus.
- MILANOVIĆ, Branko (2024): «The ideology of Donald J. Trump», *Global Inequality and More 3.0* [<https://branko2f7.substack.com/p/the-ideology-of-donald-j-trump>, 12 de noviembre 2024].
- PIKETTY, Thomas (2021): *Breve historia de la igualdad*, Deusto.

De Nixon a Trump: auge y ruptura de la globalización hasta ahora conocida

Manuel Gracia Santos

Profesor de Economía de la UCM

Investigador principal del Real Instituto Elcano

Introducción

Durante las últimas décadas el mundo ha vivido bajo el paradigma de un proceso de globalización cuyos rasgos básicos parecen ahora estar en cuestionamiento. Un periodo caracterizado, entre otras cuestiones, por una creciente interdependencia entre países que situaba la apertura externa y el libre comercio como ejes del desarrollo. Pero la globalización ha ido configurando también vínculos entre países de otra naturaleza –como los culturales, científico-tecnológicos o interpersonales– que parecían definir, aunque con muchos matices, un mundo menos militarizado y de relativa paz mundial. Así, el orden internacional evolucionó desde la bipolaridad de los años 90 hacia una configuración multipolar más compleja con nuevas potencias, con China a la cabeza, y un número creciente de países que reclamaban voz propia en la cada vez más densa red de organismos multilaterales que parecían configurar mecanismos de gobernanza común.

Pero el año 2025, coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, supuso un punto de inflexión en la globalización tal y como la habíamos conocido. Estados Unidos (EEUU) reacciona ante una pérdida de poder relativo cuestionando un orden internacional que percibe ahora contrario a sus intereses nacionales. Los pilares esenciales de esa etapa son así cuestionados, paradójicamente, por el que ha sido arquitecto institucional y potencia hegemónica. Un giro de guion con notables paralelismos con el denominado «shock de Nixon» de los años 70, que sentó precisamente las bases de la globalización neoliberal. Si en aquel momento el cuestionamiento se producía en el marco de la Guerra Fría, hoy el escenario es de una posible nueva bipolaridad entre EEUU-China o, al menos, de una configuración más compleja con diferentes áreas geográficas y diversos centros de poder.

Esto supone un profundo cambio en el relato hasta ahora conocido de la globalización, que algunos interpretan en términos de fragmentación geográfica o incluso reversión del proceso. Pero el concepto de globalización es un término con significados variables, lo que dificulta el diagnóstico y las perspectivas. En este artículo se hace uso del Índice Elcano de Presencia Global, una propuesta

metodológica que cuantifica el volumen y naturaleza de la proyección exterior de los países y permite concretar respuestas a algunas de las preguntas centrales del debate actual: ¿estamos realmente ante el inicio de un periodo de desglobalización?, ¿qué elementos se mantienen de la globalización hasta ahora conocida y cuáles son novedosos?, ¿estamos ante una nueva bipolaridad?

1. De Nixon a Trump: fisuras y fractura del relato de la globalización conocida

La globalización hasta ahora conocida, que puede situarse aproximadamente entre 1990 y 2025, hunde sus raíces en las transformaciones iniciadas en la década de 1970. El denominado «shock de Nixon» representa la ruptura del orden de posguerra, articulado en torno a los Acuerdos de Bretton Woods, e inicia una fase de reconfiguración del sistema internacional que se consolidaría en décadas posteriores bajo el paradigma neoliberal. Es evidente que el mundo actual difiere profundamente del de entonces, pero existen paralelismos notables entre ese momento histórico y lo que muchos ya califican como el «shock de Trump», fechado en el anuncio generalizado de aranceles unilaterales en el denominado *Liberation day*. El punto en común fundamental es que en ambos casos EEUU percibe que el sistema internacional que ayudó a construir no es ya funcional a sus intereses nacionales y decide romperlo unilateralmente, ignorando los foros multilaterales existentes.

En 1971, el diagnóstico fundamental era que otras economías, por entonces Japón y Europa, se beneficiaban de un dólar sobrevalorado que generaba crecientes déficits comerciales a EEUU. Nixon señalaba que estos países, «en gran medida gracias a nuestra ayuda, han recuperado su vitalidad. Se han convertido en fuertes competidores y celebramos su éxito. Pero ahora que son económicamente fuertes, ha llegado el momento de que asuman la parte que les corresponde de la responsabilidad de defender la libertad en todo el mundo. (...) Ha llegado el momento de que EEUU asuma un nuevo papel en el mundo» (Nixon, 1971). El orden post Bretton Woods y el propio diseño del FMI se fundamentaban en la propuesta estadounidense, el denominado Plan White, que establecía un patrón de cambios oro con el dólar como principal divisa mundial. Junto con la ruptura monetaria –simbolizada por la célebre afirmación del entonces secretario del Tesoro John Connally «el dólar es nuestra divisa, pero es vuestro problema»–, se adoptaron medidas proteccionistas, incluyendo la imposición de aranceles a socios como Canadá, en una estrategia amplia de defensa de la posición estadounidense en un ya nuevo orden internacional. Este episodio inició una etapa de expansión sin precedentes del sistema financiero internacional, que requería

del acompañamiento de apertura externa y libre movilidad de los flujos financieros y comerciales, convirtiéndose en uno de los rasgos definitorios de la globalización contemporánea.

El 26 de abril de 2025 fue señalado por el propio Trump como «uno de los días más importantes de la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica», que «será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que se recuperó el destino de EEUU» (Trump, 2025). De nuevo se señala al supuesto mayor beneficio de otros países a costa del bienestar estadounidense («mientras otras naciones se enriquecían y se volvían poderosas, en gran medida a costa nuestra (...) cómo líderes extranjeros nos robaban nuestros empleos, cómo estafadores extranjeros saqueaban nuestras fábricas y cómo oportunistas extranjeros destrozaban nuestro otrora hermoso sueño americano») a través de los desequilibrios comerciales, que «han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional» (Trump, 2025). Y aunque la cuestión se focaliza en la dimensión comercial y en el ascenso de China, el diagnóstico se extiende al conjunto del entramado institucional y a su reforma unilateral. EEUU no puede «seguir haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 50 años» (Trump, 2025), porque considera que «el orden mundial de posguerra no sólo está obsoleto; ahora es un arma utilizada contra nosotros» (Rubio, 2026).

Son muchas las diferencias que separan ambos momentos históricos, pero hay una significativa. Nixon buscaba una reforma del sistema internacional que mantuviese la hegemonía estadounidense en una nueva multipolaridad, que derivó la expansión del paradigma neoliberal bajo el denominado Consenso de Washington, basado en la liberalización, la apertura externa y la reducción del papel del Estado. Trump tiene en cambio un planteamiento más rupturista que pretende marcar el inicio de una etapa de fragmentación, competencia y desacoplamiento del orden internacional existente. La crítica se dirige así a los pilares básicos del ideario desde el fin de la Guerra Fría, «la euforia de este triunfo nos condujo a una peligrosa ilusión: la de haber entrado, cito, en «el fin de la historia» (...) Que los lazos creados únicamente por el comercio reemplazarían ahora la nacionalidad. Que el orden global basado en normas, un término manido, reemplazaría ahora el interés nacional» (Rubio, 2026). Desde los años 90 se venía produciendo una desmilitarización relativa de las relaciones internacionales y un mayor predominio de mecanismos de cooperación internacional. Aunque los conflictos armados no desaparecieron, su naturaleza parecía distinta a los de la etapa bipolar, siendo remota la posibilidad de una nueva guerra mundial. A medida que crecían las interdependencias entre países menor parecían los incentivos de un conflicto armado, invitando a pensar en un mundo sin ideologías (Fukuyama, 1992) en el

que la revolución tecnológica de las comunicaciones diluyó la cuestión geográfica (Friedman, 2005). Así, las bases teóricas del enfoque neoliberal se concretaban en políticas de apertura externa, libre comercio y facilidades a los movimientos de capital, consolidando la idea de que la interdependencia económica era un mecanismo de seguridad internacional.

La globalización se presentaba de este modo como una oportunidad de desarrollo, un proceso desideologizado y un mecanismo de convergencia entre países. Para las economías periféricas la estrategia recomendada era clara: apertura externa, atracción de inversión extranjera directa y reformas estructurales orientadas al mercado. Y con ello la tradicional división internacional del trabajo fue transformándose fruto de la creciente fragmentación productiva y de los procesos de deslocalización industrial, surgiendo nuevos polos manufactureros en la periferia mundial y procesos de terciarización en los centros. Se consolidó así el concepto de hiperglobalización, entendido como un proceso autorregulado, casi natural e irreversible, cuyo avance no podía detenerse, sino únicamente gestionarse mediante estrategias de adaptación. Esta visión asumía lo global como una dimensión única, una suerte de geografía integrada y homogénea. Sin embargo, desde una perspectiva geográfica, la globalización no implicó solo una mayor integración mundial, sino también el fortalecimiento de dinámicas regionales. A lo largo de las últimas décadas se consolidaron proyectos de integración como la Unión Europea, el NAFTA o la progresiva institucionalización de ASEAN, como mecanismo de competencia en un entorno internacional cada vez más abierto, precisamente en las regiones de mayor grado de desarrollo. De hecho, la utilidad del propio concepto «global» está crecientemente cuestionada para caracterizar el mundo de las últimas décadas precisamente por la distorsión que genera en la perspectiva geográfica (O'Neill, 2024).

Todos estos elementos moldearon durante décadas un relato desde Occidente marcadamente optimista sobre la globalización, al que se le presuponía la capacidad de generar ganancias generalizadas, que ha sido progresivamente sustituido por una visión más pesimista y conflictiva. Pero la fractura del relato a la que hoy asistimos es consecuencia de fisuras acumuladas durante años. La crisis europea de 2010 marcó un primer punto de inflexión. Mientras en EEUU y Europa comenzaba, tras la crisis financiera global, una percepción crítica centrada en la desindustrialización y su influencia en el débil crecimiento económico, muchas economías asiáticas continuaron registrando elevadas tasas de expansión y profundizando su inserción internacional. En particular, China, apoyada en políticas industriales activas y en un papel central del Estado, logrando consolidarse en segmentos de mayor valor añadido dentro de sectores tecnológicos estratégicos con una marcada estrategia de orientación exportadora hacia el

resto del mundo. Y la pandemia de 2020 evidenció vulnerabilidades externas y disrupciones en múltiples cadenas de suministro. La dependencia de aprovisionamientos críticos –desde material médico hasta componentes tecnológicos– y los riesgos logísticos asociados a la dispersión geográfica de la producción son hoy problemas de seguridad económica¹. Como respuesta, junto con el giro proteccionista, se ha producido una recuperación de la política industrial y del concepto de autonomía estratégica, orientada a reforzar capacidades productivas nacionales en sectores considerados estratégicos². Estas políticas buscan en última instancia reconstruir capacidades productivas, reforzando la soberanía y la autonomía, en unos parámetros que recuerdan al concepto de protección de industria naciente y que relacionan el concepto de seguridad nacional con los procesos de apertura externa.

En este contexto, ya desde 2010 pero aceleradamente desde la pandemia, se ha extendido el debate sobre una posible ralentización (*slowbalization*), incluso la reversión (*deglobalization*), de la globalización y el diagnóstico en base a ganadores y perdedores del proceso. Este cambio de percepción se refleja también en los procesos de integración regional, donde la salida del Reino Unido de la UE o el cambio de denominación del TLCAN, hoy USMCA, reflejan el cuestionamiento de los equilibrios y alianzas previas. Al mismo tiempo, ha cobrado mayor protagonismo la cara más dura de la globalización, su dimensión militar. La invasión de Ucrania supuso un punto de inflexión y ha consolidado una ruptura con Rusia que hoy parece difícilmente reversible. A ello se suman otros focos de inestabilidad, especialmente en Oriente Medio, donde se vuelve a poner de relieve la dimensión geopolítica de los recursos energéticos y su papel central en las relaciones internacionales. El uso explícito de la fuerza, subordinado a intereses nacionales, es otro signo de la voluntad de EEUU de romper los marcos multilaterales existentes.

Hoy la interdependencia económica, que durante décadas fue interpretada como un factor de estabilidad y seguridad internacional, se considera una fuente de vulnerabilidad y la geopolítica que reordena los vínculos internacionales. Así, el retorno de la historia y de la geografía simboliza una ruptura con algunos de los elementos básicos del orden hasta ahora conocido.

¹ Unos riesgos geográficos alimentados también por otras crisis logísticas, como en el caso del accidente nuclear de Fukushima en 2011, el accidente del buque Ever Given en el canal de Suez en 2021 o, más recientemente, los problemas en el canal de Panamá asociados a la sequía.

² Así lo evidencian iniciativas recientes como la *Infrastructure Investment and Jobs Act*, la *Inflation Reduction Act* o la *CHIPS and Science Act* en EEUU, así como la *European Chips Act* o *REPowerEU* en la UE, entre otras medidas.

2. ¿Realmente nos estamos desglobalizando?

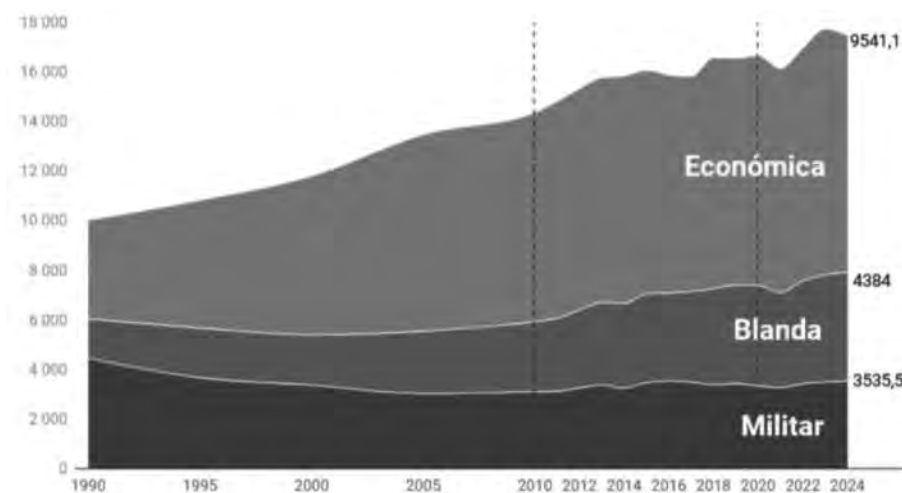
Los datos del relato

A partir de la crisis de 2010 comienzan a extenderse dudas sobre el proceso de globalización y su posible reversión, hoy ya consolidadas en el debate público. Pero ¿el mundo se está realmente «desglobalizando»? La primera cuestión que aclarar es a qué nos referimos con el término globalización, dado que es un término polisémico empleado desde diferentes disciplinas (Oliví y Gracia, 2020). Es evidente que es un proceso de una naturaleza eminentemente económica, en la medida en que los flujos comerciales y financieros son los primeros medios de articulación externa. Pero la globalización tiene también una dimensión militar, con mayor protagonismo antes de los años 90 pero que cobra relevancia en la actualidad. Y, en los últimos años, ha cobrado relevancia el concepto de globalización blanda, en contraposición a la dura, como forma de poder no-coercitivo (Nye, 2004).

Una forma de analizar cuantitativamente la evolución y naturaleza diversa de la globalización es el Índice Elcano de Presencia Global (Oliví y Gracia, 2023). Un índice sintético que ofrece una propuesta metodológica para medir la proyección exterior de los países a través de 17 variables agrupadas en tres dimensiones (económica, militar, blanda³). Al ofrecer resultados desde 1990 permite ver la evolución del proceso tanto desde el punto de vista de su volumen como de su naturaleza, según la relevancia de cada dimensión. Y al calcularse para 150 países, cubre más del 98% del PIB y población mundial. Ello posibilita contrastar la narrativa de desglobalización con datos concretos.

³ Dentro de la dimensión blanda se incluyen los indicadores de migraciones, turismo, deportes, ciencia, tecnología, educación, cultura, información, cooperación al desarrollo y cambio climático. Para más detalles metodológicos véase Oliví y Gracia (2023).

Gráfico 1
Evolución agregada del Índice Elcano de Presencia Global



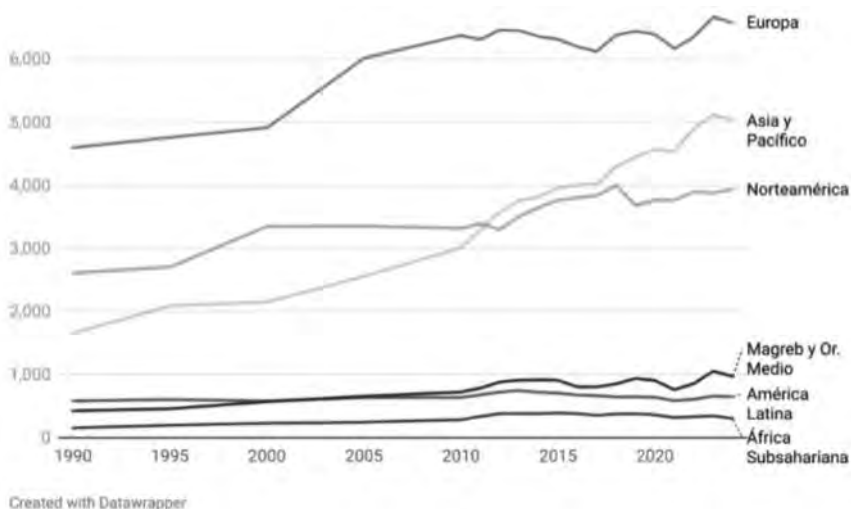
Fuente: Gracia y Fernández (2025).

El gráfico 1 muestra la evolución agregada del Índice para los 150 países para los que se calcula. Los resultados evidencian la importancia y el protagonismo de la dimensión económica, pero también cambios significativos respecto a la globalización hasta ahora conocida. En primer lugar, el impacto económico de la crisis de 2010 genera un descenso en el ritmo de crecimiento de la globalización, incluso con reducciones puntuales de la misma, lo que no implica necesariamente menor globalización que en los años 90. En segundo lugar, un creciente protagonismo de la dimensión blanda precisamente a partir de 2010, que es interrumpido por la pandemia. En tercer lugar, una recuperación de la dimensión militar, todavía tímida, pero que revierte la tendencia de desmilitarización registrada hasta ahora.

Pero además de un proceso de naturaleza diversa, la globalización es un proceso heterogéneo desde el punto de vista geográfico (gráfico 2), que se concentra fundamentalmente en las tres regiones más desarrolladas –Europa, Asia y Norteamérica–. Unos resultados que evidencian la relevancia de los procesos de integración regional en este periodo, tanto en la mayor intensidad de los vínculos

entre sus miembros como entre regiones, que enfatizan el carácter específicamente geográfico que en realidad ha tenido aquello que hemos venido denominando global. Mientras, otras regiones periféricas registran una evolución sustancialmente menor, con una diferencia creciente con el tiempo, reflejando un desigual impacto geográfico de la globalización.

Gráfico 2
Evolución de Presencia Global absoluta por regiones, 1990-2024

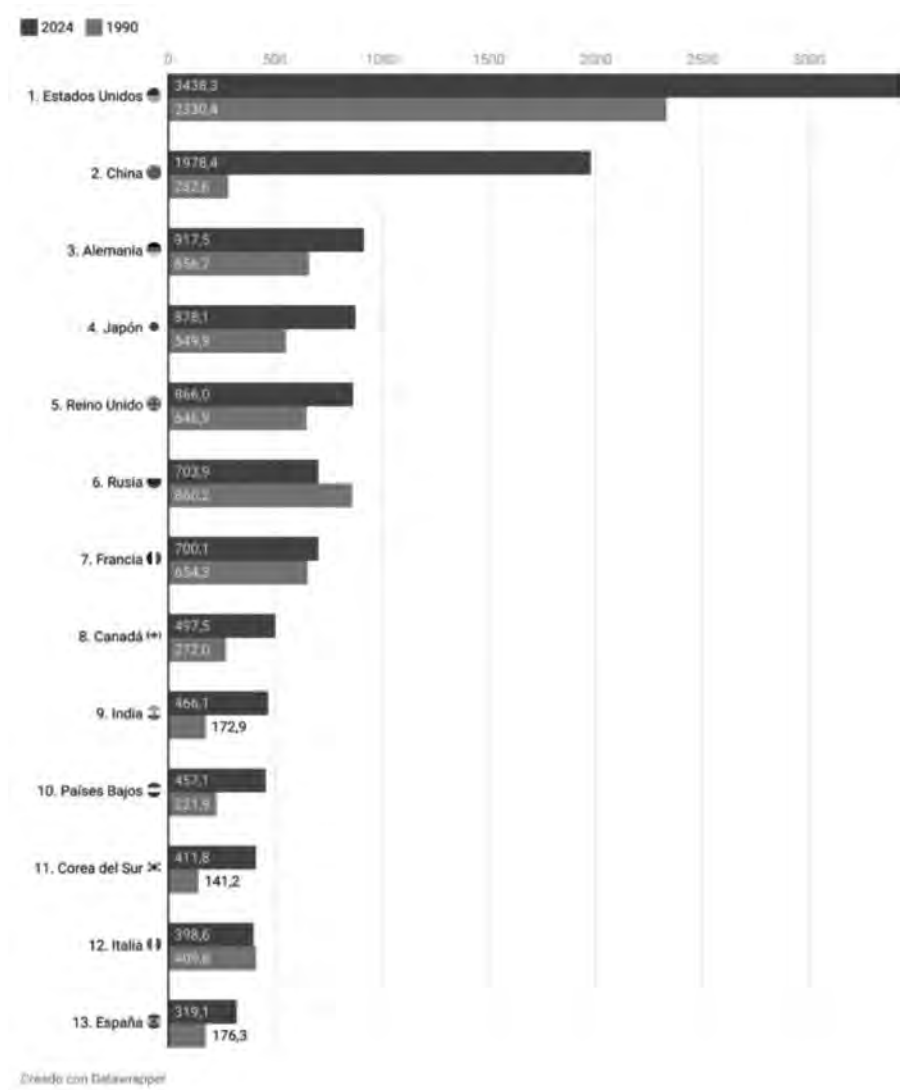


Fuente: Gracia y Fernández (2025).

Otro de los ejes centrales del relato sobre la globalización es la transición desde el mundo bipolar de los 90 –entre EEUU y la URSS– hacia un escenario multipolar, con crecientes dudas sobre el regreso de una nueva bipolaridad. La rivalidad entre EEUU y China es hoy el centro de un debate en el que uno se percibe como damnificado y el otro es señalado como principal beneficiario. Pero, si bien es evidente y conocido el ascenso de China en las últimas décadas, es difícilmente sostenible que EEUU haya sido perjudicado por la globalización contemporánea.

Como muestra el gráfico 2, EEUU encabeza la clasificación de presencia global –en todos los años y dimensiones–, mientras que China ocupa la segunda posición desde 2010. En líneas generales, todos aumentan su proyección exterior pero los países asiáticos lo han hecho a un ritmo muy superior que los europeos. Tan solo Rusia e Italia presentan un valor absoluto de presencia global inferior al registrado en 1990.

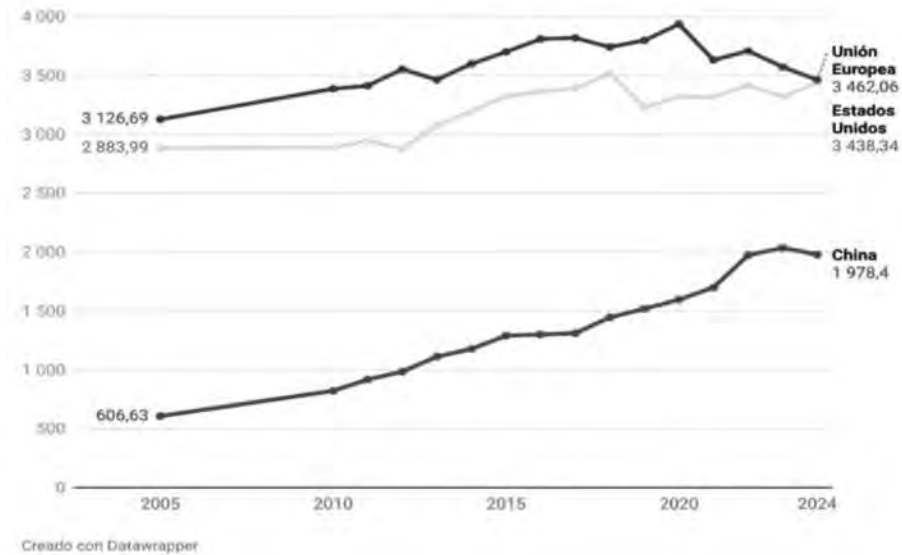
Gráfico 3
Top 13 de Presencia Global en 2024 y sus valores en 1990 y 2024



Fuente: Gracia y Fernández (2025).

¿Vivimos entonces en un mundo multipolar o en una nueva bipolaridad? En este aspecto, el Índice otorga resultados contradictorios. Por un lado, la brecha que separa todavía a EEUU y China es de una magnitud considerable (gráfico 4), pero de magnitud muy similar a la que presentaban EEUU y la entonces URSS (1460 y 1470 puntos de diferencia, respectivamente). Pero en cualquier caso el valor de EEUU es superior al que registraba en los 90 y crece en los últimos años, mientras que China registra por primera vez en la serie descensos absolutos. Además, durante este periodo, la UE se ha consagrado como una nueva entidad geopolítica, con vínculos crecientes entre sus miembros y hacia el exterior del espacio comunitario. Así, la presencia exterior de la UE –fuera de sus fronteras– ha registrado desde 2005 un valor superior al de EEUU, aunque mermado en los últimos años, entre otros motivos por la salida del Reino Unido.

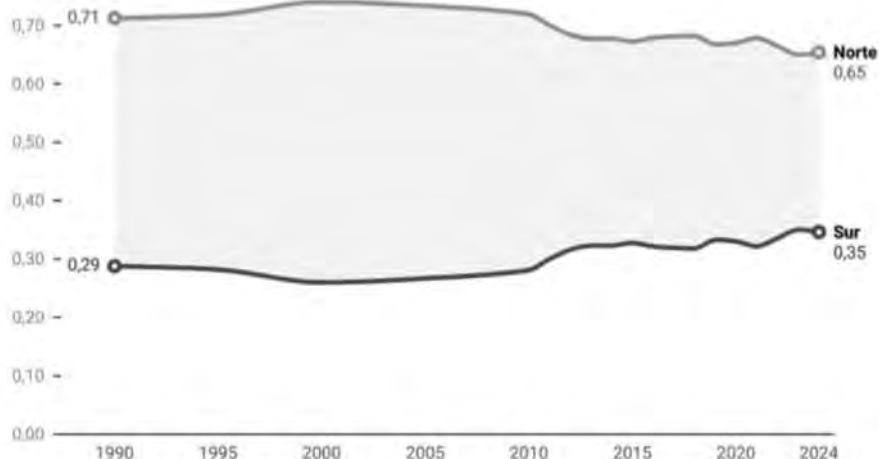
Gráfico 4
Evolución comparada de la presencia global de EEUU, China y la UE



Fuente: Gracia y Fernández (2025)

Si ampliamos el foco y agregamos todos los países del hoy denominado Sur global y los comparamos con la evolución del Norte, se constata también la importante diferencia entre ambos bloques (gráfico 5). Bien es cierto que se ha reducido, particularmente desde 2010, pero tímidamente. Si en 1990, del agregado mundial de presencia global un 71% correspondía a los países del Norte y un 29% a los del Sur, en 2024 varía a un 65% y 35%, respectivamente.

Gráfico 5
Cuotas de presencia global, Norte y Sur Global



En este gráfico se consideran sur global los países de América Latina, África, Asia (excluidos Israel, Japón y Corea del Sur), Oceanía (excluidos Australia y Nueva Zelanda) y Rusia y repúblicas de Europa Central.

Gráfico: Manuel Gracia y Blanca González - Fuente: Índice Elcano de Presencia Global - Creado con Datawrapper

Fuente: Gracia y Fernández (2025).

3. ¿Un nuevo relato?

Los datos del Índice Elcano de Presencia Global matizan sustancialmente el relato extendido sobre el diagnóstico actual de la globalización. En primer lugar, no permiten sostener la idea de que el proceso esté revertiéndose en términos absolutos, aunque sí cambiando su naturaleza hasta ahora conocida. En segundo lugar, muestran el liderazgo de EEUU en todo el periodo y el ascenso de

China, pero también la diferencia que todavía les separa y el rol que puede desempeñar la UE en el debate sobre una nueva bipolaridad. En tercer lugar, muestran que la globalización es un proceso de impacto geográfico heterogéneo, concentrando en tres regiones, y en el que la asunción del ascenso del Sur global no parece reflejarse en resultados verificables.

Pero es evidente que el relato ya ha cambiado, y que el mundo de hoy es muy diferente al de los años 90. La necesidad de reformar las instituciones multilaterales es compartida incluso por el actual secretario general de la ONU⁴ y la ruptura unilateral recuerda en parte al giro de Nixon, pero lo que hoy propone EEUU no es la reforma del sistema conocido sino su progresiva supresión. Una ruptura endógena, en la que la potencia hegemónica desestructura el orden existente con el fin de moldearlo para maximizar sus intereses nacionales, aun a costa de debilitar los marcos multilaterales existentes incluso en lo que se refiere a sus relaciones con los países hasta ahora considerados aliados.

En el plano económico, el paso de la interdependencia como mecanismo de seguridad a un signo de vulnerabilidad externa; el concepto de autonomía estratégica; el cuestionamiento del libre comercio y de la apertura externa como vía de desarrollo; el papel del Estado y de la política industrial, suponen en última instancia la recuperación de la cuestión ideológica y geográfica como elementos explicativos del mundo contemporáneo y ofrecen dudas sobre la vigencia del paradigma neoliberal de la globalización. Así el eje «países desarrollados-en desarrollo» ha sido sustituido por la lógica del Norte-Sur global, donde emergen nuevas formas de articulación externa y alianzas. Incluso la perspectiva sobre los espacios de integración regional como mecanismo de integración económica parece derivar hacia el concepto de áreas de influencia, que remite a las formas clásicas de imperialismo donde se hace explícita la voluntad de control geoeconómico.

Durante las últimas décadas, las guerras en el mundo ni mucho menos desaparecieron, pero parecían inscribirse en la existencia de un derecho internacional reglado por organismos multilaterales a los que se les suponía la capacidad de reducir la relevancia de la dimensión militar en las relaciones internacionales. Hoy la guerra ha vuelto al primer plano de la política exterior americana, junto con la renuncia a seguir ofreciendo «el sueño americano». Los cambios en políticas migratorias, educativas, de cooperación al desarrollo o de liderazgo en la lucha

⁴ Son numerosas las ocasiones en las que António Guterres se ha referido a la obsolescencia del actual sistema internacional desde que asumió el cargo.

contra el cambio climático, implican un cambio profundo en algunos de los instrumentos centrales de su tradicional poder blando. Todo ello supone no solo la redefinición de su política externa hacia el aislacionismo y la revisión de sus alianzas, sino también el cuestionamiento de los pilares básicos que caracterizaron la globalización conocida. No implica necesariamente que los vínculos ya existentes entre países en muy diferentes planos puedan eliminarse y comenzar así un periodo de desglobalización, pero sí que se esté produciendo una fractura de la globalización conocida. No hay menos globalización en términos absolutos, sino una globalización más dura y menos homogénea geográficamente.

El resurgimiento del proteccionismo comercial unilateral y la renovada centralidad de la política industrial constituyen uno de los rasgos más visibles de la reconfiguración actual hacia una mayor preocupación por los riesgos externos, la seguridad de suministro y la ubicación geográfica que, en un plano de geografía productiva, podría derivar en una paulatina transformación del modelo de fragmentación y deslocalización masiva de décadas previas. Así, emergen nuevos conceptos –como el *reshoring*, *nearshoring* o *friendshoring*– vinculados a objetivos de autonomía estratégica y reducción de riesgos que, si bien son poco novedosos, reflejan esa recuperación de la cuestión industrial y tecnológica. Este giro responde también a la creciente evidencia del impacto negativo que la globalización ha tenido sobre amplias capas de la clase media industrial en Europa y EEUU, donde la ausencia de estrategias de reconversión o de desarrollo de nuevas capacidades industriales ha contribuido a la pérdida de empleo industrial, al estancamiento salarial y a la erosión del consenso social en torno a los beneficios de la apertura externa. No obstante, estos efectos han sido heterogéneos y requieren un análisis matizado que evite interpretaciones simplistas, y la tradicional visión país-sector resulta cada vez menos útil para entender la realidad actual de los procesos productivos. La complejidad de las cadenas globales de valor supera la dicotomía entre industrialización y terciarización y obliga a replantear los debates clásicos sobre la política industrial.

Y además conviene tener en cuenta que la reversión completa de buena parte de las deslocalizaciones productivas es en muchos casos algo inviable. No todo puede volver; entre otras razones porque no todo se deslocalizó, sino que ha surgido durante este tiempo, particularmente en las cadenas más tecnológicas asociadas a la transición energética y a la digitalización. El caso del vehículo eléctrico ilustra bien estas limitaciones, donde las empresas chinas dominan ya la producción mundial, tanto de vehículos como de baterías, e ignorar esta realidad no fortalecería la autonomía estratégica, sino que la debilitaría. Si no es factible desarticularse, solo es posible buscar la mejor forma de articularse y el contexto de recuperación de la cuestión industrial y las limitaciones al libre comercio es

favorable para establecer acuerdos con requisitos de localización, compromisos laborales o integración en redes de proveedores nacionales, que puedan generar externalidades positivas.

De hecho, el riesgo tecnológico externo asociado al auge de un país asiático ocurrió también en los años 70 con el auge de la producción automotriz de Japón, que generó tensiones proteccionistas y preocupación por el empleo industrial europeo en línea con los debates actuales. La respuesta combinó instrumentos de proteccionismo comercial con mecanismos más flexibles, como las restricciones voluntarias a las exportaciones, a cambio de permitir la inversión japonesa en Europa. Ello permitió preservar el empleo en el sector, pero también una paulatina adopción forzosa a las nuevas técnicas de organizar la producción asociadas al toyotismo, que en buena medida implicaron un paulatino empeoramiento del empleo industrial. Pero frente a disrupciones tecnológicas externas, el aislacionismo es inviable y no hay más alternativa que fórmulas de cooperación estructurada basadas en la confianza y el diálogo.

El mundo de hoy es ya un mundo diferente y los cambios que han ocurrido no son reversibles. Mientras que en los años setenta el mundo multipolar estaba aún en proceso de gestación, en la actualidad constituye una realidad efectiva, con independencia de su grado de reconocimiento en los marcos multilaterales. El intento de gobernanza multilateral parece dar paso a un mundo en torno a diferentes centros o polos –como EEUU, China y la UE– con capacidad de influir a terceros de manera diversa y con relaciones entre sí complejas y asimétricas. Y en este nuevo mundo los riesgos globales no desaparecen, sino que se intensifican.

Referencias bibliográficas

- FRIEDMAN, Thomas (2005): *La tierra es plana*, Madrid: Ediciones Martínez Roca.
- FUKUYAMA, Francis (1992): *El fin de la historia y el último hombre*, Barcelona: Planeta.
- GRACIA, Manuel y GÓNZÁLEZ, Blanca (2025): «Globalización en transición: de la interdependencia a la rivalidad geopolítica. Análisis de los resultados de la edición 2025 del Índice Elcano de Presencia Global», *ARI*, 73/2025, Real Instituto Elcano.
- NIXON, Richard (1971): *Address to the Nation Outlining a New Economic Policy: The Challenge of Peace*. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-the-nation-outlining-new-economic-policy-the-challenge-peace>

- NYE, Joseph (2004): «Soft Power and American Foreign Policy», *Political Science Quarterly*, Volume 119, Issue 2: 255-270 <https://doi.org/10.2307/20202345>
- OLIVIÉ, Iliana y GRACIA, Manuel (2024): «Forjar alianzas en un mundo fragmentado y geopolítico. Estados Unidos según el Índice Elcano de Presencia Global». *ARI*, 20/2024, Real Instituto Elcano.
- OLIVIÉ, Iliana y GRACIA, Manuel (2023): «Índice Elcano de Presencia Global. Metodología», *Documento de Trabajo*, 4/2023, Real Instituto Elcano.
- OLIVIÉ, Iliana y GRACIA, Manuel (2022): «España y Portugal en el mundo: análisis basado en el Índice Elcano de Presencia Global». En Olivie, Rodrigues, Gracia y Seabra (coords.): *España y Portugal en la Globalización. 500 años de la primera circunnavegación*.
- O'NEILL, Shannon K. (2024): *The globalization myth: why regions matter*, Yale University Press.
- RUBIO, Marco (2026): *Remarks at the Munich Security Conference*. <https://www.astrid-online.it/static/upload/marc/marco-rubio-remarks-at-msc-2026.pdf>
- TRUMP, Donald (2025): *Remarks at Liberation Day Event, April 2, 2025*. <https://singjupost.com/transcript-of-president-trump-remarks-at-liberation-day-event-april-2-2025/>

Hacia un neoliberalismo de guerra

Enrique Vega Fernández

Coronel de Infantería (retirado)

Licenciado en Psicología y doctor en Paz y Seguridad internacionales

1. Introducción

Las fechas concretas son en términos generales tramposas, pero nos pueden ayudar a enmarcar y relacionar acontecimientos. Por eso me decido a empezar por la del 1 de septiembre del pasado año 2025, día en el que la Armada estadounidense ataca en aguas internacionales del Caribe, frente a las costas de Venezuela, a una lancha procedente de este país, matando a sus once indefensos y sorprendidos tripulantes, a los que posteriormente (una vez asesinados en alta mar) se les acusará de pertenecer a una organización narcotraficante, el Tren de Aragua, sin que se aportaran pruebas ni de la titularidad de dicha organización, ni de la pertenencia de la tripulación a ella, ni de si realmente transportaban estupefacientes (todo, personas y mercancías, habían quedado en el fondo del mar).

Un primer episodio, que no será sino el primero de una larga lista de ataques del mismo tipo y en parecidas circunstancias (Operación *Lanza del Sur*), ampliado posteriormente a las costas colombianas del Pacífico, que llevará, incrementando paulatinamente la presión y la agresividad, al bombardeo, la noche del 3 de enero de 2026, de ciertas áreas civiles y militares de Venezuela, como parte del dispositivo que permitiera el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Descabezado el país y antes, incluso, de que sus máximas autoridades pudiesen siquiera reaccionar mínimamente a la nueva situación, Estados Unidos, por boca de su propio presidente, el sempiterno Donald Trump (que ha llegado a autodefinirse como *Acting President* de Venezuela), anunciaba que su pretensión era gobernar Venezuela para reconstruirla y controlar su producción petrolífera y mineral durante el tiempo que hiciera falta (¿no recuerda esto a la vieja definición de «protectorado» de los tiempos coloniales? Nada nuevo bajo el sol). Unas altisonantes y repetidas declaraciones que nos permiten ver el primigenio y, al mismo tiempo, objetivo final de todas las argumentaciones justificadoras de la agresividad contra Venezuela que suponían las acusaciones de dictadura, de represión, de narcotráfico y de corrupción, que, sin necesidad de que no fueran verdad, no eran la verdad, no han sido la verdadera causa del ilegal e injustificado ataque estadounidense, cuyo objetivo real, cada vez más

claro, es el control (una forma de apropiación como otra cualquiera) de ciertos de sus recursos naturales (hidrocarburos y minerales concretamente). Ya nos alertó el bueno de Clausewitz, cuidado con la «niebla de la guerra».

Pero una golondrina no hace verano. Operaciones, más o menos destructivas y/o prolongadas o repetidas, del tipo de la citada Operación *Lanza del Sur*, que más que de ataques se podrían catalogar como advertencias o avisos, han sido frecuentes en los últimos tiempos. Sin necesidad de remontarnos al Irak de 2003 (también potencia petrolera, qué casualidad) (Operación *Libertad Iraquí*); Irán (también potencia petrolera, qué casualidad) ha sido atacada en junio de 2025 (Operación *Martillo de Medianoche*) y en marzo de 2026 (Operación *Furia Épica* estadounidense y *León Rugiente* israelí) por Estados Unidos e Israel (que también bombardea a su libre albedrío a gazatíes, cisjordanos, libaneses y sirios); e indirectamente, porque en realidad se atacaba al Estado Islámico, también lo han sido Nigeria (también potencia petrolífera, qué casualidad) en diciembre de 2025 y Siria en el pasado mes de enero, primero por las fuerzas aéreas británica y francesa (4 de enero) y pocos días después (10 de enero) por las estadounidenses (Operación *Ojo de Halcón*).

Pero no seamos masoquistas, no culpemos sólo de esta tendencia al control de los recursos de otros pueblos y territorios en beneficio propio al llamado mundo occidental. Rusia lleva combatiendo en Ucrania, tras haber ocupado la península de Crimea, desde hace más de tres años, además de por razones lingüístico-culturales e históricas y de seguridad, por los esenciales minerales (las llamadas «tierras raras») del Donbás, que también ambiciona Estados Unidos y cuya extracción y comercialización por Estados Unidos es uno de los puntos contenidos en el Plan de Paz estadounidense para Ucrania de 28 puntos, presentado por este país en noviembre de 2025. En estas cuestiones de saltarse la legalidad internacional vigente (que implica respeto a las fronteras establecidas y no intromisión en los asuntos internos de los demás países), el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

2. Libertad vs. Igualdad, pero no juntas

Sin embargo, da la impresión de que todos estos hechos hasta ahora esbozados nos están sorprendiendo. Aunque sea comprensible porque los Estados Unidos del presidente Trump han decidido quitarse la careta y hacerlo todo a las bravas, sin fingir aludir a los grandes principios que se dicen respetar mientras se los elude, no tiene mucho sentido sorprenderse a estas alturas.

¿No consiste el capitalismo, hoy día conocido como neoliberalismo, precisamente en esto? Tanto tienes, tanto puedes, tanto vales (en la vida cotidiana, en las sociedades nacionales y en la sociedad internacional): la ley del más rico. Y para vendernos las supuestas virtudes y beneficios de este capitalismo neoliberal, llevan años contándonos que hasta ahora (hasta la explosión Trump) vivíamos en un mundo basado en normas y valores. Pero en realidad sólo había un verdadero «valor»: la propiedad, y una sola «norma»: respetarla.

A nivel internacional, estas célebres «normas» se codificaron en 1944, cuando la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial era ya evidente, en los Acuerdos de Bretton Woods. Pacto firmado por cuarenta y cuatro países (aún no había sobrevenido el proceso de descolonización de las décadas 50, 60 y 70 del siglo XX) para establecer un nuevo orden monetario y financiero mundial, creando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para estabilizar las divisas, vincularlas al dólar (convertido, así, en el gerente del mundo financiero, pero controlado por la Reserva Federal estadounidense) y vincular éste al oro. Vinculación dólar-oro que no debió de resultar muy rentable, ya que Estados Unidos la suprimió veintisiete años después (1971). Debiendo crearse más tarde, en 1995, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es la que actualmente, algo más «democratizada» ya que fue creada por 166 naciones de las 193 que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ocupa de las normas que rigen el comercio internacional, su 98%.

Quienes crearon este marco económico-comercial internacional capitalista fueron fundamentalmente los países europeos, que durante varios siglos (del XV al XX), contando en los últimos decenios con la inestimable e indispensable ayuda de su hijo predilecto, los Estados Unidos de América, han dominado el mundo y lo han hecho a su imagen y semejanza. Países y sociedades que, simultáneamente, llegaron a la conclusión de que la mejor (¿la menos mala?) forma de evitar conflictos sociales internos era recuperar el viejo concepto griego de «democracia»: el poder del pueblo, de la gente, de todos. Y para poder aplicarlo sin salirse del marco capitalista imperante, que intuían había sido la base de su poderío desde la revolución industrial de mediados del siglo XVIII, recurren al célebre y entusiasta eslogan de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, del que adoptan la libertad (lo que en el futuro se conocerá como los derechos humanos civiles y políticos), prescindiendo de los incompatibles con el capitalismo: igualdad y fraternidad (lo que en el futuro se conocerá como los derechos humanos sociales y económicos y, más tarde, medioambientales) y lo denominan como el invento griego, democracia, no queriendo tener en cuenta que los griegos lo aplicaban a las *polis*, las ciudades de entonces, donde todos se conocían entre sí y se podían resolver, o al menos tratar, los asuntos públicos en asambleas ciudadanas

cara a cara de todos los ciudadanos libres (sin esclavos, criados o extranjeros residentes). Nada en absoluto comparable con la polifacética y diversa composición de las entidades nacionales y la sociedad internacional de los actuales siglos XX y XXI. Puede que en la antigua Grecia clásica, su «democracia primigenia» pudiese abarcar de forma compatible la libertad y la igualdad, pero no parece que esté siendo posible (hasta ahora, por lo menos, lo que no quiere decir que no sea posible en el futuro) en nuestro actual mundo de «democracia capitalista».

Implantada la democracia (este tipo de democracia política y civil o «democracia formal» de partidos políticos y elecciones periódicas limpias y respetadas) como signo distintivo de los países modernos y desarrollados, no quedaba más remedio que lavarle la cara a las normas económicas y comerciales (Bretton Woods) antes descritas, de manifiesto signo capitalista, haciendo como que se democratizaba también la sociedad internacional. Para ello se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, de la que forman parte todas las naciones del mundo, que pueden debatir cualquier tema que pueda interesarles en su Asamblea General y en la multitud de organismos subsidiarios dependientes de ella, especializados en las más diversas áreas de las relaciones internacionales. Sí, pueden debatir e incluso adoptar resoluciones, pero lo que no puede hacer la Asamblea General de las Naciones Unidas es decidir. Decidir con carácter impositivo es sólo atributo de su Consejo de Seguridad, compuesto de cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) con derecho a veto (un sólo voto en contra anula la validez de cualquier resolución) y diez rotatorios por periodos bienales sin derecho a veto. Es, por tanto, el Consejo de Seguridad, su pentarquía dominante, el único órgano con capacidad decisoria para los asuntos de la paz y las relaciones internacionales (para los conflictos de todo tipo entre Estados-nación y, cada vez más, para los conflictos internos de todo tipo en cada uno de ellos) y la única autoridad que puede tomar decisiones vinculantes, imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. Es, asimismo, el único órgano de la ONU cuyas resoluciones estatutariamente deben acatar todos los Estados Miembros. Una vez más, también a nivel internacional, libertad sí (se puede debatir), pero igualdad no (sólo decide la pentarquía).

Es, por tanto, la pentarquía dominante del Consejo de Seguridad, en definitiva, quien se encarga de disciplinar al mundo para que la estructura económica capitalista internacional implantada en Bretton Woods se mantenga y sólo se modifique, si falta hiciera, en el sentido de un capitalismo más sólido y poderoso, como nos mostraron los cambios acaecidos en los años setenta del pasado siglo XX, que, a través de las nuevas herramientas tecnológicas basadas en la cibernética, implantaron eso que hoy día conocemos como el neoliberalismo.

Desarrollo tecnológico que, a estas alturas, vemos que no sólo es capaz de hacernos pensar que podremos dominar y controlar el espacio extraterrestre y el microfuncionamiento de todo lo existente, sino la propia concepción de la realidad, hoy día tergiversable con la Inteligencia Artificial.

Pero una pentarquía tan poderosa no podía estar exenta del virus (tan capitalista) de la competencia. Si bien, cuando las Naciones Unidas fueron creadas, había un hegemon entre sus cinco miembros –Estados Unidos– el desarrollo de los acontecimientos fue llevando progresivamente, primero, a que Rusia –entonces Unión Soviética– se equiparase al hegemon; a que ésta desapareciera como tal a finales de los años noventa para volver a ser una Rusia, que si bien sigue siendo la mayor potencia nuclear del mundo, es una potencia económicamente muy debilitada; a que tanto el Reino Unido como Francia, a pesar de la Unión Europea, hayan perdido capacidad de influencia en la geopolítica mundial, donde cada vez más potencias emergentes demandan su lugar en el mismo; y a que, finalmente, la que era la potencia más débil en el momento de constituirse el Consejo de Seguridad, China, se haya convertido en el rival, a su misma altura, del viejo hegemon, Estados Unidos. La composición del Consejo de Seguridad y de su pentarquía dominante se ha convertido en uno de los principales asuntos pendientes de la geopolítica mundial.

Pero no perdamos el hilo. Pronto se vio que el mundo de Bretton Woods y de la ONU era un mundo inestable, con una Europa capitalista al oeste bajo el amparo de los Estados Unidos, que había acabado con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico inaugurando la nueva era de la guerra atómica (Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente), y una Europa comunista al este, encabezada por la Unión Soviética, que no tarda en prepararse para esa posible confrontación nuclear que empieza a vislumbrarse en el horizonte (primera prueba nuclear soviética en agosto de 1949). Para enfrentar esta situación y poder llegar a imponer los propios criterios (capitalismo vs. comunismo) llegado el caso, se crea, en abril de 1949, la Organización político-militar del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que se responderá en mayo de 1955 con su réplica político-militar, el Pacto de Varsovia. La guerra como solución en última instancia.

3. Las guerras de la Guerra Fría

Y el mundo empieza a dividirse entre el mundo que se mantiene capitalista y el mundo comunista, que preconiza la instauración del socialismo creyendo que se pueden quemar etapas, sin ser capaz de encontrar la fórmula para transfor-

mar la sociedad en función del segundo de los grandes lemas de la Revolución Francesa (olvidado por el capitalismo): la igualdad (social y económica) sin abandonar lo que ya se había convertido –como se ha comentado– en el signo distintivo de los países modernos y desarrollados: la democracia (de derechos humanos políticos y civiles y de posibilidad de participar en la elección de sus dirigentes y autoridades públicas). Esto les hará perder la batalla ideológica con el mundo capitalista, que se materializará en la década los ochenta del pasado siglo XX con la implantación de un nuevo modelo de capitalismo que se acabará conociendo como neoliberalismo, la ideología político-económica que aboga por reducir la intervención pública en la economía y fomentar la libertad privada de producción, comercio y mercado, sustituyendo el capitalismo de Estado por el capitalismo privado mediante desregulaciones y privatizaciones. Una nueva estructura político-económica que se irá imponiendo en el mundo capitalista a partir de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y transformará los comunismos en estructuras mixtas neoliberalizadas a partir del fin del maoísmo en China con la llegada al poder de Deng Xiaoping (1978-1989) y con el derrumbe de la Unión Soviética en 1990-1991, dejando tan sólo pequeñas islas de resistencia, como la Cuba castrista, sin apenas capacidad de influencia real en la geopolítica mundial, salvo su capacidad mítica de referencia.

Es a lo largo de todo este recorrido desde la división del mundo en mundo capitalista y mundo comunista tras la Segunda Guerra Mundial donde podemos encontrar las diferentes funciones que la guerra ha jugado en los últimos tres cuartos de siglo (1945-2026). Un periodo que se inicia con dos mundos enfrentados, cuyos hegemones (Estados Unidos y la Unión Soviética, y sus respectivas alianzas militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia) no se atreven a enfrentarse con las armas en la mano debido a la destrucción mutua asegurada que implican las armas nucleares (de hecho, se conocerá históricamente a este periodo como de «Guerra Fría»), pero que sí proseguirán su enfrentamiento geopolítico, ideológico y económico a través de guerras que han ido pasando por diferentes modalidades impuestas por el propio devenir de los acontecimientos.

En una primera etapa encontramos las guerras de enfrentamiento directo entre ambas cosmovisiones por la supremacía geopolítica del planeta. Son las guerras civiles de China (1945-1949), Corea (1950-1953) y Vietnam (1955-1975). La primera entre el Partido Nacionalista Chino (PNCh) o Kuomintang (encabezado por Chiang Kai-Shek) y el Partido Comunista Chino (PCCh) (encabezado por Mao Tse Tung), que finaliza con la victoria del PCCh y la expulsión del Kuomintang a la isla de Formosa, hoy Taiwan, y la constitución de la República Popular China. Triunfo de la revolución china que será una de las causas de la segunda guerra

entre Corea del Norte, sostenida por la Unión Soviética y sus aliados europeos y la República Popular China, y Corea del Sur, sostenida por Estados Unidos y sus aliados europeos a través de lo que se denominó Comando de las Naciones Unidas (UNC), que daría lugar, tras el armisticio de julio de 1953, a la consolidación de los dos países: Corea del Norte (comunista) y del Sur (capitalista), todavía existentes y enfrentados. Y, por último, la guerra de Vietnam (1955-1975) entre el Vietnam del Norte comunista, sostenido por la República Popular China y la Unión Soviética y sus aliados europeos, y el Vietnam del Sur heredero de la Indochina colonial francesa, sostenido por Estados Unidos y sus aliados europeos, que finaliza en 1975 con la victoria del Norte, que unifica el país como República Socialista de Vietnam, e induce asimismo la separación de Laos y Camboya, que también se constituyen como repúblicas socialistas.

Un modelo de guerra que, en cierta forma, se replicará a continuación en las conocidas como guerras coloniales o de liberación colonial, que se extendieron entre 1945 y 1975 por todo el planeta, fundamentalmente en los continentes africano y asiático, Un tipo de guerra que podríamos caracterizar como de «lucha de clases a nivel internacional», que daría lugar a una división clasista de la sociedad internacional con la aparición del término «tercer mundo» como sinónimo de «pobre» y, sobre todo, de «dependiente» de uno u otro de los dos mundos ya existentes y consolidados: el capitalista, encabezado y teledirigido por Estados Unidos, y el comunista, encabezado y teledirigido por la Unión Soviética; ambos autoconvencidos de haber encontrado la fórmula mágica del progreso científico y económico y de la justicia social.

4. Neoliberalismo

El final de esta etapa descolonizadora (décadas del sesenta y setenta del siglo XX), que triplica el número de naciones independientes, coincide –o quizás produce o provoca– el ya citado nuevo modelo de capitalismo conocido como neoliberalismo, consecuencia de la crisis iniciada en 1971, cuando Estados Unidos decide abandonar la vinculación del dólar al oro, devaluándolo, debido a la conjunción de recesión económica e inflación que le estaba suponiendo la guerra de Vietnam (que coincide con una aguda crisis cerealista en la Unión Soviética). Una medida que afecta sensiblemente al mercado del petróleo y, especialmente al consorcio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), provocando la conocida como «crisis del petróleo de 1973/74» (el petróleo como arma geopolítica): reducción de la producción y embargos selectivos, especialmente a países del mundo occidental (capitalista), generalizando la estanflación (recesión económica e inflación simultáneas).

Los principales hitos significativos que esta sucesión de crisis provoca, que conducirán a la implantación de diferenciadas formas de neoliberalismo, tanto en el mundo capitalista/occidental como en el comunista/oriental, son los gobiernos de la *premier* Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989), la transformación del comunismo chino con la llegada al poder en China de Deng Xiaoping (1978-1989) y el colapso del comunismo soviético (1990-1991).

Así, mientras el mundo capitalista profundiza en su privatización, el maoísmo desaparece en China sustituido por el «comunismo con características chinas» de Deng Xiaoping (1978-1981) y Xi Jinping (desde 1981): privatización de empresas estatales, creación de Zonas Económicas Especiales, aceptación de inversiones extranjeras, etc.; y la Unión Soviética se disuelve (diciembre de 1991) heredada por una Rusia ya no comunista y privada de gran parte de sus antiguos territorios convertidos en 14 países europeos (seis) y asiáticos (ocho) independientes.

5. El Islam como ideología emancipadora. El terrorismo como arma

No es ésta, sin embargo, la única novedad que nos va a deparar esta fase histórica. En contra de lo que siempre se ha supuesto, no son siempre las religiones las que moldean las sociedades, sino que, en circunstancias determinadas pueden ser las sociedades las que moldean las religiones. Es el sentimiento de liberación y emancipación nacionalista, característico del siglo XX, el que impregnará al Islam e inducirá al mundo musulmán a rebelarse y enfrentarse al mundo desarrollado en su doble versión capitalista y comunista. Cuando el mundo musulmán se revuelve contra el mundo desarrollado (terrorismo islamista, yihadismo), no lo hace porque no sean musulmanes, o, al menos, no solamente, sino también porque se sienten dominados y agraviados cultural y económicamente.

Este es el origen del islamismo, la teoría o doctrina que preconiza la emancipación del mundo musulmán a través de la reforma del propio Islam, cuyas bases ideológicas y operativas han ido naciendo en diferentes partes del mundo de formas aparentemente desconectadas.

En el mundo musulmán africano se iniciará en el periodo de entreguerras (1920-1940) con la Asociación de los Hermanos Musulmanes en Egipto, que combina su acción política e ideológica con la beneficencia (evidenciando el principio de

que la fuerza de atracción de una ideología es proporcional a su capacidad de práctica social) y con las aportaciones de Sayyid Qutb, funcionario del Ministerio de Enseñanza egipcio, que es enviado a Estados Unidos para estudiar los métodos de enseñanza occidentales. El materialismo que impregna a la sociedad estadounidense y la copia que del mismo cree que está adaptando el régimen de Nasser en Egipto, le lleva a escribir dos tratados «La justicia en el Islam» y «Señales en el camino», en los que establece dos de los principales principios en que acabará basándose el islamismo como teoría política. Equipara el mundo actual con la *yahiliyya* (la barbarie anterior al Islam) que redimió el profeta Mahoma, incitando a imitarlo mediante la *yihad* (esfuerzo personal de perfeccionamiento) social y colectiva, que justificará posteriormente el terrorismo indiscriminado.

En Asia, la génesis del islamismo es múltiple, pero prácticamente contemporánea. En la península indostánica, todavía bajo dominación colonial británica, el propio proceso independentista fomentará la alerta de los musulmanes, minoritarios frente a la mayoría hindú. En ella destacan las aportaciones de Mawdudi y los movimientos *deobandi* y *tabligh*. El primero se opone al carácter excesivamente nacionalista y poco islámico del recién independizado (1947) Paquistán, que significa, curiosa y precisamente, «el país de los musulmanes puros». El movimiento *deobandi* (así denominado por haber surgido en la ciudad india Deoband) nace, en realidad, a finales del siglo XIX, cuando Gran Bretaña coloniza el subcontinente indio, expulsando a los mogoles y dejando a los musulmanes, hasta entonces dominantes, en minoría frente a los hindúes. Su objetivo inicial era fomentar la formación de ulemas y madrasas con el objetivo de que no se perdieran las prácticas y costumbres islámicas. Con el tiempo, la minoría musulmana deobandi será un importante apoyo a las teorías islamistas de regeneración y reforma islámicas que empiezan a recorrer el mundo musulmán. El movimiento reformador religioso Tablighi Jamaat (sociedad para la propagación de la fe, *tabligh* en forma abreviada) nace en 1927 para la reislamización de los musulmanes indios, excesivamente influidos y condicionados por el entorno hindú. La principal aportación del *tabligh* al islamismo moderno es su capacidad de influencia en las comunidades musulmanas que están alejadas de ambientes musulmanes debido a la emigración o cualquier otra causa.

Mientras, en la antigua Persia shií, a diferencia del sunismo imperante en el norte de África y en la península indostánica, con lengua y cultura muy diferentes, con un pasado imperial milenar y en la que el clero shií está mucho más estructurado jerárquicamente que en las sociedades sunitas, la incidencia del islamismo con características propias tendrá un carácter revolucionario. Desde febrero de 1921 gobierna la dinastía Pahlevi, que tras un golpe de Estado militar encabe-

zado por el general Reza Khan y apoyado por los británicos, se hace con el poder y en 1925 se autoproclama *shah* (rey), instaurando la nueva dinastía Pahlevi, ejerciendo de gendarme para defender los intereses de sus aliados occidentales en el área. Enfrentada la monarquía con el político nacionalista Mossadegh (primer ministro del país en esos momentos), el *shah* da un autogolpe de Estado en agosto de 1953 implantando una nueva dictadura apoyada en las oligarquías financieras y militares. En este ambiente, surge la figura del intelectual Alí Shariati, que incorpora al *corpus doctrinal* shíí los ideales tercermundistas de liberación y nacionalismo, preconizando una yihad islamista contra el tirano, que atrae al clero shíí enfurecido por su impiedad y su dependencia de potencias extranjeras no musulmanas. La rebelión del clero shíí la encabezará el ayatolá Jomeini, una de las más altas autoridades islámicas del país, desde el propio Irán y desde el vecino Irak al ser expulsado del país. Apoyado por la mayoría popular, la revolución del clero inspirada por las teorías de Shariati logra derribar al régimen en 1979 y sustituirlo por un nuevo régimen teocrático islamista.

En la península arábiga, donde gobierna desde 1932 la alianza entre la dinastía de los Saud y el *wahabismo*, corriente religiosa suní conservadora y puritana, surgida en la península en el siglo XVIII, que preconiza una interpretación literal y estricta del Corán y sus *hadices* (enseñanzas del profeta Mahoma transmitidas oralmente) buscando lo que consideran las prácticas originales del Islam, se refugian en la década de los cincuenta del siglo XX numerosos hermanos musulmanes, huyendo de la presión ejercida sobre la Hermandad por el régimen nacionalista egipcio de Nasser, proporcionando al país, que empezaba a beneficiarse de unos considerables ingresos procedentes de la industria petrolera, un nutrido grupo de intelectuales mejor formados que la mayoría del país, una sociedad, en esos momentos eminentemente rural. Con ellos, la Universidad de Medina se transforma en un centro de propagación de las ideas islamistas al que acuden estudiantes de todo el mundo árabe, que se refuerza con la absorción del *wahabismo* por los inversores y trabajadores inmigrantes que acuden al país ante el auge de la industria petrolera y de la modernización de las ciudades saudíes. *Wahabismo* que propagarán en sus lugares de origen al regresar a ellos. Por su parte, el régimen saudí crea la Liga Islámica para *wahabizar* al mundo musulmán a través de la ayuda económica y la financiación de actividades religiosas y caritativas.

Todo esto va a dejar un Islam convencido de la superioridad de su cultura, obsesionado con la inferioridad de su poder e impelido a enfrentarse a un mundo desarrollado, que a su vez está convencido de la universalidad de sus sistemas político-sociales –sea el capitalismo neoliberal de los países occidentales, sea el comunismo soviético o con características chinas–, y obsesionado también con

la obligación de extenderlos por todo el mundo. Un Islam islamista que será utilizado como la identidad social en la que refugiarse individualmente y desde la que actuar colectivamente. Un Islam que va a tener su bautismo de fuego en el Afganistán de los últimos años de la década de los setenta del siglo XX, donde las disputas políticas llevan a un golpe de Estado protagonizado por jóvenes oficiales comunistas divididos en dos fracciones, los prosoviéticos del *Parsham* (bandera) y los doctrinarios del *Khalq* (pueblo), que logran imponerse, exiliar a sus rivales a Moscú y establecer en el país, a sangre y fuego, un socialismo totalmente ajeno a las costumbres y tradiciones de un país musulmán y rural, que los enfrenta a la mayoría de la población provocando un levantamiento generalizado, que no tarda en ser abastecido en armas y dinero por Estados Unidos a través de Paquistán. Temerosa la Unión Soviética de perder la oportunidad de poder crear un nuevo régimen satélite y de que caiga Afganistán bajo la influencia de Estados Unidos, decide deponer el poder de sus aliados *parsham* y el 27 de diciembre de 1979 invade Afganistán exacerbando la resistencia (étnica, tribal y territorial local), que se acabará conociendo como «los señores de la guerra», ante la presencia de un ejército extranjero e infiel, que pretende imponer costumbres y formas de vida no musulmanas. Entre los muchos grupos que se levantan contra el invasor soviético se encuentra la versión local de los Hermanos Musulmanes creada y liderada por estudiantes afganos formados en la Universidad de Medina (Arabia Saudi) y al-Azhar (Egipto). El hecho de que su apoyo exterior se canalice a través de Paquistán hace que éste incida preferentemente en ellos y en los pastunes, etnia común a los dos lados de la frontera afgano-paquistaní, de cuya conjunción saldrá el islamista pastún Partido Islámico (Hezb e Islami) liderado por Guldebun Hekmatyar. Una resistencia, en definitiva, pastún wahabí ideológicamente orientada por la Hermandad Musulmana y operativamente iluminada por el islamismo revolucionario (armado) triunfante en el vecino Irán, que se ve favorecida por la rivalidad internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

La guerra afgano-soviética atrae a muchos voluntarios musulmanes que se empiezan a autodenominar salafistas yihadistas, es decir, que pretenden imponer por la fuerza de las armas (yihadistas) el nuevo Islam islamista por todo el Dar al-Islam (la tierra de los musulmanes). Un islamismo que conciben como el regreso a la pureza de las tres primeras generaciones musulmanas, conocidas como los «salaf» (salafistas). Un salafismo yihadista, cuya incidencia real en la guerra contra las fuerzas soviéticas, llevada a cabo básicamente por la propia resistencia afgana, es mínima, pero del que, sin embargo, saldrá la ideología de los «ejércitos clandestinos» que, una vez expulsados los soviéticos de Afganistán (febrero de 1989) acudirán a la llamada de un Osama ben Laden, que se formó entre ellos y que considera inadmisibles la presencia de soldados infieles en la tie-

rra de los Lugares Sagrados (Arabia Saudí) con ocasión de la Guerra del Golfo (agosto de 1990-febrero de 1991).

Finalizada la guerra en Afganistán con la salida de las tropas de la Unión Soviética, —sumida ésta en un doloroso proceso de disolución (1990-1991)—, los yihadistas-salafistas regresan a sus lugares de origen, acogida o exilio con la sensación del deber cumplido pero de tarea inacabada, y decididos a continuar con la yihad proselitista que han aprendido y practicado en los campos de adiestramiento y entrenamiento paquistaníes y en los campos de batalla afganos.

Un sentimiento que será reforzado por los acontecimientos que se van sucediendo en el mundo musulmán en los siguientes años: primera *intifada* (levantamiento) palestina (1987-1991), en una de las más sangrantes causas de humillación del mundo musulmán; Guerra del Golfo (1990-1991), con ocasión de la cual las tropas estadounidenses y sus aliados huellan el territorio de los Lugares Sagrados (Arabia Saudí) y derrotan y humillan al régimen iraquí; la asistencia impasible del mundo a la anulación por el impío régimen argelino del Frente Nacional Argelino (FLN) de las elecciones ganadas (1992) por el islamista Frente Islámico de Salvación (FIS), obligando a sus dirigentes a pasar a la clandestinidad —en la cual, por cierto, se convertirán en el Ejército de Salvación Nacional (EIS), matriz de sus sucesivas transformaciones en Grupo Islámico Armado (GIA) y Grupo Salafista para la Predicación y el Combate—; matanza de musulmanes a manos de bosnios y croatas (cristianos ortodoxos) en Bosnia-Herzegovina (Srebrenica, 1992).

Este es el mundo que perciben las masas del mundo musulmán y, con especial irritación, los yihadistas salafistas que culpan de todo ello al mundo desarrollado, especialmente a Estados Unidos, organizándose en «ejércitos clandestinos» en distintas partes del mundo. Uno de ellos va a surgir en la propia Arabia Saudí (Comité para la Defensa de los Derechos Legítimos, CDDL), enfrentado a la propia casa reinante de los Saud, considerada un instrumento de Occidente y de su expansionismo neoliberal. De este enfrentamiento y de la correspondiente represión emergerá la figura del joven millonario Osama ben Laden, coordinador de los apoyos saudíes a la resistencia afgana antisoviética, en la cual llega a participar personalmente. En su nuevo papel dirigente organiza (1988) la informatización del inventario y estructuras de los yihadistas salafistas, a la que llamará «la base» —de datos— (al-Qaeda). Perseguido por el régimen saudí, se refugia en el régimen islamista sudanés del general Al-Bashir, desde donde comienza a construir su red-imperio económico exclusivamente orientado al apoyo y sostén de la yihad salafista (al-Qaeda). Presionado por Estados Unidos, el régimen sudanés lo expulsa del país (1995). En 1996, Osama ben Laden regresa a Afganistán, donde entra en contacto con los *talibán* y proclama su «Declaración de la yihad

contra los judíos y los cristianos» y acaba creando el Frente Islámico contra los judíos y los cristianos, materialización organizativa de los datos de «la base» (al-Qaeda) del universo yihadista salafista, en los que incluye a los *talibán* (plural de *talib*, estudiante de madrasa pastún deobandi), que surgen en 1994 incorporándose a la guerrilla antisoviética afgana.

El Frente Islámico pronto se convierte en el refugio de las generaciones posteriores a la masiva emigración musulmana al mundo desarrollado de los años ochenta, como consecuencia de la crisis petrolera de 1973 y de la implantación del neoliberalismo en el mundo desarrollado, que se ven, cada vez más, convertidos de proletarios en excluidos (aculturados pobres sin demasiadas expectativas de futuro) en la década de los noventa del siglo XX. No comprenden el Islam tradicional de sus padres, oscurantista y retrógrado desde el prisma de la cultura de los países desarrollados que aprenden en sus escuelas (aculturación), al mismo tiempo que se sienten excluidos. Cuando las ideas de Madawí, Qutb, Shariati, Jomeini o el wahabismo empiezan a ser predicadas en inglés, francés, alemán, español o ruso en las mezquitas financiadas por las petromonarquías del Golfo, esta juventud pobre y desamparada encuentra refugio anímico en la nueva identidad islamista, que le permite racionalizar, al mismo tiempo, su rechazo al tradicionalista de sus padres y su rencor histórico antioccidental, justificando ante sí misma cualquier comportamiento con sólo adscribirse a la defensa del Islam.

En este caldo de cultivo, la información que reciben del exterior a través de determinados canales es una glorificada versión de la actuación de los «combatientes de la libertad» en Afganistán contra la invasión del ateísmo soviético, coincidiendo con las noticias de la invasión israelí del Líbano (1982) y sus matanzas en Sabra y Shatila (1983), de la segunda *intifada* (levantamiento) palestina (2000), o de la expulsión del Líbano de las fuerzas estadounidenses, francesas e italianas (1983); todo lo cual les induce a confiar en que la posibilidad de la yihad (la yihad fuera de área, la yihad islamista, la globalización islámica) es real y posible. Financiadas por la red/imperio económica/ideológica de Osama ben Laden, sus principales episodios son los atentados contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar-es-Salaam (1998), los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos (2001) –que provocan la invasión estadounidense de Afganistán (noviembre de 2001)–, el atentado del 11 de marzo en la estación de Atocha de Madrid (2004), el de Casablanca (Marruecos) (2003) o el del 7 de julio en Londres (2005). Es el nuevo tipo de guerra al que se enfrentará (se sigue enfrentando) el neoliberalismo.

6. Las guerras contraterroristas

Y al que contestará con su propia versión del mismo, las guerras contraterroristas, en las que el concepto de terrorismo se agranda cuanto haga falta con tal de que su adscripción justifique la actuación de, principalmente Estados Unidos –que en las dos siguientes décadas logra imponer su hegemonía a nivel mundial–, pero en general de todo el mundo neoliberal. Es el periodo conocido de la «globalización», del que serán sus principales hitos bélicos la Operación *Libertad Duradera* (2001-2021) estadounidense en Afganistán para dismantelar a al-Qaeda y derrocar al régimen de los *talibán*, apoyada (2001-2014) por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN, que finalizan sin éxito tras una precipitada y desorganizada retirada y con los *talibán* manteniendo el poder en Afganistán (2021); la intervención en Irak (2003-2011) por, igualmente, Estados Unidos y la OTAN, acusando sin pruebas de que estaba produciendo armas de destrucción masiva y financiando el terrorismo internacional; la intervención en Irak y Siria de la llamada Coalición Global contra el Daesh o Estado Islámico, filial (al menos inicialmente) de Al-Qaeda en estos dos países de Oriente Medio; o las intervenciones francesas en diferentes países africanos (antiguas colonias suyas) para combatir la presencia de organizaciones yihadistas salafistas filiales de al-Qaeda o del Estado Islámico/Daesh: operaciones *Serval* (2013), *Barkhane* (2014-2017) o *Sangaris* (2013-2016).

7. El neoliberalismo de guerra.

La violencia internacional como medio de acumulación

Si bien estas acciones terroristas/guerras contraterroristas, además de su carácter cultural y civilizatorio (mundo musulmán vs. mundo cristiano) tienen también un carácter de «lucha de clases internacional» (países/sociedades no desarrolladas vs. países/sociedades desarrolladas) como las guerras de descolonización ya mencionadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, el siguiente ciclo de violencia y guerra internacionales tendrá como protagonista al propio neoliberalismo, personalizado en su hegemonía, Estados Unidos –los Estados Unidos del presidente Trump–, pero no como agredido por ser el dominante, sino precisamente como agresor mediante una política que perfectamente se podría etiquetar como un «neoliberalismo de guerra» o como «la violencia internacional como medio de acumulación», del que ya se han apuntado sus inicios en los primeros párrafos de este artículo.

Una política que se enmascara con grandilocuentes declaraciones y propuestas de arreglo pacífico de conflictos, de los que, en realidad, se busca beneficio económico y/o tecnológico. Los casos más paradigmáticos son las propuestas de paz en Gaza y Ucrania, y los hechos más notables las operaciones bélicas *Determinación Absoluta* contra Venezuela y las operaciones *Martillo de Medianoche* y *Furia Épica* contra Irán, y el intento de humillar y neutralizar a la Unión Europea con su aspiración de hacerse con Groenlandia.

Efectivamente, Estados Unidos, punta de lanza y cabeza rectora del neoliberalismo actual, presentó en septiembre de 2025 un Plan de Paz para Gaza de 21 puntos, en el que, entre otras muchas propuestas, se propone una reconstrucción de la franja de Gaza bajo el «gobierno» (al modo del viejo Mandato Británico colonialista) de una Junta de Paz presidida por él mismo, Donald Trump, que regiría y dirigiría la financiación, la reurbanización y la reforma de dicha reconstrucción física y administrativa, bajo la seguridad proporcionada por una Fuerza de Estabilización comandada, controlada y dirigida por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Una futura arquitectura política y administrativa tras la que puede verse la facilidad con la que podría implantarse en Gaza aquella transformación de la Franja en una Riviera de Oriente Medio que el presidente Trump (empresario inmobiliario e inversionista) presentó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su conferencia de prensa conjunta en Washington el 5 de febrero de 2025, basada en el documento de 38 páginas titulado Fondo para la Transformación, Aceleración Económica y Reconstrucción de Gaza (GREAT en inglés, ¿suena de algo?), consistente en transformar en diez años, bajo administración estadounidense y con inversiones públicas y privadas que cuadruplicarían en una década su desembolso inicial, el territorio gazatí en un enclave turístico y una zona industrial de tecnología punta de ocho o diez ciudades inteligentes administradas por Inteligencia Artificial. Algo que, sin embargo, aunque no se cita, implicaría la deportación, forzosa o forzada, de dos millones de gazatíes a Egipto, Jordania o zonas gazatíes especialmente designadas y la transformación de quienes no abandonarían el territorio en la mano de obra barata de sirvientes de los emporios turísticos y tecnológicos.

Algo parecido se puede concluir del Plan de Paz estadounidense para Ucrania de 21 puntos de noviembre de 2025, que incluye varias cláusulas relativas a la reconstrucción física, económica y administrativa de Ucrania tras el fin de las hostilidades. Como en el caso anterior sobre Gaza, la reconstrucción sería supervisada y garantizada por Estados Unidos a través de un Consejo de Paz, también presidido por el propio Trump, que tendría la última palabra sobre cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del Plan. Y se fi-

nanciaría con un denominado Fondo de Desarrollo para la Reconstrucción elaborado por el Banco Mundial, entre cuyos objetivos estaría la extracción de minerales, entre ellos, las «tierras raras» (litio, uranio, titanio, berilio, etc.) ucranianas (especialmente en su área oriental, el Donbass, principal escenario actual de los combates), a las que Estados Unidos tiene el ojo echado desde hace tiempo. Además, el Plan cuenta para esta financiación con los fondos rusos que tiene congelados la Unión Europea, de los que cien mil millones de dólares serían utilizados para iniciativas lideradas por Estados Unidos, que recibiría el 50% de estas ganancias, debiendo la Unión Europea aportar otros cien mil millones de dólares.

Dos planes de paz indudablemente beneficiosos económicamente para Estados Unidos y sus empresarios, a los que se puede añadir el Acuerdo de Paz Congo-Ruanda, firmado el 4 del pasado diciembre de 2025, ratificando los compromisos adquiridos por las autoridades congoleñas y ruandesas el 27 de junio (bajo mediación y presión de Estados Unidos) en Washington, que permite a Ruanda mantener tropas en el este del Congo hasta que se neutralice a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda y al M23, el grupo rebelde ruandés apoyado y sostenido por el Congo; y el firmado por Ruanda y el M23 en el mismo sentido, el 15 de noviembre en Catar.

En este citado Acuerdo de Paz de 4 de diciembre hay también, cómo no, una dimensión económica (tildada por el presidente Trump como «con la que se va a ganar mucho dinero»): integración económica regional y acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, con acceso preferencial, y ambos países para la explotación de minerales estratégicos para la alta tecnología, abundantes en ambos países, incluidas las tierras raras y otros minerales esenciales.

Ninguno de los tres planes de paz (Ucrania, Gaza, Centroáfrica) parecen tener muchas posibilidades de llegar a ponerse en vigor tal como están inicialmente redactados, pero si alguno de los tres llegara a implementarse tras las modificaciones que pudiera haber, lo más probable es que estas citadas cláusulas, que suponen beneficios económicos para Estados Unidos (y para su presidente y algunos de sus grandes magnates), estarían incluidas de una forma u otra.

En otro orden de cosas, la «resolución de conflictos *made in USA* post globalización y post multilateralismo» no se está desarrollando, como en los casos citados, buscando la paz (y sus beneficios derivados) sino, por el contrario, utilizando directamente la fuerza para conseguirlos. Son los casos paradigmáticos de Venezuela o Irán y, cada vez parece que más, Cuba.

En el primero, Venezuela, como ya se apunta en los primeros párrafos de este estudio, Estados Unidos justificará el ataque (Operación *Determinación Absoluta* del 3 de enero de 2026, componente específico para Venezuela de la más amplia Operación *Lanza del Sur*, materialización de la versión trumpista de la Doctrina Monroe, «América para los americanos») con las acusaciones de régimen dictatorial represivo corrupto y narcotraficante dirigido por un Gobierno ilegal no producto de las urnas, sino autoimpuesto mediante «pucherazo» (elecciones del 28 de julio de 2024), con el resultado del secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores y la imposición de una tutela política-económica al régimen, ahora encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El presidente Trump (que ha llegado a autodenominarse *acting president* de Venezuela) declara, el propio 3 de enero, que «Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura y apropiada», apuntando que «los líderes del citado proceso de transición serán su propio equipo, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio» y solicitando a la presidenta *pro tempore* Delcy Rodríguez «acceso total al petróleo y a otros recursos naturales de Venezuela, que nos permitan reconstruirlo, como a sus infraestructuras, puentes y carreteras». Tres días más tarde (6 de enero), confirma en su red Truth Social que «las autoridades provisionales de Venezuela (Gobierno interino de Delcy Rodríguez) entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos, que controlará ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos». Estos envíos se realizarían desde Venezuela directamente a los muelles de carga y descarga de Estados Unidos, que lleva a cabo su primera venta de petróleo venezolano el 14 de enero por valor de quinientos millones de dólares, a menos de dos semanas desde la incursión militar y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, que continúan encarcelados en Estados Unidos.

En román paladino «déjenos comerciar sus hidrocarburos y sus reservas minerales y le adecentamos el país, mientras nos quedamos con las ganancias de la operación y le reconstruimos (física y socialmente) el país a nuestra conveniencia».

El caso de Irán, respondiendo a la misma estrategia, es distinto por tres principales razones: la distancia geográfica, la inexistencia del amparo justificativo de la Doctrina Monroe (¿hoy día transformada en Donroe?) y su carácter de enfrentamiento de larga data desde noviembre de 1979, cuando varios miles de estudiantes iraníes, en la exaltación del triunfo de la revolución islamista en el país, irrumpen en la embajada estadounidense de Teherán y toman como rehenes a 63 estadounidenses como protesta por la acogida del depuesto *shah* (enero de

1979, tras la revolución islamista iraní) Mohammad Reza Palevi. El nuevo dirigente iraní ayatolá Jomeini exige a Estados Unidos, a cambio de su liberación, el fin de la intromisión estadounidense en los asuntos internos iraníes, sin que se pueda llegar a alcanzar ningún tipo de acuerdo. Solamente son liberados trece rehenes en noviembre y las negociaciones se interrumpen por falta de resultados en abril de 1980, con 50 rehenes todavía encarcelados en Irán.

Estados Unidos decide pasar a la acción con la operación de rescate *Garra de Águila*, lanzada desde el portaaviones USS Nimitz con el apoyo de aviones de transporte C-130, pero una violenta tormenta de arena en el desierto hace fracasar la operación (ocho bajas mortales). Desde entonces, Estados Unidos siempre ha considerado al régimen iraní como un enemigo a destruir, llegando a incluirlo (enero de 2002) en el llamado Eje del Mal, junto a Irak y Corea del Norte, por sus supuestas intenciones de hacerse con armamento nuclear. Inclusión que permite justificar acciones militares, de desestabilización o aislamiento en su contra.

Una situación de enfrentamiento geopolítico que se verá reforzada cuando el régimen iraní ampare a una serie de organizaciones islamistas en el cercano Oriente enfrentadas con el gran aliado y «gendarme» en dicha área geográfica de Estados Unidos, Israel, por su política discriminatoria y colonialista antimusulmana en Cisjordania y Gaza (la Palestina ocupada), y recordando que Irán, gran productor de hidrocarburos, pudiera algún día jugar el papel que Arabia Saudí tuvo en la crisis del petróleo de 1973. Quizás, por todo ello, Estados Unidos, en función de su nueva política de «violencia internacional como medio de acumulación» del «neoliberalismo de guerra» esté programando hacerse con el petróleo iraní, como se ha hecho con el venezolano, el gran valor geopolítico en manos iraníes, que, de desaparecer, posibilitaría una adecuada resolución de algunos de los problemas que, ahora mismo, están afectando peligrosamente a la geopolítica mundial.

Es en esta hipótesis en la que puede entenderse el desplazamiento al área del Cercano Oriente de dos potentes escuadras navales estadounidenses (Operación *Furia Épica*) desde las que poder atacar con posibilidades (altas) de éxito a Irán, para derrocar al régimen y hacerse con su petróleo, a imagen y semejanza de la estrategia seguida con Venezuela. Y el consiguiente ataque del 28 de febrero de 2026 con el asesinato del líder supremo del régimen, el Ayatolá Jameneí (Operaciones *Furia Épica* estadounidense y *León Rugiente* israelí).

Pero el neoliberalismo, que en esencia es competitividad, no podía estar en esta nueva etapa de violencia internacional como medio de acumulación exenta de la propia competencia interna, que se muestra en la política estadounidense res-

pecto a la Unión Europea: amenazándola con aranceles, forzándola a abastecer a Ucrania de armamento, material y pertrechos necesariamente comprados en el mercado estadounidense, y amenazándola con hacerse con parte de su territorio, Groenlandia, en nombre de su seguridad, cuando se ha demostrado, ante el dilema, que esa seguridad es mucho más lógica, factible y eficaz asignándosela a la OTAN, a la que los propios Estados Unidos no sólo pertenecen, sino que son los que la teledirigen y llevan sacando beneficio de ella desde su misma creación. Entonces, ¿el interés estadounidense por ocupar físicamente Groenlandia mediante algún tipo de situación administrativa está motivado por inquietudes securitarias o por ambiciones económicas sobre sus posibles recursos energéticos y minerales?

Quizás haya ocurrido así siempre a lo largo de la historia, pero creo que dado el descaro con que se está haciendo en estos momentos, no estaría de más incluir un nuevo epígrafe a los muchos que tratan de reducir la historia a frases épicas: la paz como negocio, el neoliberalismo de guerra o la violencia internacional como medio de acumulación; como frase épica para que la historia designe nuestro actual periodo histórico, que se inicia en la segunda decena del siglo XXI y finaliza...

La Unión Europea entre la autonomía estratégica y el vasallaje funcional

Ruth Ferrero-Turrión

Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción. Europa en un orden internacional en transición

La Unión Europea atraviesa una transformación estructural que ya no puede explicarse como una simple sucesión de crisis. Lo que está cambiando es el marco mismo de posibilidades en el que Europa actúa. Durante décadas, el proceso de integración europea se consolidó en un entorno de relativa estabilidad geopolítica y económica. Ese entorno se caracterizaba por la expansión del comercio internacional, la vigencia de instituciones multilaterales relativamente estables y la garantía de seguridad proporcionada por la alianza transatlántica. Hoy, sin embargo, ese contexto se está transformando bajo el impacto combinado de la rivalidad entre grandes potencias, la creciente utilización de instrumentos económicos con fines geopolíticos y la erosión de algunos de los pilares del orden liberal internacional.

La competencia estratégica entre Estados Unidos y China se ha convertido en el eje organizador de buena parte de esta transición. Esta rivalidad redefine las reglas del juego internacional y desplaza el foco de la competencia hacia ámbitos como la tecnología, las cadenas de suministro, la energía o el control de infraestructuras críticas. En este contexto, la interdependencia económica deja de ser únicamente un mecanismo de eficiencia y se convierte también en una fuente potencial de vulnerabilidad estratégica, lo que algunos autores han denominado *weaponized interdependence* (Farrell & Newman, 2019).

Este cambio de contexto obliga a formular una pregunta fundamental para el futuro del proyecto europeo: ¿qué lugar ocupará la Unión Europea en el nuevo equilibrio internacional? En un sistema global cada vez más marcado por la competencia entre grandes potencias, la UE se enfrenta a una tensión creciente entre dos horizontes posibles: la autonomía estratégica y la dependencia funcional.

La autonomía estratégica no implica autosuficiencia ni aislamiento. Se refiere, más bien, a la capacidad de tomar decisiones políticas propias en ámbitos críticos sin depender estructuralmente de actores externos. Implica poder definir

prioridades, sostener políticas industriales o tecnológicas y mantener alianzas sin que esas decisiones queden condicionadas por dependencias estructurales en sectores estratégicos. El concepto de dependencia o «vasallaje» no debe entenderse aquí en términos formales o jerárquicos, sino como una situación en la que la capacidad de decisión política se ve limitada por la dependencia tecnológica, energética, financiera o militar.

El modelo europeo de integración se desarrolló durante décadas en un contexto que permitía externalizar parte de estas funciones estratégicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la seguridad europea se articuló en torno al paraguas militar estadounidense y a la arquitectura institucional de la OTAN. Este marco permitió que el proceso de integración se concentrara en la construcción del mercado interior, la convergencia económica y la consolidación del Estado social, mientras las cuestiones relacionadas con el poder militar y la seguridad estratégica permanecían en gran medida externalizadas.

Con el tiempo, la Unión Europea desarrolló una notable capacidad regulatoria que le permitió proyectar normas y estándares más allá de sus fronteras. Este fenómeno ha sido descrito como el *Brussels Effect*, es decir, la capacidad de la regulación europea para convertirse en referencia global en ámbitos como la competencia, la protección de datos o la regulación del mercado digital (Bradford, 2020). Sin embargo, la capacidad normativa no sustituye a la capacidad material. En un entorno de rivalidad sistémica, regular sin producir o innovar en sectores críticos limita el margen de autonomía estratégica.

La guerra de Ucrania ha actuado como un catalizador de esta toma de conciencia. El conflicto no creó las vulnerabilidades estructurales europeas, pero sí las hizo visibles de forma simultánea. La dependencia energética acumulada durante décadas se reveló como un riesgo estratégico de primer orden, obligando a la Unión a combinar sanciones económicas, apoyo militar a Ucrania y una rápida reconfiguración de su política energética.

La respuesta institucional se articuló en torno al programa REPowerEU, orientado a reducir la dependencia de combustibles fósiles rusos y acelerar la transición hacia energías renovables (European Commission, 2022). Sin embargo, esta transición también genera nuevas dependencias, especialmente en minerales críticos necesarios para tecnologías verdes y electrificación industrial.

A la dimensión energética se suma la dimensión tecnológica. En la economía política contemporánea, el control de tecnologías avanzadas –como los semiconductores, la inteligencia artificial o la computación de alto rendimiento– se ha convertido en un determinante central del poder internacional. En varios de estos

sectores, Europa depende todavía de proveedores externos u ocupa posiciones intermedias dentro de las cadenas globales de valor.

En este contexto, la relación transatlántica continúa siendo fundamental para la seguridad europea, pero se desarrolla en un entorno estratégico diferente al de décadas anteriores. La política exterior estadounidense ha reorientado progresivamente sus prioridades hacia la competencia estratégica con China, lo que afecta inevitablemente a la forma en que se articula la cooperación con Europa.

Al mismo tiempo, la Unión Europea continúa operando con una arquitectura institucional incompleta en ámbitos clave como la política fiscal, la política industrial o la defensa. Esta combinación de presión externa y limitaciones internas plantea un dilema estratégico para el proyecto europeo.

La cuestión central que aborda este artículo es hasta qué punto la Unión Europea podrá desarrollar las capacidades necesarias para actuar como actor estratégico en el nuevo orden internacional o si, por el contrario, su posición tenderá a evolucionar hacia formas de dependencia funcional dentro de un sistema dominado por potencias continentales con mayores capacidades industriales, tecnológicas y fiscales.

2. La reconfiguración del vínculo transatlántico

Si la transformación del orden internacional constituye el primer elemento del nuevo contexto estratégico europeo, el segundo es la evolución del vínculo transatlántico. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Europa funcionó como uno de los pilares centrales de la estabilidad política y de seguridad del continente. La arquitectura de defensa descansaba en la OTAN, el liderazgo estratégico estadounidense actuaba como garantía última de seguridad y la interdependencia económica transatlántica se interpretaba como parte de un mismo espacio político occidental.

Sin embargo, el contexto geopolítico actual obliga a revisar este esquema con mayor realismo. La política exterior estadounidense ha experimentado en los últimos años un desplazamiento progresivo de prioridades hacia la competencia estratégica con China. Este cambio no es únicamente discursivo. Se refleja en decisiones industriales, tecnológicas y comerciales orientadas a reforzar la base productiva estadounidense y a limitar la transferencia de tecnologías estratégicas hacia sus principales competidores.

Este giro comenzó a institucionalizarse ya durante la primera administración Trump. La *National Security Strategy* de 2017 definió explícitamente a China y Rusia como potencias revisionistas que desafiaban el poder y la influencia de Estados Unidos. Este enfoque se ha mantenido posteriormente en los documentos estratégicos estadounidenses más recientes, que sitúan la competencia con China en el centro de la política exterior y de seguridad nacional (The White House, 2022).

La rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China tiene implicaciones directas para Europa. La política industrial estadounidense ha adquirido una dimensión explícitamente estratégica, orientada a fortalecer sectores considerados críticos para la seguridad nacional y la competitividad económica. Programas de incentivos fiscales, subsidios industriales y políticas de relocalización productiva forman parte de esta estrategia más amplia de reorganización de las cadenas de suministro globales.

Para la Unión Europea esta evolución plantea un desafío complejo. Por un lado, el vínculo transatlántico sigue siendo fundamental para la seguridad europea, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania y del papel central que la OTAN continúa desempeñando en la arquitectura de defensa del continente. Por otro lado, las políticas industriales y tecnológicas estadounidenses pueden generar efectos indirectos sobre la economía europea.

Uno de los ámbitos donde esta tensión resulta más visible es el tecnológico. La brecha europea en sectores como los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial o la computación de alto rendimiento ha sido reconocida por las propias instituciones europeas. El European Chips Act se diseñó precisamente para reforzar la capacidad europea de producción de semiconductores y reducir dependencias externas en un sector considerado crítico para la soberanía tecnológica (European Parliament & Council, 2023).

El problema no se limita a un único sector. Informes recientes sobre la competitividad europea han señalado que la fragmentación del mercado interior, la limitada integración del mercado de capitales y la escala relativamente reducida de la inversión tecnológica dificultan la capacidad de la Unión para competir con economías continentales como Estados Unidos o China (European Commission, 2024). Cuando Washington adopta políticas destinadas a atraer inversión y producción estratégica a su territorio, Europa se enfrenta al riesgo de deslocalización de actividades industriales hacia el mercado estadounidense.

Las fricciones comerciales recientes reflejan este contexto. Las tensiones en torno a subsidios industriales, incentivos fiscales o políticas de transición ener-

gética han generado preocupación en Bruselas por posibles distorsiones de competencia dentro del espacio transatlántico. Si la política industrial se consolida como instrumento central de competencia geoeconómica, la asimetría fiscal entre Estados Unidos y la Unión Europea adquiere una relevancia estructural.

A estas tensiones económicas se suma una dimensión política más amplia. La relación transatlántica continúa siendo un elemento central de la política exterior europea, pero la creciente autonomía estratégica estadounidense en materia industrial y tecnológica introduce un elemento de incertidumbre sobre el futuro equilibrio de esta relación.

La respuesta europea ha sido prudente. La Unión ha evitado una escalada comercial directa con Estados Unidos, consciente de la profundidad de la interdependencia económica entre ambas economías. Al mismo tiempo, ha comenzado a reforzar instrumentos destinados a protegerse frente a posibles presiones externas.

La adopción del Instrumento Anticoerción constituye un ejemplo de esta evolución. Este mecanismo busca dotar a la Unión de herramientas jurídicas para responder a prácticas de coerción económica por parte de terceros países, reflejando el reconocimiento de que la interdependencia puede convertirse en un instrumento de presión política incluso entre socios estratégicos (European Parliament & Council, 2023).

En este contexto, la autonomía estratégica europea no debe interpretarse como un proyecto antitransatlántico. Más bien constituye una condición para redefinir la relación sobre bases más equilibradas. Cooperar desde la dependencia no es lo mismo que cooperar desde la capacidad de decisión. La primera situación tiende a generar subordinación cuando los intereses divergen. La segunda permite mantener alianzas sólidas sin renunciar a la capacidad de definir prioridades propias.

La evolución del vínculo transatlántico no responde a una ruptura abrupta, sino a una adaptación gradual a un entorno internacional cada vez más competitivo. En este escenario, la Unión Europea se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre la continuidad de la alianza transatlántica y el desarrollo de capacidades propias que le permitan actuar con mayor autonomía estratégica en el sistema internacional emergente.

3. Vulnerabilidades estructurales de la Unión Europea

Si la reconfiguración del vínculo transatlántico redefine el entorno estratégico europeo, las vulnerabilidades internas de la Unión determinan hasta qué punto puede responder a ese nuevo contexto. La cuestión central no es únicamente externa. La autonomía estratégica europea depende en gran medida de la capacidad de la Unión para reducir dependencias estructurales en sectores clave de la economía política global.

Durante décadas, el proceso de integración europea se desarrolló bajo un supuesto implícito: la interdependencia económica profunda, combinada con instituciones multilaterales relativamente estables y un entorno geopolítico predecible, reduciría el peso de la competencia estratégica en la economía internacional. En ese contexto, la Unión pudo concentrarse en la liberalización del mercado interior, la regulación económica y la expansión del comercio internacional. Sin embargo, la intensificación de la rivalidad entre grandes potencias ha transformado profundamente este escenario.

En la actualidad, sectores como la energía, la tecnología avanzada o las cadenas de suministro estratégicas se han convertido en instrumentos centrales de poder internacional. Estados y grandes bloques económicos utilizan cada vez más herramientas económicas –subsidios industriales, restricciones tecnológicas o control de recursos críticos– como instrumentos de competencia geopolítica. En este contexto, las dependencias estructurales dejan de ser únicamente económicas para convertirse en vulnerabilidades estratégicas.

Para la Unión Europea, estas vulnerabilidades se concentran principalmente en tres ámbitos interrelacionados: la energía, la tecnología y la arquitectura institucional que sostiene su capacidad de acción colectiva.

3.1. Vulnerabilidad energética y transición del modelo energético

La crisis energética desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania puso de manifiesto una de las dependencias más evidentes de la economía europea. Durante décadas, el suministro energético del continente se estructuró en torno a importaciones externas relativamente estables, entre ellas el gas ruso, que ocupaba un papel relevante en el mix energético de varios Estados miembros.

La ruptura de esta relación obligó a una reconfiguración acelerada de las políticas energéticas europeas. A través del programa REPowerEU, la Comisión Europea impulsó una estrategia orientada a reducir la dependencia de combustibles fósiles rusos, diversificar proveedores y acelerar el despliegue de energías renovables (European Commission, 2022). Este proceso ha permitido reducir de forma significativa el peso del gas ruso en el suministro energético europeo.

Sin embargo, la transición energética no elimina las dependencias estructurales, sino que las transforma. El desarrollo de tecnologías vinculadas a la electrificación, el almacenamiento energético o las energías renovables depende de minerales críticos como litio, cobalto, níquel o tierras raras. La producción y el procesamiento de muchos de estos recursos se concentran en un número limitado de países, lo que genera nuevas vulnerabilidades geoeconómicas.

Consciente de esta situación, la Unión Europea ha comenzado a desarrollar instrumentos destinados a asegurar el acceso a materias primas estratégicas y a fortalecer las capacidades industriales propias. El Critical Raw Materials Act, adoptado en 2024, constituye uno de los principales instrumentos en esta dirección, al establecer objetivos de diversificación del suministro, reciclaje y desarrollo de capacidades de procesamiento dentro del propio espacio europeo.

No obstante, el desafío energético europeo no se limita al acceso a recursos. La transición hacia un sistema energético descarbonizado requiere inversiones masivas en infraestructuras, innovación tecnológica y redes industriales. La escala de estas transformaciones plantea interrogantes sobre la capacidad de la Unión para coordinar políticas industriales y movilizar recursos financieros a nivel continental.

3.2. Dependencia tecnológica y competencia por las cadenas de valor

La segunda gran vulnerabilidad europea se encuentra en el ámbito tecnológico. En la economía política contemporánea, el control de tecnologías avanzadas se ha convertido en uno de los principales determinantes del poder económico y estratégico.

Sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento o las tecnologías cuánticas desempeñan un papel central tanto en la competitividad industrial como en la seguridad nacional. En varios de estos ámbitos, la posición europea es ambivalente. La Unión mantiene fortalezas relevantes en determinados segmentos industriales y científicos, pero depende de actores externos en fases críticas de las cadenas globales de valor.

El caso de los semiconductores ilustra bien esta situación. Aunque Europa alberga empresas líderes en equipamiento y diseño de chips, su capacidad de producción en los segmentos más avanzados es limitada en comparación con la de otros actores globales. Esta dependencia motivó la adopción del European Chips Act, destinado a reforzar la capacidad europea de producción de semiconductores y reducir vulnerabilidades en una tecnología considerada estratégica (European Parliament & Council, 2023).

Más allá de sectores específicos, el desafío tecnológico europeo tiene también una dimensión estructural. Las inversiones en investigación y desarrollo siguen siendo inferiores a las de Estados Unidos o China, y el ecosistema europeo de innovación continúa fragmentado en múltiples sistemas nacionales. Informes recientes sobre competitividad han señalado que la limitada integración del mercado de capitales y la dispersión de políticas industriales dificultan la capacidad de la Unión para movilizar recursos a la escala necesaria para competir en sectores tecnológicos emergentes (European Commission, 2024).

3.3. Fragmentación institucional y capacidad estratégica

La tercera vulnerabilidad estructural europea no es sectorial, sino institucional. A pesar de su tamaño económico y de su peso en el comercio global, la Unión Europea continúa operando con una arquitectura política incompleta en ámbitos fundamentales para la autonomía estratégica.

La política fiscal sigue siendo en gran medida competencia de los Estados miembros, lo que limita la capacidad de la Unión para movilizar recursos financieros a gran escala. Esta fragmentación contrasta con la capacidad de economías como Estados Unidos para desplegar programas de inversión industrial masivos en sectores estratégicos.

En el ámbito de la defensa y la política exterior, las limitaciones institucionales son igualmente visibles. Aunque la cooperación europea en materia de seguridad ha avanzado en los últimos años, la toma de decisiones continúa dependiendo en gran medida de acuerdos intergubernamentales que pueden dificultar respuestas rápidas y coordinadas.

Esta estructura institucional refleja la naturaleza híbrida del proyecto europeo, situado entre una organización internacional y una unión política incompleta. Mientras el mercado interior funciona sobre bases relativamente integradas, los instrumentos necesarios para sostener una política estratégica coherente –desde la fiscalidad hasta la defensa– permanecen fragmentados.

En conjunto, estas vulnerabilidades no implican que la Unión Europea carezca de recursos o capacidades. Europa sigue siendo una de las principales economías del mundo y mantiene una base industrial y científica significativa. Sin embargo, la combinación de dependencias energéticas transformadas, brechas tecnológicas y fragmentación institucional limita su margen de autonomía en un entorno internacional cada vez más competitivo.

La cuestión central no es únicamente si Europa reconoce estas vulnerabilidades, sino si está dispuesta a reformar su arquitectura política y económica para superarlas. En ausencia de esa transformación, la interdependencia que durante décadas favoreció la prosperidad europea podría convertirse progresivamente en una fuente de dependencia estratégica.

4. Autonomía estratégica y reforma institucional europea

El reconocimiento de las vulnerabilidades estructurales europeas no conduce automáticamente a una estrategia política. Identificar dependencias energéticas, tecnológicas o industriales es solo el primer paso. La cuestión decisiva es si la Unión Europea dispone de los instrumentos institucionales, fiscales y políticos necesarios para reducir esas dependencias en un entorno internacional marcado por la competencia geoeconómica entre grandes potencias.

En este contexto ha adquirido centralidad el concepto de autonomía estratégica europea. Inicialmente vinculado al ámbito de la política de defensa, el término ha evolucionado hasta abarcar dimensiones mucho más amplias que incluyen la política industrial, la seguridad energética, la tecnología o las cadenas de suministro. En términos generales, la autonomía estratégica se refiere a la capacidad de la Unión para actuar de forma independiente en sectores críticos sin quedar condicionada por dependencias estructurales respecto de actores externos.

Este objetivo no implica aislamiento ni ruptura con las alianzas existentes. Por el contrario, la autonomía estratégica se plantea como una condición para mantener relaciones internacionales equilibradas en un sistema global cada vez más competitivo. La cooperación con socios estratégicos –en particular con Estados Unidos– sigue siendo un elemento central de la política exterior europea. Sin embargo, la creciente instrumentalización de la interdependencia económica por parte de los principales actores globales ha puesto de relieve los riesgos asociados a dependencias excesivas en sectores clave.

Avanzar hacia una mayor autonomía estratégica exige, en primer lugar, reforzar la base industrial y tecnológica europea. Las políticas adoptadas en los últimos años reflejan un reconocimiento creciente de esta necesidad. Iniciativas como el European Chips Act, los programas destinados a reforzar la producción de tecnologías limpias o las estrategias europeas para asegurar el acceso a materias primas críticas forman parte de este esfuerzo por fortalecer la resiliencia económica europea.

No obstante, el desafío europeo no se limita a la adopción de políticas sectoriales. La cuestión fundamental es la escala de las inversiones necesarias para competir en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores o la transición energética. En este sentido, diversos informes recientes sobre competitividad europea han subrayado que la fragmentación del mercado interior y la limitada integración financiera reducen la capacidad de la Unión para movilizar recursos comparables a los de otras grandes economías (European Commission, 2024).

Este problema remite a una dimensión institucional más profunda. La Unión Europea continúa operando con una arquitectura política híbrida que combina elementos supranacionales con amplias competencias nacionales. En ámbitos clave para la autonomía estratégica –como la política fiscal, la política industrial o la defensa– los Estados miembros conservan un papel predominante, lo que dificulta la adopción de estrategias plenamente coordinadas.

La cuestión de la capacidad fiscal europea resulta particularmente relevante en este contexto. La experiencia del instrumento *NextGenerationEU*, adoptado durante la pandemia de COVID-19, demostró que la Unión puede movilizar recursos financieros significativos cuando existe consenso político suficiente. Sin embargo, este mecanismo fue concebido como una respuesta excepcional a una crisis específica. Si la autonomía estratégica europea requiere inversiones sostenidas en innovación, transición energética y seguridad, el debate sobre la creación de instrumentos fiscales comunes más permanentes vuelve inevitablemente al centro de la agenda política europea.

Otro elemento clave es la política industrial europea. Durante décadas, el enfoque dominante dentro de la Unión se basó en la promoción de la competencia dentro del mercado interior y en una intervención limitada del Estado en la economía. Sin embargo, la creciente utilización de políticas industriales activas por parte de Estados Unidos y China ha reconfigurado el entorno competitivo global. En este contexto, la Unión se enfrenta al reto de desarrollar instrumentos de política industrial capaces de reforzar sectores estratégicos sin fragmentar el mercado interior ni generar nuevas asimetrías entre Estados miembros.

La dimensión de seguridad y defensa también forma parte de este debate. La guerra de Ucrania ha puesto de relieve tanto la importancia de la cooperación europea en materia de defensa como la persistente dependencia de capacidades estadounidenses en ámbitos críticos como inteligencia, logística o sistemas de defensa avanzados. Aunque la OTAN seguirá siendo el pilar central de la seguridad europea en el futuro previsible, el refuerzo de la base industrial de defensa europea aparece cada vez más como un componente esencial de la autonomía estratégica.

A estos desafíos institucionales se suma una dimensión política igualmente relevante. La profundización de la integración europea en ámbitos estratégicos requiere niveles elevados de consenso entre Estados miembros. Sin embargo, las diferencias en percepciones de amenaza, modelos económicos o prioridades nacionales continúan condicionando el alcance y el ritmo de las reformas.

En este contexto, la autonomía estratégica europea no puede entenderse únicamente como un conjunto de políticas sectoriales. Implica, en última instancia, una redefinición del equilibrio entre soberanía nacional e integración supranacional. La cuestión central es si los Estados miembros están dispuestos a avanzar hacia una mayor coordinación política en ámbitos estratégicos con el objetivo de reforzar la posición colectiva de Europa en el sistema internacional.

La respuesta a esta cuestión determinará en gran medida la capacidad de la Unión Europea para adaptarse a un orden internacional cada vez más competitivo. Sin una base industrial, tecnológica y fiscal más integrada, la autonomía estratégica europea corre el riesgo de permanecer como un objetivo político ampliamente compartido pero difícil de materializar en la práctica.

Conclusión

Europa entre autonomía estratégica y dependencia funcional

La transformación del entorno internacional obliga a reconsiderar algunos de los supuestos que durante décadas sustentaron el proyecto europeo. El contexto que favoreció el desarrollo de la integración –caracterizado por la expansión del comercio internacional, la relativa estabilidad geopolítica y la garantía de seguridad proporcionada por la alianza transatlántica– está siendo sustituido por un sistema internacional marcado por la competencia entre grandes potencias y por el uso creciente de instrumentos económicos como herramientas de poder.

En este nuevo escenario, la posición de la Unión Europea se vuelve necesariamente más compleja. El modelo de integración que permitió construir un mercado continental altamente regulado y profundamente abierto se enfrenta ahora a un entorno en el que la capacidad de producir, innovar y proteger sectores estratégicos adquiere una importancia creciente. La autonomía económica y tecnológica deja de ser un elemento secundario del proyecto europeo para convertirse en una condición relevante para preservar su capacidad de decisión política.

El análisis desarrollado en este artículo ha identificado tres dimensiones principales de esta transformación. En primer lugar, la reconfiguración del orden internacional en torno a la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China redefine los equilibrios globales y desplaza la competencia hacia ámbitos como la tecnología, la energía o las cadenas de suministro. En segundo lugar, el vínculo transatlántico continúa siendo fundamental para la seguridad europea, pero se desarrolla en un contexto en el que las prioridades estratégicas estadounidenses se orientan cada vez más hacia la competencia con China y hacia el refuerzo de su base industrial y tecnológica. Finalmente, las vulnerabilidades estructurales de la Unión Europea en sectores clave revelan los límites de un modelo de integración que durante décadas pudo apoyarse en un entorno internacional relativamente estable.

Estas dinámicas convergen en una cuestión central: la capacidad de Europa para actuar como actor estratégico en el sistema internacional emergente. La autonomía estratégica no implica aislamiento ni ruptura con las alianzas existentes. Implica, más bien, la posibilidad de sostener decisiones políticas propias en ámbitos críticos sin depender estructuralmente de actores externos.

La cuestión fundamental es si la Unión Europea está dispuesta a desarrollar los instrumentos institucionales, fiscales y políticos necesarios para alcanzar ese objetivo. En un sistema internacional cada vez más competitivo, la capacidad de combinar escala económica, capacidad tecnológica y coherencia política se convierte en un elemento central del poder. La alternativa a ese proceso no es necesariamente el declive europeo, sino una forma más sutil de dependencia estructural.

En última instancia, el dilema al que se enfrenta la Unión Europea puede formularse de manera relativamente simple: reforzar su capacidad de acción colectiva para preservar su autonomía estratégica o aceptar una posición cada vez más condicionada dentro de un sistema internacional dominado por potencias con mayores capacidades industriales, tecnológicas y fiscales.

Referencias bibliográficas

- BRADFORD, A. (2020): *The Brussels effect: How the European Union rules the world*. Oxford University Press.
- EUROPEAN COMMISSION (2022): *REPowerEU plan*. European Commission. <https://commission.europa.eu>
- EUROPEAN COMMISSION (2024): *The future of European competitiveness*. European Commission.
- EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2023a): *Regulation (EU) 2023/2675 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on the protection of the Union and its Member States from economic coercion by third countries*. Official Journal of the European Union.
- EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2023b): *Regulation (EU) 2023/1781 of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (European Chips Act)*. Official Journal of the European Union.
- FARRELL, H. y NEWMAN, A. L. (2019): Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
- THE WHITE HOUSE (2017): *National security strategy of the United States of America*. The White House.
- THE WHITE HOUSE (2022): *National security strategy of the United States of America*. The White House. <https://www.whitehouse.gov>

Neoliberalismo autoritario y giro moral: la reorganización del orden social tras la crisis

Mònica Clua Losada

*Profesora Beatriz Galindo Sènior
Universitat Pompeu Fabra*

¿**E**stamos ante el fin del neoliberalismo o ante su metamorfosis? La pregunta recorre hoy el debate público en un contexto de policrisis: emergencia climática, reconfiguración geopolítica, guerras comerciales y militares, crisis de reproducción social, endeudamiento estructural y creciente desigualdad. A ello se suma un desplazamiento político inquietante: el ascenso de fuerzas reaccionarias, el endurecimiento de los dispositivos de control estatal y la creciente normalización de discursos autoritarios. A primera vista, podría parecer que el neoliberalismo – identificado durante décadas con la desregulación, la globalización y el individualismo competitivo– estaría siendo sustituido por algo distinto: nacionalismo económico, proteccionismo selectivo, conservadurismo moral o incluso formas abiertas de autoritarismo.

Sin embargo, esta lectura resulta engañosa. Más que a un colapso del neoliberalismo, asistimos a su reconfiguración. El neoliberalismo no fue nunca simplemente una doctrina económica basada en la reducción del Estado, ni una ideología coherente y cerrada. Ha sido, sobre todo, una racionalidad política que ha estructurado durante décadas la acción gubernamental, la organización de los mercados y la producción de subjetividades. Su núcleo no reside únicamente en la liberalización económica, sino en la reorganización del Estado y de la sociedad en torno a la competencia, la disciplinarización del trabajo y la subordinación de lo social a las exigencias de la acumulación de capital.

Desde esta perspectiva, el llamado «giro autoritario» no representa una ruptura, sino una intensificación de tendencias ya presentes. Tras la crisis financiera de 2008, lejos de revertirse el proyecto neoliberal, se profundizó mediante rescates financieros, reformas laborales, políticas de austeridad y constitucionalización de la disciplina fiscal. En muchos países, incluido el estado español, la gestión de la crisis implicó una despolitización acelerada de las decisiones económicas fundamentales y una limitación efectiva de la capacidad democrática para disputar el rumbo económico. El resultado fue un Estado reorientado: más fuerte para garantizar la estabilidad financiera, más flexible para proteger determinadas fracciones del capital y más duro en el disciplinamiento del trabajo y de los sectores sociales precarizados.

Lo que sí se ha erosionado en este proceso es el consenso social que durante años sostuvo la legitimidad neoliberal. La promesa meritocrática –según la cual el esfuerzo individual permitiría movilidad social ascendente– ha perdido credibilidad en amplias capas de la población. El empleo estable ha sido sustituido por trayectorias laborales fragmentadas; la vivienda se ha convertido en activo financiero; el endeudamiento ha reemplazado a la protección social; los servicios públicos han sido tensionados hasta el límite. Cuando la promesa de progreso deja de ser verosímil, la gobernabilidad ya no puede descansar exclusivamente en el consentimiento competitivo. Es en este punto donde adquiere centralidad lo que aquí denomino el giro moral del neoliberalismo.

Este giro no debe interpretarse como un simple retorno a valores tradicionales ni como una reacción cultural espontánea. Se trata de una operación política que rearticula el proyecto neoliberal sobre nuevas bases de legitimación. Si durante décadas el discurso dominante interpelaba a la ciudadanía como emprendedora de sí misma –responsable de su éxito o de su fracaso–, en la fase actual asistimos a una moralización más explícita del orden social. La precariedad deja de explicarse únicamente como déficit de empleabilidad para inscribirse en narrativas de mérito, disciplina y responsabilidad; la pobreza se asocia a comportamientos desviados; las políticas de igualdad se presentan como privilegios indebidos; las migraciones se construyen como amenaza moral y económica; el conflicto distributivo se desplaza hacia conflictos identitarios cuidadosamente alimentados.

En este contexto, la apelación al orden, a la nación, a la familia o a la seguridad no sustituye al neoliberalismo: lo blinda. La construcción de enemigos internos o externos –migrantes, feministas, sindicalistas, personas trans– opera como mecanismo de desplazamiento del conflicto social. El malestar generado por décadas de precarización se redirige hacia sujetos vulnerabilizados en lugar de hacia las estructuras que producen dicha precariedad. El resultado es una convergencia entre políticas económicas que profundizan la mercantilización y discursos morales que legitiman jerarquías sociales más rígidas.

Este proceso implica también una nueva reorganización del Estado. Lejos del mito del «Estado mínimo», la fase actual se caracteriza por la expansión de dispositivos punitivos, el refuerzo de la capacidad ejecutiva, la securitización de la política migratoria y el uso estratégico del derecho para contener la protesta social. El Estado no se retira: selecciona. Protege espacios y circuitos de acumulación, mientras endurece las condiciones de vida de quienes quedan fuera de ellos. La moralización del orden social actúa así como complemento indispensable del disciplinamiento económico.

Para el sindicalismo de clase, este desplazamiento plantea desafíos fundamentales. El conflicto ya no se articula únicamente en torno a salarios y condiciones laborales, sino también en torno al sentido común, que define quién merece protección, quién es considerado productivo y quién es construido como carga. Si el neoliberalismo muta para sobrevivir, incorporando una dimensión moral y autoritaria más explícita, la respuesta no puede limitarse a la negociación económica. Requiere disputar la narrativa que convierte la desigualdad en resultado de fallos individuales y la precariedad en consecuencia inevitable del cambio global.

Este artículo parte, por tanto, de una premisa clara: no estamos ante el fin del neoliberalismo, sino ante su metamorfosis autoritaria y moralizadora. Comprender esta transformación es condición necesaria para reconstruir horizontes de acción colectiva capaces de enfrentar no solo los efectos económicos del modelo, sino también las formas de legitimación que hoy lo sostienen. En las páginas que siguen se analizará, en primer lugar, cómo la dimensión disciplinaria ha sido constitutiva del neoliberalismo desde sus primeras formulaciones; en segundo lugar, cómo la crisis de legitimidad ha dado lugar a una rearticulación conservadora del proyecto; y finalmente, qué implicaciones tiene este giro para la acción sindical y para la reconstrucción de alternativas democráticas en un tiempo de profunda incertidumbre.

I. Neoliberalismo autoritario: intensificación disciplinaria y crisis de hegemonía

Para comprender el giro moral actual es necesario partir de una premisa incómoda: el neoliberalismo nunca fue simplemente un proyecto de liberalización económica. Desde sus primeras implantaciones, implicó una reorganización activa del Estado orientada a disciplinar el trabajo, reconfigurar las relaciones de fuerza entre capital y trabajo y garantizar nuevas condiciones de acumulación. La desregulación del mercado laboral, las privatizaciones, la financiarización y la subordinación de la política fiscal a criterios de estabilidad no fueron procesos «naturales» del mercado, sino decisiones políticas sostenidas por marcos institucionales fuertes y, en muchos casos, por dispositivos de coerción explícita o implícita.

En el caso español, la transición democrática coincidió con una profunda reestructuración del capitalismo global. La institucionalización del sindicalismo mayoritario, las sucesivas reformas laborales y la integración europea operaron

simultáneamente como mecanismos de modernización económica y como tecnologías de desmovilización social. El poder estructural del trabajo se transformó en presencia institucional, mientras la fragmentación contractual y la temporalidad erosionaban el poder asociativo. El resultado no fue un simple proceso de liberalización, sino la consolidación de un neoliberalismo con rasgos marcadamente autoritarios en su relación con el mundo del trabajo: proliferación de contratos temporales, reducción de costes de despido, segmentación del mercado laboral y utilización estratégica de políticas sociales para pacificar sectores específicos mientras otros quedaban expuestos a la precarización.

Durante los años noventa y dos mil, el crecimiento basado en la financiarización y en el modelo inmobiliario permitió sostener una apariencia de estabilidad. La expansión del crédito, la mercantilización de la vivienda y la internacionalización de grandes empresas españolas actuaron como mecanismos de absorción de tensiones sociales. Sin embargo, esa estabilidad descansaba sobre bases frágiles: endeudamiento privado masivo, especialización productiva vulnerable y debilitamiento progresivo de la protección social. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, el proyecto neoliberal mostró su verdadera arquitectura: rescates bancarios, reformas laborales regresivas y constitucionalización de la disciplina fiscal.

Lejos de suponer un paréntesis, la gestión de la crisis representó una profundización del neoliberalismo en clave autoritaria. En España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011 simbolizó esa mutación: la prioridad absoluta del pago de la deuda sobre cualquier otra consideración social. La política económica quedó blindada frente al debate democrático. Se institucionalizó la idea de que no había alternativa, que las decisiones fundamentales debían sustraerse a la deliberación colectiva. La austeridad se presentó como necesidad técnica y no como opción ideológica.

Sin embargo, ese momento marcó también un punto de inflexión. En 2011, amplios sectores sociales irrumpieron en el espacio público cuestionando no solo las políticas de ajuste, sino el propio marco de representación política. Las plazas se llenaron de una consigna que condensaba una ruptura simbólica profunda: «no nos representan». Aquella explosión social –en el estado español y en otros lugares– no fue únicamente una reacción contra la austeridad, sino una reapropiación de la imaginación política. Durante un breve periodo, amplios sectores se atrevieron a formular demandas que desbordaban la gestión tecnocrática de la crisis. Se puso en cuestión la subordinación de la democracia a los mercados financieros, se problematizó la deuda como mecanismo de disciplinamiento y se reclamó una reorientación radical de las prioridades económicas.

Ese momento constituyó el mayor desafío al neoliberalismo desde su consolidación hegemónica en los años ochenta. No porque lograra revertir estructuralmente el modelo, sino porque fracturó su legitimidad. La narrativa meritocrática y la promesa de movilidad social quedaron definitivamente erosionadas. La crisis dejó de percibirse como accidente y empezó a entenderse como consecuencia estructural de un modelo de acumulación. En ese sentido, el neoliberalismo como proyecto de estabilización hegemónica fracasó: ya no podía presentarse como horizonte incuestionable de progreso.

Pero el fracaso de la hegemonía no implicó el abandono del proyecto. Implicó su reconfiguración. Incapaz de reconstruir un consenso amplio basado en la promesa de prosperidad compartida, el neoliberalismo transitó hacia una forma más explícitamente disciplinaria. Allí donde el consentimiento competitivo se debilitaba, emergían dispositivos de control más visibles. La gestión tecnocrática se combinó progresivamente con apelaciones al orden, la seguridad y la autoridad. La frustración social generada por la precarización estructural encontró cauces políticos que desplazaban el conflicto desde la redistribución hacia la identidad.

En este sentido, la fase posterior a 2011 no puede interpretarse como simple agotamiento del neoliberalismo, sino como transición hacia su metamorfosis autoritaria y moralizadora. El proyecto original –basado en la promesa de competencia y movilidad– mostró sus límites cuando amplios sectores comprendieron que el ascenso social era una excepción y no la regla. Cuando nos atrevimos a imaginar alternativas, el marco se endureció. No para desaparecer, sino para blindarse.

Este desplazamiento constituye el punto de partida del giro moral que analizaremos a continuación. Si la disciplina económica ya no basta para garantizar estabilidad, la moralización del orden social se convierte en recurso central. No se trata de una desviación cultural, sino de una estrategia de recomposición del poder en un contexto de crisis de hegemonía. El neoliberalismo no ha terminado; ha mutado para sobrevivir.

II. De la disciplina económica a la moralización de la precariedad

El neoliberalismo siempre operó a través de la disciplina económica. Reformas laborales, privatizaciones, contención salarial, flexibilización contractual y mercantilización de derechos no fueron meros ajustes técnicos, sino mecanismos orientados a reconfigurar las relaciones de fuerza entre capital y trabajo. La precariedad no fue un efecto colateral, sino un instrumento de gobierno. La inseguri-

ridad laboral, el endeudamiento y la competencia individualizada funcionaron como tecnologías de subordinación social.

Durante décadas, este disciplinamiento pudo legitimarse mediante una narrativa meritocrática relativamente eficaz. El mensaje era claro: en un mercado abierto y competitivo, el esfuerzo individual sería recompensado. La responsabilidad del éxito o del fracaso recaía sobre cada persona. El desempleo se interpretaba como déficit de empleabilidad; la pobreza como carencia de habilidades; la desigualdad como consecuencia inevitable de diferencias de productividad. La precariedad, en este marco, no era injusticia estructural sino fase transitoria.

La crisis de 2008 fracturó esa narrativa. La caída del sistema financiero, los rescates bancarios y la transferencia masiva de recursos públicos hacia el sector privado hicieron visible que la responsabilidad no estaba distribuida individualmente. Millones de personas que habían cumplido con las reglas –trabajar, endeudarse para acceder a la vivienda, confiar en el crecimiento– quedaron expuestas a desahucios, desempleo y pérdida de derechos. El mensaje meritocrático dejó de sostenerse frente a la evidencia de una arquitectura económica diseñada para socializar pérdidas y privatizar beneficios.

En ese contexto, el disciplinamiento puramente económico comenzó a mostrar límites como mecanismo de estabilización. Cuando la promesa de movilidad pierde credibilidad, la culpabilización individual ya no resulta suficiente. Es aquí donde emerge con mayor claridad el giro moral. No como sustitución del neoliberalismo, sino como su adaptación estratégica.

La precariedad empieza entonces a explicarse no solo como resultado de insuficiente competencia, sino como consecuencia de desviaciones morales. La pobreza deja de asociarse exclusivamente a la falta de empleo y pasa a vincularse con estilos de vida considerados improductivos o dependientes. Las políticas sociales se redefinen bajo el prisma de la condicionalidad y el control: ayudas sujetas a cumplimiento estricto de requisitos, vigilancia sobre perceptores, retórica contra el «abuso» del sistema. La ciudadanía ya no es interpelada solo como emprendedora de sí misma, sino como sujeto que debe demostrar disciplina, obediencia y adecuación a normas de comportamiento.

Este desplazamiento tiene una dimensión de género particularmente relevante. El neoliberalismo descansó históricamente en la invisibilización del trabajo reproductivo y en la transferencia de costes sociales hacia el ámbito doméstico. En la fase actual, la apelación a la familia como núcleo de protección refuerza esa lógica. La responsabilidad de absorber los impactos de la precariedad –cuidados, desempleo juvenil, envejecimiento– recae de manera desproporcionada sobre

las mujeres. El ideal de autosuficiencia se combina con una moralización de la maternidad, del cuidado y de la «buena conducta» familiar, reforzando jerarquías tradicionales bajo un discurso de orden.

Al mismo tiempo, la juventud precarizada se convierte en objeto ambivalente: por un lado, símbolo de flexibilidad y adaptación; por otro, sospechosa de falta de esfuerzo. El trabajador o trabajadora temporal, el falso autónomo, la persona migrante empleada en sectores esenciales pero mal remunerados, pasan a habitar un espacio ambiguo donde su vulnerabilidad se naturaliza. La inseguridad estructural se redefine como rasgo generacional o como déficit cultural.

La moralización también opera sobre la deuda. El endeudamiento privado –especialmente en el acceso a la vivienda– fue promovido durante años como vía legítima de integración social. Tras la crisis, quienes no pudieron hacer frente a sus obligaciones fueron frecuentemente representados como irresponsables. La deuda, que funcionó como mecanismo de expansión económica, se convirtió en marcador moral. El incumplimiento dejó de interpretarse como síntoma de un modelo financiero desregulado y pasó a presentarse como fallo individual.

Este proceso de moralización cumple una función política central: desplaza el conflicto. Si la precariedad es consecuencia de comportamientos inadecuados, la estructura económica queda fuera de la discusión. Si la pobreza se explica por falta de disciplina, no es necesario cuestionar la distribución de la riqueza. Si el acceso a derechos se presenta como privilegio indebido, la retracción del Estado social puede justificarse en nombre de la equidad.

La transición desde la disciplina económica hacia la moralización del orden no elimina la primera; la refuerza. La flexibilidad laboral continúa, la financiarización persiste, la desigualdad se amplía. Pero ahora esas dinámicas se sostienen mediante un relato que apela a valores de autoridad, seguridad y jerarquía. El trabajador precario no es solo competitivo; debe ser obediente. El beneficiario de una prestación no es solo receptor de ayuda; debe ser vigilado. El migrante no es solo mano de obra; es potencial amenaza.

Este giro se hace especialmente visible cuando la frustración social acumulada tras 2011 encuentra cauces políticos que articulan el malestar en clave identitaria. El conflicto distributivo –entre capital y trabajo– se reconfigura como conflicto cultural. La indignación frente a la precarización puede redirigirse hacia quienes son construidos como competidores desleales por recursos escasos: migrantes, minorías, mujeres que cuestionan roles tradicionales, personas trans que cuestionan la construcción del género. El neoliberalismo no desaparece en este pro-

ceso; se rearticula mediante una convergencia entre disciplina económica y conservadurismo moral.

Lo que está en juego no es solo un cambio discursivo, sino una recomposición del bloque de poder. Ante la imposibilidad de reconstruir consenso en torno a la promesa de prosperidad compartida, el orden social se legitima mediante apelaciones a la autoridad y a la protección frente a amenazas externas o internas. La precariedad deja de ser problema estructural y se convierte en terreno de evaluación moral.

Comprender esta transición es crucial para evitar diagnósticos simplistas que opongan neoliberalismo y autoritarismo como si fueran proyectos incompatibles. El giro moral no sustituye a la lógica neoliberal; la acompaña y la blindada. Allí donde la disciplina económica generó fisuras, la moralización interviene para cerrar filas y redefinir las líneas del conflicto. Esta moralización se articula con una reorganización más amplia del Estado y con la construcción de enemigos políticos que permiten consolidar una forma de neoliberalismo explícitamente autoritaria.

III. El giro moral como blindaje: convergencia reaccionaria y reorganización del Estado

El desplazamiento desde la disciplina económica hacia la moralización del orden no opera en el vacío. Se inscribe en una reconfiguración más amplia del Estado y del campo político que puede describirse como una convergencia reaccionaria. Bajo esta dinámica, proyectos que en apariencia podrían resultar heterogéneos –neoliberalismo económico, nacionalismo conservador, fundamentalismos religiosos, securitización de fronteras– encuentran puntos de articulación funcional en torno a un objetivo común: estabilizar un modelo de acumulación en crisis mediante la reorganización autoritaria del poder.

Esta convergencia no supone la desaparición de la agenda neoliberal clásica. Las rebajas fiscales al capital, la desregulación ambiental y laboral, la expansión de espacios privatizados y la financiarización continúan siendo ejes centrales. Lo que cambia es el marco de legitimación. Allí donde el discurso meritocrático se agota, emerge la retórica del orden. Allí donde la competencia ya no promete movilidad, se ofrece protección frente a amenazas construidas. El Estado no se reduce; se redefine.

En este proceso, la construcción del «enemigo moral» adquiere centralidad. La figura del migrante como amenaza económica y cultural, del feminismo como

desestabilizador del orden social, de las disidencias sexuales como símbolo de decadencia, o incluso del sindicalismo como obstáculo a la modernización, permite desplazar el eje del conflicto. El malestar generado por décadas de precarización y desigualdad se redirige hacia sujetos vulnerables, mientras las estructuras económicas que producen esa precariedad permanecen intactas.

La política migratoria ofrece un ejemplo paradigmático de este mecanismo. El endurecimiento de controles fronterizos, la expansión de dispositivos de vigilancia y detención, y la normalización de discursos securitarios no contradicen la lógica neoliberal; la complementan. Las fronteras funcionan simultáneamente como filtros laborales y como escenarios simbólicos donde se dramatiza la defensa del orden nacional. Mientras la circulación de capital y mercancías permanece ampliamente garantizada, la movilidad humana se convierte en terreno de disciplinamiento y espectáculo político.

Esta dinámica no es exclusiva de un país concreto. En distintos contextos, la securitización de la política migratoria ha coexistido con profundizaciones de la agenda neoliberal. La apelación a la soberanía nacional convive con la protección activa de circuitos globales de acumulación. El endurecimiento penal y el refuerzo del poder ejecutivo se presentan como respuestas necesarias frente a crisis múltiples, pero operan también como instrumentos para aislar la política económica de la disputa democrática.

La reorganización estatal en esta fase adopta varias formas complementarias. En primer lugar, se fortalece la capacidad ejecutiva frente a los mecanismos deliberativos. Las decisiones estratégicas –fiscales, financieras, regulatorias– tienden a concentrarse en ámbitos menos permeables al control parlamentario o social. En segundo lugar, se amplían los dispositivos punitivos y de vigilancia, tanto en el ámbito de la seguridad como en la gestión de prestaciones sociales. La condicionalidad, el control y la sospecha se normalizan. En tercer lugar, el derecho se utiliza estratégicamente para limitar la protesta y redefinir los márgenes de la acción colectiva.

El mito del «Estado mínimo» se revela entonces como ficción ideológica. El neoliberalismo no implica ausencia de Estado, sino Estado selectivo. Un Estado que protege activamente determinados intereses económicos mientras externaliza costes sociales y endurece las condiciones de vida de quienes quedan fuera de los espacios privilegiados de acumulación. La moralización del orden facilita esta selectividad: legitima el endurecimiento frente a quienes son representados como improductivos o peligrosos, mientras naturaliza los beneficios otorgados al capital como condición necesaria para el crecimiento.

La convergencia reaccionaria permite además recomponer alianzas sociales fragmentadas por la precarización. Sectores que han experimentado pérdida de estatus o inseguridad pueden encontrar reconocimiento simbólico en discursos que apelan a la identidad nacional, al orden tradicional o a la autoridad. Este reconocimiento no se traduce necesariamente en mejoras materiales, pero sí en una reubicación simbólica dentro de la jerarquía social. El conflicto distributivo se transforma así en conflicto cultural, y la desigualdad económica se oculta tras debates sobre valores.

No se trata de afirmar que el giro moral sea mera manipulación. La inseguridad material real generada por el modelo neoliberal crea condiciones propicias para este desplazamiento. Cuando el empleo es inestable, la vivienda inaccesible y el futuro incierto, la promesa de orden puede resultar más tangible que la de movilidad. La apelación a la seguridad –económica, cultural o física– actúa como pegamento político en sociedades atravesadas por la fragmentación. Sin embargo, esta recomposición no elimina las contradicciones estructurales. La convergencia entre neoliberalismo y conservadurismo moral es funcional, pero no necesariamente estable. La ampliación de desigualdades, la crisis ecológica y la sobreexplotación del trabajo continúan generando tensiones. El blindaje autoritario puede contener temporalmente la contestación, pero no resuelve las causas profundas del malestar.

Desde esta perspectiva, el giro moral debe entenderse como estrategia de supervivencia. No es la negación del neoliberalismo, sino su adaptación ante el fracaso de reconstruir hegemonía tras 2008 y, especialmente, tras la ruptura simbólica que supuso el período entre 2011 y 2020. Cuando amplios sectores sociales cuestionaron la subordinación de la democracia a los mercados, el proyecto respondió endureciendo sus mecanismos de protección. La moralización del orden social, la construcción de enemigos y la expansión de dispositivos punitivos forman parte de ese blindaje. El resultado es una forma de neoliberalismo más explícitamente autoritaria, en la que la gestión tecnocrática convive con apelaciones emocionales a la identidad y la seguridad. La política económica permanece orientada a la protección del capital, pero su legitimación se apoya crecientemente en la promesa de restaurar jerarquías y controlar amenazas.

Comprender esta convergencia es crucial para evitar interpretaciones que opongan «neoliberalismo globalista» y «reacción nacional» como si fueran proyectos incompatibles. En muchos casos, se trata de articulaciones complementarias. El orden moral no sustituye al mercado; lo protege. La autoridad no reemplaza la competencia; la asegura. Las implicaciones de esta metamorfosis para el sindicalismo de clase y para la reconstrucción de horizontes democráticos capaces

de disputar no solo las políticas económicas, sino también el marco moral que hoy las sostiene, es quizás el mayor reto de nuestros tiempos.

IV. Sindicalismo en tiempo de metamorfosis: disputar la economía y el sentido común

Si el neoliberalismo no ha terminado, sino que ha mutado hacia formas más explícitamente autoritarias y moralizadoras, el desafío para el sindicalismo de clase es doble. No se trata únicamente de negociar salarios, condiciones laborales o marcos regulatorios –tareas centrales e irrenunciables–, sino de intervenir en el terreno donde hoy se está reconfigurando la legitimidad del orden social.

Durante décadas, el conflicto capital-trabajo pudo articularse principalmente en términos distributivos. La cuestión central era cómo se repartía la riqueza generada y bajo qué condiciones se organizaba el trabajo. Hoy ese conflicto persiste, pero aparece desplazado por una disputa más amplia sobre quién merece protección, quién es productivo y quién es considerado carga o amenaza. El giro moral del neoliberalismo redefine el campo de batalla.

En este nuevo escenario, la precariedad no es solo un problema económico; es objeto de evaluación moral. Las políticas sociales no se presentan como derechos colectivos, sino como concesiones condicionadas. La desigualdad no se explica por relaciones estructurales de poder, sino por comportamientos individuales. La moralización del orden convierte la cuestión social en cuestión de disciplina.

Para el sindicalismo, aceptar ese marco implica una trampa. Si la discusión se limita a mejorar la competitividad o a gestionar la empleabilidad, se corre el riesgo de reforzar la lógica que individualiza el riesgo y fragmenta la clase trabajadora. El desafío consiste en repolitizar aquello que ha sido moralizado. Repolitizar la precariedad significa afirmar que no es resultado de fallos individuales, sino de decisiones estructurales: reformas laborales que favorecen la temporalidad, modelos productivos basados en sectores de bajo valor añadido, financiarización que prioriza rentas sobre salarios. Repolitizar la vivienda implica señalar que su transformación en activo financiero no es inevitabilidad económica, sino elección política. Repolitizar la deuda significa cuestionar la subordinación de la política fiscal al pago prioritario de acreedores frente a la inversión social.

Pero la tarea no es solo económica. Si el neoliberalismo actual se blinda mediante apelaciones al orden, la seguridad y la identidad, el sindicalismo no puede limi-

tarse a una defensa técnica de derechos laborales. Debe disputar también el sentido común que convierte a migrantes, mujeres organizadas o jóvenes precarizados en chivos expiatorios del malestar social. Esto requiere reconstruir una noción inclusiva de clase trabajadora que no se base únicamente en la relación salarial tradicional. La fragmentación del trabajo –plataformas digitales, falsos autónomos, economía de cuidados, empleo migrante– exige ampliar la mirada. La convergencia reaccionaria opera dividiendo: nacionales frente a extranjeros, trabajadores «productivos» frente a «dependientes», hombres frente a mujeres, generaciones entre sí. Frente a esa fragmentación, la respuesta no puede ser defensiva o corporativa.

La dimensión de género resulta especialmente central. La moralización del orden social reubica a la familia como amortiguador de la precariedad, reforzando la carga sobre las mujeres. Sin integrar plenamente la lucha por la redistribución del trabajo de cuidados y por la igualdad efectiva, cualquier proyecto sindical corre el riesgo de reproducir la división sobre la que se sostiene el modelo. La disputa no es solo salarial; es también sobre cómo se organiza la reproducción social.

Al mismo tiempo, el sindicalismo debe enfrentarse a la expansión de dispositivos punitivos y securitarios que limitan la acción colectiva. La criminalización de la protesta, la restricción de derechos de manifestación o la judicialización del conflicto laboral forman parte de la reorganización autoritaria del Estado. Defender el derecho a la organización y a la movilización es defender la posibilidad misma de disputa democrática. Esto no implica desconocer las transformaciones globales ni idealizar un pasado fordista que ya no existe (y que quizás nunca existió mucho más allá de la melancolía de una parte de las izquierdas). Implica reconocer que el marco actual busca naturalizar la subordinación social mediante una combinación de precariedad económica y jerarquía moral. Si el neoliberalismo muta para sobrevivir, el sindicalismo debe mutar para disputar.

La experiencia del periodo 2011-2020 mostró que amplios sectores sociales estaban dispuestos a cuestionar el marco aparentemente inamovible de la austeridad y la despolitización. Aquella irrupción no logró revertir estructuralmente el modelo, pero dejó una huella: la certeza de que la política económica no es destino inevitable. En ese sentido, el proyecto neoliberal como hegemonía cerrada fracasó. No pudo reconstruir plenamente el consenso tras la crisis.

El giro moral es, en parte, respuesta a ese fracaso. Cuando el sueño meritocrático se agota, se ofrece orden. Cuando la movilidad no es creíble, se promete seguridad. Cuando la desigualdad genera indignación, se desplaza la responsabilidad hacia otros. El desafío para el sindicalismo consiste en no aceptar ese

desplazamiento. Reforzar el debate sobre modelos productivos, democratización económica, transición ecológica justa y ampliación de derechos sociales no es solo cuestión programática; es cuestión estratégica. Significa disputar la idea de que no hay alternativa. Significa afirmar que la libertad no se reduce a la libertad de empresa, sino que incluye seguridad material, tiempo para vivir y capacidad colectiva de decisión.

La pregunta que abre este número –¿fin de ciclo o metamorfosis?– no admite una respuesta simple. El neoliberalismo como proyecto estabilizador ha mostrado límites evidentes. Pero su capacidad de adaptación no debe subestimarse. La moralización autoritaria es una de sus formas actuales de supervivencia. Comprender esa metamorfosis es condición necesaria para construir alternativas. No basta con resistir los efectos más visibles del modelo; es necesario desmontar la narrativa que lo legitima. Si el orden social se presenta hoy como cuestión moral, la respuesta debe ser profundamente política. Y esa tarea, en un tiempo de polícrisis e incertidumbre, sitúa al sindicalismo ante una responsabilidad histórica: no solo defender derechos, sino ampliar los márgenes de lo posible.

Neoliberalismo y posverdad: la batalla por el sentido común

Germán Llorca-Abad

*Profesor de Comunicación Audiovisual
Universitat Politècnica de València*

Me gustaría comenzar este artículo llevándolos conmigo a un lugar común. Piensen en cualquier tipo de reunión familiar medianamente multitudinaria. Estos eventos, con frecuencia, suelen iniciarse con conversaciones intrascendentes, de esas que forman parte de una normalidad cotidiana: el último partido de liga de algún equipo de fútbol, el cambio en la dirección de tráfico de alguna calle conocida, o que han cerrado una tienda de las de toda la vida. Los temas van encadenándose fluidamente y con aparente suavidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, en un momento determinado de esta deriva temática, siempre emerge una afirmación contundente: «Es que ya no se puede decir nada». Y en un instante, aquellas personas que hablaban apaciblemente sobre lo bueno que estaba el cocido de la bisabuela Antonia, se enzarzan en una discusión de dimensiones épicas. Es cierto que a la controversia suele ayudar el hecho de que las bebidas espirituosas hayan relajado el ambiente, pero no es *conditio sine qua non*.

Por supuesto, ese «ya no se puede decir nada» se sustenta en la cabeza de quien lo prorrumpa en una supuesta confabulación, lanzada por los progre-rojos-comunistas-comeniños, que consiste en imponer su agenda electro-eco-gay-lesbiana-trans-feminazi a las *personas de bien* y de *sentido común*, que somos *casi todOs*, con una segunda O mayúscula, ¡cómo Dios manda! Porque *todo el mundo sabe* que a poco que nos descuidemos, incluso antes de que termine la reunión familiar en curso, los *okupas* nos expulsarán de nuestra casa. Y es *un hecho indiscutible* que no hay nada mejor que la sanidad privada, a pesar de que la sanidad pública la *inventara Franco*, que hizo cosas buenas. Y ¡qué Viva el Rey!, y ¡qué bien se vivía en los años ochenta cuando no era necesario ponerse el cinturón en el coche ni existían las botellas de plástico con el tapón fundido a la rosca! Todo esto pasa *por culpa* de los burócratas europeos, empeñados en prohibir la siesta, el jamón serrano y la paella; y, cómo no, de los inmigrantes, que solo vienen a *darse la vida padre* a costa de nuestros impuestos.

¿Cómo hemos llegado a esta situación en la que lo grotesco rivaliza con lo razonable? Yo no sé qué pensarán ustedes, pero esto de ningún modo es una exageración ni se da solo en reuniones familiares. Pasa con los amigos, en el trabajo y en el grupo de *WhatsApp* del colegio de nuestros hijos. Y nos queda la

sensación de que, en situaciones como esta, que todas y todos hemos reconocido, se reflejan varios procesos transversales que son difíciles de aunar en una única explicación que conecte neoliberalismo y *posverdad*. Para hablar de este binomio, les propongo acercarnos a cuatro de los procesos mencionados y que podemos establecer como los pilares fundamentales que sostienen esta relación viciada. Los cuatro están interconectados, son interdependientes y configuran una aproximación simplificada de la que es la tesis principal de este artículo y que trataré de exponer más adelante.

El primer proceso tiene que ver con la imposibilidad de oponer ningún tipo de argumento racional frente a este tipo de exabruptos, porque los hechos han dejado de importar. Sí, progresivamente, los hechos están dejando de ser un elemento configurador de la realidad. No se trata de una cuestión menor, ya que no se salva casi nada: la efectividad de las vacunas, la esfericidad de la Tierra, o la culpabilidad del Estado de Israel en el genocidio que viene perpetrando en Palestina. En lo estrictamente político, la crisis de los hechos nos ha llevado a una suerte de *futbolización* de las discusiones: da igual que nuestro equipo juegue bien o mal, ya que siempre vamos a defenderlo, por encima de los argumentos. Por añadidura, a fin de fluidificar más esta última distorsión, sabemos que algún iluminado, o iluminada, inventó el término *polarización*. Un concepto que permite equiparar, y legítima como iguales, la opinión del energúmeno que propone hundir un barco lleno de niños y la de aquella persona que defiende esa idea loca de los *Derechos Humanos*.

En segundo lugar y en conexión con el anterior, observamos un proceso que tiene que ver con una crisis sistémica y generalizada de nuestras comunidades imaginadas, tal y como las definió Benedict Anderson¹: aquellas comunidades, generalmente asociadas a un Estado político, en las que existía un sentido de pertenencia compartido, porque se tenía en común una lengua, unos símbolos y unos relatos históricos que le daban sentido a nuestra identidad colectiva (que en algunos casos fueran *comunidades imaginadas impuestas a sangre y fuego* sería tema para otro artículo). Lo cierto es que la Globalización, de la que ya casi nadie habla, vino a romper para siempre las reglas de un equilibrio, precario y problemático como todos, pero equilibrio al fin y al cabo. ¿Por qué confiar en unas instituciones que están en crisis? La política, la justicia, la seguridad... todo se derrumba ante nuestros ojos sin que aparentemente pueda hacerse nada, *porque la democracia ya no es un valor superior* a otro tipo de regímenes más autoritarios.

¹ Anderson, B. (2008): *Comunidades imaginadas*. São Paulo, Companhia das Letras.

El tercero de los procesos tiene que ver con la gestión del relato sobre la realidad que hacen los medios de comunicación. El periodismo, en tanto que práctica mediadora entre los hechos y la ciudadanía, vive inmerso en una profunda crisis existencial y de valores. Crisis espoleada por el cuarto de los procesos, que veremos a continuación, y que lo ha abocado a un abismo de confusión interesada por los poderes, sobre todo, económicos. Los medios eran la gran fábrica de los consensos, los que nos ayudaban a identificar y a identificarnos con nuestras comunidades imaginadas. Empujados a competir ferozmente contra las redes sociales en el mercado de la atención, ponen en práctica estrategias comunicativas que ultrajan sus propios principios informativos. Desconfíen de los medios que confunden *pluralismo ideológico* con mera *contraposición de declaraciones*, de los que mezclan la opinión con los hechos. Y tampoco olviden la máxima *viriliana*²: el auténtico falseamiento de la realidad es aquel que trata de confundirla o equipararla con las *noticias de actualidad*.

El cuarto y último proceso de los que quiero hablarles tiene que ver con las características particulares de nuestra realidad tecnológico-comunicativa. Piense un momento en lo siguiente: ¿Cuál es su dieta comunicativa-informativa? ¿Qué es lo primero que hace al levantarse por la mañana? ¿Consulta su canal de *Telegram*? ¿Lee los titulares de *La Cope*, o son de *La SER*? ¿Quiénes le aconsejan esto o lo otro en *Instagram*, *TikTok* o *Facebook*? ¿Quiénes son sus fuentes de credibilidad? ¿Es de los que se deja incendiar con las soflamas de Susanna Griso, con las de Antonio Ferreras, o con las de Risto Mejide? ¿Es usted consciente de la importancia de contextualizar los hechos? Pues eso es exactamente lo que pasa: millones y millones de personas no tienen ni la más remota idea de cómo todos estos pequeños gestos tienen una incidencia decisiva en los desórdenes informativos del siglo XXI. Nuestros hábitos *informativos* se dan en un contexto de inmediatez, de sobreinformación y autoridades múltiples. Nuestras rutinas aceleradas y superficiales no nos permiten procesar convenientemente el alud de datos y detalles que nos asaltan a cada instante. ¿Nos ha llevado esto a ser más cautos, o más radicales, a la hora de opinar? Juzguen ustedes.

Como les avanzaba líneas atrás, tenemos una tesis principal de adónde nos lleva esta conjunción de variables. Y esta tesis es que, poco a poco, se nos está devolviendo a una suerte de Edad Media tecnificada en la que el sistema económico (neoliberalismo) nos empuja a un escenario de incertidumbre y confusión (posverdad) de la que se benefician solo unos pocos. Sí, la Edad Media; la edad, entre otras muchas cosas, del aislamiento comunicativo, del oscurantismo, de la superstición, de la peste bubónica y en realidad, la que fue Edad de Oro de

² Virilio, P. (1998): *Estética de la desaparición*. Barcelona, Anagrama.

quienes sabiéndose inmunes a cualquier tipo de castigo, en este o en el otro mundo, actuaban con completa impunidad sobre y contra la vida de quienes estaban por debajo de ellos en los azares de la vida. Esto sí es la *polarización real*, la que se da en estado puro, la de la sociedad de las turbas enfurecidas y de la más absoluta incomunicación. Nuestros sistemas democráticos no han sabido resolver la convivencia entre los intereses de la mayoría y los intereses de la minoría. Hoy, más que nunca, urge dirigir los análisis hacia la crítica de una situación que beneficia, casualmente, a los ricos entre los ricos: a una élite mundial tecnodeterminista de millonarios que terminará haciéndonos creer que el fuego no quema, o que el agua no moja, si con eso salvan su posición de ventaja estructural.

Quien les escribe ha vivido el azar de ser un privilegiado que, desde ese privilegio, tuvo la suerte de que su familia pudiera permitirse pagarle unos estudios universitarios en comunicación audiovisual. En aquellos años, varios eones antes de que existieran Netflix, las hipotecas inversas o el «cruapán», leíamos con avidez aquel extenso artículo de Ignacio Ramonet en *Le Monde Diplomatique* titulado: *Informarse, cuesta*³. Informarse costaba y sigue costando: en primer lugar, porque es necesario invertir una cantidad de tiempo y de esfuerzo que, como les decía, en el contexto tecnológico-comunicativo actual resulta cada vez más difícil. Tenemos acceso a más información de la que somos capaces de digerir, porque cada vez tenemos menos tiempo para hacerlo, o porque no prestamos la suficiente atención. Es por ello que estamos enfermos de información, como diría Todd Gitlin⁴ (también nos gusta el concepto de *infoxicados*, de Alfons Cornella⁵). En segundo lugar, porque las tecnologías de la comunicación absorben toda nuestra capacidad de discernimiento racional en un torrente inagotable de luz en el que miles de imágenes, vídeos y textos inconexos entre sí nos desenchufan de la experiencia real, inmediata en el sentido de no intermediada, y del contacto real con las otras personas.

Sí, paradójicamente, estamos en el camino de vuelta a la Edad Media comunicativa. Con nuestros *smartphones* conectados 24 horas a los datos, nuestros televisores sintonizados con HBO, con nuestros *smartwatches* que miden hasta el número de veces que respiramos y una miríada de dispositivos que nos distraen de lo que es auténticamente importante. Como decía Schopenhauer (que, dicho sea de paso, era bastante misógino), «no hay realidad sin voluntad de representación» y en esta encrucijada de la Historia, cuando más interconectados

³ <https://www.mondiplo.net/Informarse-cuesta>

⁴ Gitlin, T. (2005): *Enfermos de información*. Barcelona, Paidós.

⁵ Cornella, A. (2000): *Infonomía.com*. Bilbao, Deusto.

estamos, resulta cada vez más difícil, sorprendentemente, establecer una conversación verdadera. Michel Foucault⁶ explicó que los discursos están atravesados por relaciones de poder, porque es el poder el que los genera. Creo que a los que están congregados en este texto, no se les escapa que estamos muy lejos de que la comunicación humana se base en la voluntad que deberían tener dos interlocutores por entenderse profundamente.

Si bien la ideología neoliberal, la del individualismo llevado al *extremo-centro*, ha sufrido algún revés en los últimos tiempos, hasta el punto de que el mismísimo Francis Fukuyama⁷, inventor de los Finales de la Historia y de las Ideologías, dijo recientemente que «igual nos habíamos excedido en dicha interpretación»; sufrimos un síndrome de antipatía. «Antipatía» que, en este contexto, lejos de tener el significado que le atribuimos coloquialmente, se erige como antónimo de «empatía», término con el que conecta etimológicamente. Sencillamente, cada vez nos cuesta más identificarnos con los demás, porque hemos perdido la posibilidad de *definir en comunidad* qué significado profundo tienen nuestros consensos más elementales.

Quizá esto es, como ha dicho Žižek⁸, porque precisamente esta crisis del capitalismo tardío ha sido provocada por un desorden nihilista y la reproducción hedonista de nuestras sociedades. Es decir, bajo la apariencia de una *libertad sin límites*, se nos pide una *sumisión absoluta*, en cuya falta de profundidad reflexiva encuentran un campo abonado los populismos y los fundamentalismos alimentados por el neoliberalismo más salvaje y la extrema derecha. Actuamos, dice Žižek, como si fuéramos libres y decidiéramos libremente, pero en silencio no solo aceptamos sino que exigimos, que un mandato invisible, inserto en la mismísima forma de nuestra libertad de expresión, nos diga qué hacer y qué pensar. Dicho de otro modo: es como si, ante tanta confusión, necesitáramos una versión ultra-simplificada de la realidad y de los hechos para sentir algún tipo de sensación reconfortante, puesto que ya no hallamos esperanza ni certezas de emancipación en el futuro. Y en esto, en la creación de una *neolengua* despolitizada de etiquetas vacías de sentido que supuestamente explican la complejidad de la realidad, los señores *neomedievales* son únicos. La supuesta normalidad de los desastres que genera el turbo-capitalismo desbocado son: el *coworking*, el *coliving*, el *cocooning*, el *nesting*, el *freeganism*, los *doers*, el *me-time*, *Deliveroo*, *Uber* y *Elon Musk*, que es un genio.

⁶ Foucault, M. (2004): *Vigilar y castigar*. Buenos Aires, Siglo XXI.

⁷ Fukuyama, F. (1992): *La fin de l'Histoire et le dernier homme*. París, Flammarion.

⁸ Žižek, S. (2021): *Como un ladrón en pleno día. El poder en la era de la Posthumanidad*. Barcelona, Anagrama.

Les haré ahora, aleatoriamente, algunas preguntas más a propósito de unos temas recurrentes: ¿por qué hay quien se rebela por estúpideces sin base ni sentido como «es que ya no se puede decir nada» y no se indigna ante la petición de ciertos representantes sociales de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años, como si viviéramos en una novela de Charles Dickens? ¿Cómo es posible que no surja la indignación frente a tantas situaciones de profunda injusticia social? ¿Cómo es posible que hayamos perdido, si es que la hubo en algún momento, la capacidad de identificarnos en un sentido *humano de relación con y en el otro*? De nuevo, déjenme que haga la analogía con la Edad Media: sacrificio, sufrimiento, aceptación de un orden estamental, jerárquico y determinista, porque «no puede ser de otra manera»; porque «no puede cambiarse»; porque «siempre ha sido así». Es como si no hubiera existido nunca, al menos como una frágil ilusión de posibilidad, aquella idea de emancipación. Y esto es porque la producción y difusión de los discursos sobre la realidad está en manos de mercenarios sin escrúpulos. A modo de anécdota, Bob Black⁶ escribió en 1985 aquel provocativo libelo llamado *La abolición del trabajo*. Dudo que hoy tuviera la acogida que se le dispensó entonces.

Llegados a este punto, tras este *genial diagnóstico* que, seguramente con matices, es compartido por muchos de ustedes, me preguntarán: y ¿cuál es la solución? ¿Cómo evitar entrar de nuevo en la Edad Media? Yo les propongo dos tipos de solución: una de carácter individual y otra de carácter colectivo. Ambas tienen un requisito previo y es que levanten la mirada del teléfono de vez en cuando. La primera solución es cargarse de paciencia y hacer pedagogía, pero de la buena. Cuando en una reunión familiar, o en cualquier otro contexto, alguien diga eso de que «ya no se puede hablar de nada», hagan una pausa mental, respiren hondo tres o cuatro veces y prepárense para el enfrentamiento dialéctico. Recuerden que quien lo ha dicho seguramente sufre de *ceguera voluntaria*, de un desorden de picnolepsia, o que se *informa* solo con los NO-DO de Vicente Vallés. Acto seguido, le dan razón. Le dicen que, efectivamente, es imposible hablar de ciertos temas en nuestras conversaciones diarias. Le reafirman en su más que probable percepción de que una mano invisible es la responsable de que esto sea así. Y lo tranquilizan. Díganle: ¡estamos todos en el mismo barco!

Acto seguido, teatralizándolo convenientemente como usted entienda, le proponen alguno de esos temas de los que está prohibido hablar. Estos son algunos de mis preferidos, pero pueden añadir el que deseen (dense cuenta de que se trata de *temas* asentados en *números*, que es lo más parecido a un *hecho* con lo que podemos contar, todos ellos son fácilmente rastreables y contrastables. Infórmense bien y en profusión de detalles para poderlos abordar):

⁶ Black, B. (2013): *La abolición del trabajo*. Logroño, Pepitas de calabaza.

- La evasión fiscal y la corrupción nos cuestan 90 000 millones de euros anuales a los españoles, prácticamente la cantidad a la que asciende toda (TODA) la atención médico-sanitaria prestada por la Seguridad Social.

- Los 30 000 bebés robados durante la dictadura y primeros años de la transición al amparo de una de las instituciones más corruptas que existen en este país. Paco Lobatón ha relatado en múltiples ocasiones que su exitoso programa televisivo, *Quién sabe dónde*, fue cancelado cuando comenzaron a abordar los casos de los niños robados durante el franquismo.

- Hablando de la iglesia católica, comenten que en un reciente informe de 2023 se cifran en 100 000 las denuncias por violación o abusos sexuales perpetrados en su seno en todo el mundo.

- También pueden hablar de que vivimos en un Estado cuyo ex-jefe, evadido en un paraíso de oriente medio, por motivos que desconocemos, entregó 65 millones de euros, supuestamente de dinero público, a una señora llamada Corinna Larsen.

- Pueden mencionar el horror y el trauma que ha supuesto la muerte de 230 personas en las lluvias torrenciales de la DANA, que asoló la provincia de Valencia el 29 octubre de 2024. En el momento de escribir estas líneas, no sabemos aún quiénes fueron los responsables de la nefasta gestión político-administrativa del desastre, porque aún estamos esperando que una instrucción judicial *aclare los hechos*.

- En relación con el tema anterior, pueden mencionar todos los estragos que sean capaces de recordar vinculados al *cambio climático*.

- Propongan hablar del informe de Oxfam de 2023 en el que se detalla cómo en los últimos 5 años, la riqueza del mundo está peor distribuida y que el 1% más rico ha acaparado dos terceras partes de la riqueza generada en ese periodo.

- También pueden mencionar que mientras siguen surgiendo propuestas de alargar la edad de jubilación a los 70 o 72 años, informes como el de 2017 de la consultora McKinsey, nada sospechosa de veleidades izquierdosas, detalla cómo en 2030 la inteligencia artificial y la automatización habrán substituido a un 20% de toda la mano de obra a nivel mundial.

- Los archivos del pederasta Epstein, las decenas de miles de niños y personas asesinadas impunemente por Israel en Palestina, el encarcelamiento arbitrario de raperos, periodistas y artistas, el escándalo de las mamografías en Andalucía,

las 1 000 vidas que se cobra al año el Mar Mediterráneo de personas que simplemente tratan de huir del infierno en la Tierra... elijan; elijan cualquier tema sobre los que «ya no se puede decir nada» y disfruten del debate.

La segunda solución que les propongo es que recuperen *la conversación*. Recuerden a Foucault. Recuerden lo que significan todos los ideales *modernos* que han envejecido mal como la educación, la justicia, los derechos humanos, la solidaridad, la equidad, o la justicia social y que hay que volver a poner en valor. Recuerden todo eso y hagan política según la acepción número 9 del diccionario online de la Real Academia Española (RAE): *f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo*. «De cualquier otro modo»: en su comunidad de vecinos, en su club deportivo, o también en las reuniones familiares. Involúcrense *políticamente* y hagan pedagogía. Y si no son de involucrarse en un nivel que exija mucho compromiso, al menos recuerden todo esto cuando vayan a votar. Porque no, todos los políticos no son iguales.

Por último y siempre, de vez en cuando, levanten la mirada de la pantalla de sus teléfonos. El semiótico y filósofo italiano Umberto Eco, en una de las últimas entrevistas que concedió antes de morir, dijo que las redes sociales solo habían dado el derecho de hablar a «legiones de idiotas», en lo que consideró una «invasión de imbéciles». En una referencia menos erudita, el cómico británico Ricky Gervais nos recordaba hace poco en uno de sus monólogos, que aún es necesario poner grandes etiquetas en las botellas de lejía en las que diga «no beber». Establezcan la conexión entre las dos declaraciones y saquen sus propias conclusiones. Y quedémonos con otro hecho que emerge, muy de vez en cuando, entre todos los vídeos que encontramos en Internet. Un vídeo en el que el filósofo cristiano José Antonio Marina nos pone ante el espejo de nuestro propio *sentido común*: «El hecho de que exista la 'libertad de expresión' no significa para nada que todas las opiniones sean igual de respetables».

Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.

Tecnológicas y poder. La disputa del Estado

Ignacio Muro Benayas

*Economista, analista social y experto en nuevas tecnologías
y el mundo de la información*

Director de la Fundación Espacio Público

La reflexión del momento es mucho más que política. Es detectar si estamos en el borde de una ruptura civilizatoria o es, simplemente, la continuidad de lo ya conocido como neoliberalismo. Y esa reflexión trasciende de lo político.

Habría que preguntarse si cierta **«falsa conciencia»** se ha adueñado durante décadas del pensamiento racional, que concebía el progreso como el resultado de un determinado nivel civilizatorio que no permitiría volver a planteamientos primitivos. Como si las clases subalternas del Occidente, incluidos las élites y grupos empresariales de Europa, en vez de concebir la realidad existente como fruto de un equilibrio de fuerzas sociales o modos de poder transitorios, hubieran asumido una ficción de estabilidad global y permanente, basada en unos principios que no eran tales y que ahora desaparecen. Conviene preguntarse si la multilateralidad, el Estado de Bienestar, o la democracia basada en el imperio de la ley, eran el resultado de un nivel civilizatorio sin retorno.

La pregunta clave es si se cree que se restaurará el mundo de antaño, si solo vivimos un episodio pasajero o es el comienzo de un periodo brutal que necesita tocar fondo, en el que los intereses se presentan directamente sin ocultarse en ningún «relato» más o menos sofisticado.

Para contestar a esas cuestiones conviene repasar algunos rasgos claves del neoliberalismo.

1. El neoliberalismo ha aumentado el tamaño del Estado

El neoliberalismo no pretendía disminuir el tamaño del Estado, pretendía cambiar su función distributiva. En la trilogía del Consenso de Washington solo figuraba desregular, liberalizar, privatizar, junto a una retórica de «cambiar el papel del Estado». La consecuencia de un Estado Mínimo parecía implícita, pero era falsa.

Su papel salvador en las múltiples crisis financieras habidas, singularmente la del 2008, su actuación como proveedor de último recurso en la COVID-19, su rol creciente en los desastres ecológicos, su poder movilizador de recursos para la

industria de armamento, la batalla del espacio y el desarrollo tecnológico... muestran que su importancia no ha sido nunca discutida.

El gráfico siguiente perteneciente a un estudio de FUNCAS¹ muestra cómo su tamaño en los países de la OCDE se ha mantenido o incrementado desde 1985, precisamente las décadas de predominio neoliberal.



Utilizando medias móviles quinquenales nos revela también otro dato clave del gasto público neoliberal: su papel estabilizador anticíclico, esa función que Keynes le atribuía como garante último para frenar el hundimiento en las crisis y recuperar cuanto antes la senda del crecimiento, función que ha seguido desempeñando a la perfección mientras desmontaba los elementos sociales del Estado de Bienestar. A su manera, el neoliberalismo ha sido keynesiano en eso.

El neoliberalismo ha funcionado exactamente como estaba diseñado, concentrando riqueza, poder y oportunidades en manos de unos pocos. Y el Estado ha sido un instrumento eficaz para conseguirlo. La precarización del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y la vida, la mercantilización de los servicios públi-

¹ <https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/08/PEE164art12.pdf>

cos y la creciente desigualdad no son efectos colaterales, sino pilares centrales de un sistema en el que la acaparación de rentas ha corrido en paralelo a la concentración de poder en unos pocos oligarcas globales.

Que la izquierda política mirara principalmente al **tamaño de gasto público** como principal parámetro de progreso y se despreocupara de quién y para qué se gestionaba muestra su miopía. Más que arrebatarle funciones era arrebatarle recursos, aprovecharse de ellos para financiar, sin riesgos, su gestión privada. Dar la vuelta a las políticas redistributivas, compensando la desfiscalización de empresas y rentas altas con endeudamiento, incluso, siempre que se necesitara. El objetivo principal era tener disponibilidad de recursos para salvar sectores o empresas y ayudar a la competitividad de la economía, principalmente las grandes corporaciones asistidas por el Estado.

2. La gran batalla: la disputa del Estado y el achicamiento de sus funciones soberanas

No solo no se ha producido una disminución del gasto público y el tamaño del Estado, sino que la disputa por el destino de sus recursos se ha convertido en el campo principal de **la gran batalla**. No solo del Estado Nación sino del conjunto de las instituciones públicas representantes del interés general, también las supranacionales como **la UE**. La política hoy trata de eso.

Por un lado, subsiste la gran pugna para controlar espacios desde la lógica democrática del interés general frente a la parte cooptada por el interés privado, mediante privatizaciones, externalizaciones de servicios o la acción de los *lobbies*.

William Davies define el neoliberalismo² como un proyecto flexible que no duda en utilizar al Estado para reestructurar la sociedad. Es más, desde muy pronto lo asume como instrumento esencial para impulsar y proteger la competencia global bajo una ética de auditoría de mercado. No busca la desaparición del Estado sino introducir una *New Public Management*, que pretende neutralizar su potencia democratizadora y la autonomía política de las instituciones públicas, es decir, la soberanía democrática.

La pugna por amortizar la capacidad democratizadora del Estado se ha basado en tres pilares determinantes que Mariana Mazzucato ha estudiado en profundidad:

¹ William Davies (2014): *The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition*.

- De un lado, la **externalización del conocimiento estratégico** en beneficio de las grandes consultorías, que «infantiliza» a los gobiernos, atrofia la capacidad pública y socava la rendición de cuentas.
- De otro, la **privatización de la gestión** de parcelas esenciales de la gestión de servicios públicos (sanidad, educación, gestión de infraestructuras, gasto social) a empresas privadas.
- El tercer pilar consistía en diluir o hacer desaparecer la figura del «**servidor público**», esa capa superior de ciudadanos preparados para la gestión del Estado con una idea no partidista pero sí política de defensa del interés general como única referencia de servicio. Gestores de lo público que no se limiten a administrar lo que hay, sino que se muestran proactivos, eficaces y que asuman riesgos a favor de las transformaciones que reclaman el patrimonio de bienes y servicios comunes. La cooptación de las elites funcionariales (juristas, hacienda, sanidad, industria, urbanismo) para ponerlas al servicio de intereses privados ha sido fundamental para debilitar el Estado democrático.

La batalla por la pugna del Estado ha sido en estas décadas una cuestión interna principalmente nacional. Ahora empieza a ser también otra muy distinta en la que parcelas de gestión y de poder interno son usurpadas por las tecnológicas globales.

La razón es que son ya, pero lo serán más en el futuro, los proveedores de servicios que achicarán las prestaciones públicas gestionadas directamente por fuerzas sociales nacionales. Basta repasar los campos en los que **la prestación eficiente de servicios tendrá un componente tecnológico creciente**, para darse cuenta del reto pendiente que asocia soberanía política y autonomía tecnológica: **administración** (estadísticas, gestión de datos y procesos), **provisión de servicios básicos** (sanidad, educación, logística) o **gestión de infraestructuras** (telecomunicaciones, energía, transporte, logística).

En la medida en que la mejora de la eficiencia de los servicios públicos dependa de la gestión autónoma de prestaciones que trae consigo **la IA**, y que sus suministradores sean empresas ubicadas en EEUU, en la cabeza del imperio que actúa ahora como vemos, no será nunca una implicación neutral.

La soberanía de los estados mengua cuando las capacidades que definen su eficacia son las típicas de economías periféricas. Y ahora Europa también es dependiente y periférica en soluciones tecnológicas.

3. Las tres fases del neoliberalismo: de la seducción al punitivismo

Veamos ahora si podemos denominar neoliberal a esta fase del capitalismo.

William Davis ha sistematizado tres fases en el desarrollo neoliberal que muestran su flexibilidad y adaptación:

- **El neoliberalismo combativo (1979-1989).** En esta fase se construye un armazón intelectual y cultural que pretende justificar el neoliberalismo como la única opción posible y se centra en el ataque al socialismo existente de la URSS y a los sindicatos.

Se recupera a Von Mises y Carl Smith para dotarse de un fundamento económico solvente. Del primero, toman los argumentos lanzados en la década de 1920 que trataban de invalidar el modelo económico socialista por su obsesión planificadora, mientras se ensalza la asignación eficaz de precios en el libre mercado. Del segundo, toman el impulso a la mentalidad tecnocrática que revalorizaba el poder del ejecutivo sobre el legislativo e introduce una binariedad simple, de amigo-enemigo, entre el libre mercado y todo lo demás, convirtiendo al socialismo en el enemigo necesario.

La experiencia de Margaret Thatcher en Reino Unido mostró que no solo era posible debilitar a los sindicatos sino inculcar en los trabajadores un imaginario político e identitario con aspiraciones individuales no socialistas.

- **El neoliberalismo normativo (1989-2008).** Con el socialismo derrotado, el proyecto neoliberal necesitaba un sentido que le diera coherencia ética y eso exigía incluir normas y principios para mostrarse como un **sistema con códigos universales y justos**. Remachar que no hay alternativa se convierte en la **consigna TINA**.

Los valores del mercado y del *business as usual* se extienden a otras esferas de las actividades sociales, con la idea del *capital humano* como sinónimo subjetivo de valor. La *competitividad* como principio público, los *índices de calidad*, la *sostenibilidad* y la *Responsabilidad Social Corporativa*, la *sociedad del conocimiento*, mezclan aspiraciones colectivas e individuales y se insertan en el discurso institucional y académico como un nuevo sentido común.

La globalización multilateral basada en reglas se identifica como el fin de la historia y universaliza el comportamiento de gobiernos y élites globales.

- **El neoliberalismo punitivo (2008 hasta ¿?).** El sostén moral del neoliberalismo se viene abajo con la crisis del 2008. El fracaso de las normas que lo sustentaban y la dimensión de los recursos públicos necesarios para sostener al sistema obliga a un desplazamiento culpable hacia lo público, que siendo salvador fue estigmatizado como causante.

Se instala la idea del «**riesgo moral**» asociado a los gestores públicos despilfarradores y se impone el argumento de la «**austeridad**» que justifica el castigo del ajuste como merecido. Ello permite cerrar pronto la herida, pero en falso. En los círculos de poder son conscientes de que faltan argumentos capaces de dar una nueva coherencia ideológica al proyecto neoliberal.

En paralelo, las tecnológicas, que habían sido las principales proveedoras de las ideologías optimistas de una nueva civilización, aparecen ya como plutócratas dispuestos a asociarse con los poderes tradicionales que reclaman apoyo público a sus iniciativas.

Todo el andamiaje ideológico del Orden Mundial basado en reglas transparentes se viene abajo. La oscuridad retorna a los cenáculos del poder.

Hay, sin embargo, **una nueva fase** que se abre cuando finaliza la crisis caótica de la **COVID-19**, una pandemia resuelta principalmente con el recurso al aislamiento, al igual que se superaron las epidemias medievales. La idea de «autonomía estratégica» inicia un periodo diferente, en el que el recurso a la guerra choca con la mitificada **colaboración entre Estados** hasta hacerla saltar por los aires, por las causas que se analizan a continuación. No es solo la crisis de la multilateralidad, es la crisis de la colaboración pacífica entre entes soberanos la que se rompe.

4. La disputa entre Estados. El retorno del imperialismo

Lejos quedan aquellos años felices de globalización multilateral en los que las grandes corporaciones, amparadas en su dimensión multinacional, parecían sobrevolar sobre los Estados. Si se pone el zoom en las razones de la entrada del Reino Unido y Francia en la reciente guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán es fácil encontrar la «defensa de intereses estratégicos» en la zona como justificación. Y esos son y muestran, en esencia, la conexión entre *British Petroleum* y *Total Energies*, dos grandes «multinacionales» de la energía presentes en más de 50 países ahora identificadas en «sus» respectivos Estados de Reino Unido y Francia, a los que reclaman cobijo.

Esa conexión, que siempre estuvo latente, se hace evidente. Diseñar en California y fabricar en Shenzhen era la lógica de la división del trabajo interiorizada por las grandes corporaciones que la globalización neoliberal exportó al mundo, asumida como un mantra que favorecería la **hegemonía de Occidente** y el liderazgo en la innovación. Esa lógica se universalizó a todos los sectores productivos, desde la alimentación a la sanidad, desde el automóvil a las tecnológicas. Y desplazó la actividad y el empleo productivo hacia China y Asia sin que de ese desequilibrio se vislumbrara, en ningún momento, un **desplazamiento del centro de gravedad del poder**.

Pero ese desplazamiento sí se produjo. China es hoy una alternativa real al poder hegemónico indiscutido de EEUU, que está obligado a plantarle cara de forma inmediata, pues existe la convicción profunda en las élites norteamericanas de que el tiempo juega en contra de sus intereses.

Hace un lustro, algo cambió. La **crisis de la COVID-19** fue algo **sobrenatural a la lógica del capitalismo**, pero natural para los más atentos a la crisis medioambiental en ciernes.

Las rupturas de las cadenas de suministro, que habían dado soporte a la globalización neoliberal, apuntaban a una reestructuración profunda de los mercados de capitales. Si cada potencia debía internalizar sus suministros estratégicos, **si la globalización se fragmentaba en bloques regionales**, la disponibilidad de flujos de capital globales excedentarios que hasta ahora habían permitido financiar los déficits estructurales de la economía de EEUU podrían disminuir y ahogar su economía. La autonomía estratégica de cada bloque, que hasta ahora habían sido exportadoras de capital hacia EEUU, obligaba a atender las mayores necesidades de inversión interna en sus territorios.

EEUU debía mostrarse decidido a impedirlo, dando los pasos necesarios para disciplinar, al menos, al mundo desarrollado y **poner límites a su «autonomía estratégica»** en cuatro campos decisivos: **tecnología, energía, defensa y comercio**, que es como decir en todo lo importante. Esa disciplina debía dirigirse a sus principales socios: Japón, Reino Unido, Canadá o Corea. Y también a las monarquías árabes. Pero sobre todo a la UE, en tanto que principal centro comercial del mundo.

Comprendió pronto que la única forma de disponer del capital global excedentario, que había permitido financiar los déficits fiscales y comerciales que han acompañado siempre a EEUU, era impidiendo que se destinaran, como inversión interna, en sus espacios económicos a atender demandas de interés general que les reclamaban sus sociedades.

Esa disciplina de los aliados se ha considerado esencial para enfrentarse a corto plazo al reto geoestratégico de China. Si su implantación como potencia ascendente **necesita tranquilidad y tiempo para desarrollar a medio y largo plazo su proyecto**, EEUU se ve obligado a fomentar tensiones, a «**sembrar el caos**», con constantes focos de tensión, como forma inmediata y recurrente de inestabilidad para mantener su hegemonía.

5. Trump o el poder sin metáforas

No hay duda de que el momento actual es la continuación de la lógica punitiva que Davies sitúa en la crisis del 2008. Definirla o no como **neoliberal** es asumir una identificación total entre neoliberalismo y capitalismo. Como si no hubiera otra forma evolucionada de poder capitalista. Pero Trump es otra cosa. Es el poder en estado puro, caprichoso, implacable en el uso de recursos directos; **un poder sin metáfora**, que más que «un nuevo orden» corresponde a **una etapa de desorden necesario**.

Es **personalista** y, por tanto, transitorio, pero es más que eso. Es también **sis-témico** y responde a la necesaria reconfiguración del Estado al servicio de unas élites que reclaman un poder duro.

Un poder que se asienta en la medida en que incorpora a personalidades destacadas de la América corporativa, que dan un paso al frente directamente, sin intermediarios. El perfil de apoyos es amplio, desde las industrias extractivas tradicionales (petróleo y gas tracking) a, en el otro extremo, las principales tecnológicas. Ejemplo de ese alineamiento es Jeff Bezos y su determinación para «disciplinar» una institución tan simbólica como el *Washington Post*, un episodio que, en absoluto, parece coyuntural. También, la compra por parte de Paramount Skydance –cuyo propietario, David Ellison, está claramente alineado con Donald Trump– del imperio Warner. Con ese movimiento, Ellison, dueño de la tecnológica Oracle, pasa a controlar CNN, además de la ya en su poder CBS y parte de TikTok USA.

Ambos casos muestran el nuevo rol de las tecnológicas, arrojando, mediante el control de medios tradicionales y nuevos, proyectos reaccionarios que se reclaman «razón de estado» para demandar recursos públicos crecientes para competir con China.

La vocación de largo plazo del nuevo esquema de poder se percibe también en el modo en que se exporta a las naciones desarrolladas, mediante el **apoyo a**

partidos de extrema derecha, a las que conminan para que se hagan con el gobierno de sus Estados nacionales e impongan la disciplina a cualquier contrapoder existente. Una operación a la que se acabarán incorporando probablemente, si tienen posibilidades de éxito, buena parte del poder financiero y las grandes corporaciones con raigambre en cada Estado.

6. La lógica extractiva y el excedente en el nuevo capitalismo

Aunque la retórica pública se explaye en la **recuperación de la industria**, el capitalismo norteamericano, o sea sus grandes corporaciones, se sitúa de lleno en la **lógica de la desposesión**, es decir, de apropiación de recursos y rentas ajenas, que reclama un poder político fuerte.

Si en algo han destacado las tecnológicas es, precisamente, en su capacidad para detectar pronto cómo el control y explotación de datos ajenos era la **materia prima** esencial de la fase cognitiva del nuevo capitalismo. A partir de ahí, asumieron, sin ningún pudor, que su negocio global debería estar pegado al poder estatal de EEUU, pues solo así podrían eludir los controles públicos de otras naciones.

Como si, al ir quemando etapas, sus gestores hubieran aceptado que, en el fondo, su negocio, el más avanzado en cuanto a innovación cognitiva, se parece, cada vez más, al más primario de los conocidos, el de **la minería**, que desde los tiempos inmemoriales de Babilonia ha utilizado la **rapiña de recursos ajenos** basados en el poder militar como algo esencial.

El **intervencionismo anti regulador** con la UE, las políticas arancelarias presentadas como **vasallaje** o la obsesión por apropiarse de yacimientos de **tierras raras** y, en el interior, el desmontaje de **contrapoderes**, son señas aceptadas para la disputa agresiva de los recursos públicos en el interior y también de recursos y rentas extraídas de otros países.

Su evolución es también la propia de cualquier empresa que ha alcanzado la dimensión de **oligopolio global** y enlaza con el comportamiento dominante de las grandes corporaciones de todo el mundo, en el que los excedentes empresariales tienen un **creciente componente extractivo**.

Efectivamente, los beneficios de las grandes energéticas o las farmacéuticas y de otros sectores tienen poco que ver con la **extracción de plusvalías a sus trabajadores** ni con la organización del trabajo, y mucho con la captación de rentas a sus clientes y usuarios amparados en situaciones de privilegio que están

basadas en la captación de los órganos reguladores de los Estados nacionales o entidades supranacionales, como la UE.

La figura del capitalista explotador se diluye. El proceso de **socialización productiva**, que Marx asoció a la acumulación de capital, significa que cuanto más dimensión alcanza, más interdependientes nos volvemos, más grandes son los medios para construir y organizar el proceso de trabajo y **más lejos los centros de poder real**. Las grandes tecnológicas y su monopolio sobre las plataformas y la centralización del conocimiento en IA representan un nivel extremo de concentración global de capital y también un «patrono» lejano e inaccesible para los pueblos del mundo.

La **tensión capital/trabajo** sigue representando la fuente principal del excedente en muchas empresas de tamaño medio o grande, pero ya no en todos. Los sectores productivos que alimentan con su esfuerzo una larga cadena de valor, los típicos negocios B2B, como la **agricultura** o el **transporte**, en buena medida pymes, quedan sometidos a una pinza sin apenas capacidad de subsistencia, al ser incapaces de trasladar al precio los costes crecientes de sus inputs, suministrados por grandes corporaciones inaccesibles. Son y serán los grandes paganos, junto al **ciudadano común**, del sistema de desposesión de rentas dominante, en el que el conflicto interno con sus trabajadores es algo secundario. Serán los grandes demandantes de ayudas públicas como el único modo de sobrevivir.

7. De la mitificación a la mistificación del Estado de Bienestar

La cuestión es inducir hasta qué punto las políticas trumpistas son parte de algo consistente y estable o si es previsible un retorno al orden basado en reglas. La paradoja del momento es que un reequilibrio que favorezca a las fuerzas democráticas pase por hacer valer la consigna de **«ley y orden»**, que siempre fue la pantalla conservadora para reprimir el «desorden» de las fuerzas populares y que ahora empieza a simbolizar justo lo contrario, la esperanza de un horizonte de progreso.

Quizás esa esperanza empiece a latir pronto –casi ya empieza– aunque **falta dibujar horizontes**. No parece que **el retorno al Estado de Bienestar**, esa especie de Estación Termini que parecía colmar las aspiraciones de las generaciones del *baby boom*, sea hoy un horizonte suficiente y entendible para el futuro de la sociedad y la esperanza de las nuevas generaciones. Ni mucho menos.

La experiencia de las últimas décadas nos muestra que la existencia del Estado de Bienestar era solo la consecuencia transitoria de un equilibrio de fuerzas que la realidad neoliberal ha ido vaciando y desmontando. Para comprobar que no es hoy un horizonte deseable para las nuevas generaciones basta con buscar en el diccionario los sinónimos de bienestar: confort, holgura, abundancia, placer, felicidad, y rumiarlo con la mirada de los más jóvenes.

Su realidad les dice que hace tiempo que no es más que una ficción, una imagen idealizada y mitificada del pasado que no volverá como tampoco lo hará el Imperio Español ni las Cruzadas. La desfiscalización de las rentas altas y la minoración de los tipos efectivos a las grandes corporaciones **han reducido la capacidad redistributiva del Estado**, haciéndola incapaz para atender una desigualdad creciente que surge de las entrañas primarias del sistema productivo y de la lógica de desposesión de rentas que impone la oligopolización del poder y la captura de las instituciones a todos los niveles.

Lo peor es que de la **mitificación** se ha pasado a la **mistificación**, y eso ya produce rechazo. La incapacidad de hacer que la realidad se pareciera al mito ha generado una mística que empieza a identificar las alusiones al Estado de Bienestar como un artificio, algo adulterado, una falsificación, un fraude o un engaño. O una ensoñación idealista de un pasado que no volverá.

Así es. No solo fue el fruto de un **equilibrio de fuerzas**, sino que de ese equilibrio nacieron unos **consensos** que los desequilibrios de poder actuales hacen imposibles. No habrá en el horizonte inmediato un cambio que permita consensos universales. No habrá una idea compartida entre grandes corporaciones y ciudadanos de a pie sobre qué tipo de estado necesitamos.

Lo que se necesita es **un horizonte que despeje incógnitas, no que alimente ficciones.**

La otra dimensión es la **democrática**. Ahora parece que la democracia no les es funcional a las élites, pero, desgraciadamente, antes ha dejado de serlo para las diversas capas populares, que han comprobado la incapacidad política de enfrentarse a los oligopolios que se apropian de sus rentas disponibles.

Ahí nace buena parte del desencanto. No es la ensoñación de un nuevo consenso sobre el Estado lo que puede movilizar, sino la reclamación de la defensa del interés general como principio público básico y la exigencia de un Estado y una política al servicio de los ciudadanos. Reconocer y denunciar que la pugna por el Estado es la principal tensión del momento es esencial, porque los poderosos necesitan fagocitar todos los recursos públicos para sus negocios privados.

Reclamar un **Estado de los Ciudadanos**, siguiendo la lógica de Platón, Aristóteles, Hobbes, Rousseau o Hannah Arendt es hoy la tarea.

Un Estado que esté atento al futuro de las generaciones que ya están aquí, buena parte **inmigrante**, y alimente una ilusión de cambio en el que lo individual y lo común converjan. Un Estado que se centre en todos los derechos que hacen realidad la democracia, desde atajar la pobreza infantil a reclamar una herencia básica que active la inversión productiva y aplaque el problema de la vivienda hasta que no haya una oferta pública suficiente. Y que se centre en gravar a las grandes fortunas como forma de financiarlo.

8. Conclusiones

Dos vectores diferentes confluyen en el momento actual:

De un lado, **el modelo de negocio de las tecnológicas se reconoce como claramente extractivo** y reclama recursos públicos crecientes para competir con China. Y que impone, al tiempo, que su liderazgo tecnológico sea considerado un «asunto de Estado», un poder fuerte que les ampare sin ambages. Una demanda que coincide con la evidencia de que, desde 2008, el neoliberalismo había agotado su capacidad de seducción y adoptaba posiciones punitivas.

De otro, la necesidad de disciplinar a sus principales aliados occidentales y **frenar cualquier veleidad de «autonomía estratégica»** en los principales centros de poder regionales (UE, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, menarquías del golfo) que la crisis de la COVID-19 y la ruptura de las cadenas de suministro exigía.

La necesidad de financiar la creciente demanda de capital y recursos de tierras raras (centros de datos, carrera espacial, hegemonía militar) para mantener la hegemonía tecno-científica con China es, en última instancia, la clave coyuntural que enlaza con cambios profundos en el modelo de negocio, de carácter crecientemente extractivo, ya claramente dominante en las grandes corporaciones.

Denunciar la pugna por los recursos públicos como la principal tensión del momento es una necesidad.

Reclamar un **Estado de los Ciudadanos** que asuma los derechos de la nueva ciudadanía es hoy el mejor horizonte que podemos ofrecer.

Taylorismo digital y despotismo empresarial

Carlos Jesús Fernández Rodríguez

Profesor de Sociología

Universidad Autónoma de Madrid

Introducción: las nuevas empresas tecnológicas y la ideología californiana

En enero de 2025, la ceremonia de investidura de Donald Trump como 47 presidente de los Estados Unidos de América destacó por la presencia de buena parte de los presidentes, líderes y consejeros delegados de grandes compañías tecnológicas estadounidenses como Amazon, Meta, Apple, Google, SpaceX u OpenAI. Hace tres décadas, las empresas del sector tecnológico habían representado la apuesta por una forma de dirección basada en impulsar la diversidad, la innovación y la creatividad, y el fomento de una cultura de empresa que apostara por la ruptura de las reglas, la adhesión a liderazgos suaves en las formas y el cuidado psicológico del empleado (ver Boltanski y Chiapello, 2002; Fernández Rodríguez, 2022). Sin embargo, en la actualidad algo parece haber cambiado en Silicon Valley y su ecosistema empresarial. El polémico saludo «romano» de Elon Musk en el mitin posterior a la inauguración de Trump es un síntoma de la adopción, por parte de los líderes de algunas de estas grandes empresas tecnológicas (Tesla, Palantir y otras), de un nuevo corpus ideológico que promueve de forma intensa valores autoritarios y parafascistas, y que nos alerta de una transformación significativa en los valores y la ética empresarial del capitalismo contemporáneo, con su reflejo inevitable en la esfera política (ver Wiener, 2021; Varoufakis, 2024).

En esta contribución, el objetivo va a ser reflexionar sobre este giro hacia un creciente autoritarismo, fijando la mirada en las nuevas formas de gestión asociadas a una economía dominada por la mediación de internet. El artículo está dividido en tres secciones: en la primera, se hará una referencia al fenómeno del taylorismo digital y su peculiar relación con las nuevas filosofías del *management*; en segundo lugar, haremos referencia a cómo este proyecto de digitalización de la economía y el trabajo está generando nuevas desigualdades que son un caldo de cultivo perfecto para sentar las bases de un nuevo despotismo empresarial. El texto se cerrará con un breve comentario sobre lo que este desafío supone para el mundo sindical.

Taylorismo digital y nuevas ideologías del *management*

Los métodos de gestión de las grandes corporaciones han cambiado mucho a lo largo de la historia, siempre con el objetivo declarado de incrementar la rentabilidad de sus negocios y su capital. Una de las filosofías de gestión más exitosas del siglo XX fue sin duda la organización científica del trabajo o taylorismo, que proponía una nueva forma de producción industrial que maximizaba la eficiencia productiva mediante el análisis sistemático de los procesos laborales (Fernández Rodríguez, 2007). Basada en la descomposición de las tareas en operaciones simples, la medición precisa de tiempos y movimientos, y la separación entre concepción y ejecución del trabajo, implicaba una racionalización extrema de la actividad laboral. Esta filosofía se aplicó de forma particularmente exitosa en la famosa cadena de montaje fordista, que no solo contribuye a la consolidación de una nueva «producción en masa», sino que inauguraba una nueva estructura de poder en la empresa basada en el control, la vigilancia y la burocratización del proceso de gestión (Alonso, 2007; Boltanski y Chiapello, 2002). Pese a su papel fundamental en la construcción de la sociedad de posguerra y su norma de consumo de masas, el taylorismo entró en crisis en la década de los setenta del siglo pasado, ante el empuje de nuevas técnicas de gestión japonesas que apostaban por métodos de producción flexible en un contexto marcado por una creciente fragmentación de los gustos de los consumidores y una mayor competencia resultado de una incipiente globalización. Pronto los discursos de gestión empezaron a obviar los principios de gestión «científicos» (basados en la planificación, la racionalidad, el cálculo y las jerarquías en la empresa) para apostar por un nuevo paradigma de gestión basado en la promoción de términos como las redes, la producción flexible, el emprendimiento, la flexibilidad, la innovación o la orientación al cliente (Alonso y Fernández Rodríguez, 2018; Fernández Rodríguez, 2022). Las dos primeras décadas del siglo XXI no supusieron una modificación sustantiva de los contenidos de dichos discursos; antes bien, sus premisas centrales se verían reforzadas y complejizadas a partir de la articulación de distintos procesos estructurales.

El primero de esos procesos ha sido la creciente centralidad de las nuevas tecnologías, cuya expansión ha intensificado las formas de interconexión y proximidad social mediante la proliferación de canales digitales, en el contexto del desarrollo exponencial de internet y nuevas infraestructuras comunicativas como los teléfonos inteligentes. Las empresas vinculadas a internet y a la fabricación de estos dispositivos y su software (Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Nvidia) se han convertido literalmente en las empresas más ricas y poderosas del mundo, promoviendo nuevas formas de organización en red. Este proceso de consolidación de la nueva economía digital ha favorecido, asimismo, la emer-

gencia de una economía de plataformas, dominada por las grandes corporaciones del comercio electrónico como Amazon, Uber, Airbnb y muchas otras (Srni-cek, 2018; Sadin, 2018). Las redes sociales han tenido también un impacto cultural creciente, una vez que no solamente han abierto y difundido ese nuevo canal digital para el comercio, sino que también se han convertido, gracias a los algoritmos que las gobiernan, en un espacio cultural decisivo a la hora de configurar la forma en que nos relacionamos con los demás, consumimos información o desarrollamos nuestra propia identidad, modificando los procesos de comprensión del mundo que nos rodea y favoreciendo procesos de polarización ideológica (Sadin, 2018). Con las redes sociales se intensifica además la presencia del proceso globalizador, en una dinámica general de aceleración social, económica y temporal de los procesos contemporáneos (Rosa, 2016).

Paralelamente a esta hegemonía de la tecnología, la gestión empresarial había promovido un paulatino abandono de la burocracia como eje de la toma de decisiones y organización de la producción y el trabajo, para apostar por nuevos valores. La progresiva incorporación de nuevos colectivos (mujeres, minorías) al ámbito empresarial facilitó la emergencia de nuevas políticas corporativas que valoran de forma positiva la diversidad (Fernández Rodríguez, 2007). De este modo, desde los años ochenta se ha ido afianzando la incorporación de las emociones como dimensión estratégica de la gestión empresarial, lo que se ha manifestado tanto en la institucionalización de dispositivos como el *coaching* o el *mentoring*, como en la difusión de una cultura organizacional centrada en el bienestar emocional de las plantillas y en la promoción de disposiciones subjetivas afines al emprendimiento (Alonso y Fernández Rodríguez, 2024; Fernández Rodríguez, 2022). La nueva cultura de empresa va a hacer énfasis en modelos de liderazgo dialogantes y carismáticos, pendientes del bienestar físico y mental de los trabajadores, y en la que el trabajo en equipo se enriquece y beneficia de una cultura tolerante, marcada por la presencia e inclusión de perfiles con distintas competencias y perspectivas. De hecho, Silicon Valley en California se convierte en la referencia para la cultura corporativa mundial, con su apuesta por una tolerancia que permite el establecimiento de las denominadas «clases creativas» y un estímulo único a la creatividad e innovación empresarial (Sadin, 2018).

Sin embargo, este discurso gerencial inclusivo y tolerante parecía celebrar esos trabajos bien pagados, mientras parecía obviar que toda la arquitectura de la nueva economía digital está basada de hecho en formas de gestión mucho más duras y descarnadas. Como se ha debatido abundantemente en la sociología del trabajo más reciente, la filosofía de gestión más influyente en tiempos recientes ha sido la «uberización»: un proceso de reorganización productiva asociado a la expansión de las nuevas plataformas digitales como Uber (aunque afecta a

muchos sectores), y que se basa en la intermediación algorítmica entre oferta y demanda de servicios y una apuesta por convertir en autónomos o emprendedores a sus empleados (Srnicek, 2018). Este modelo se caracteriza por la externalización de los riesgos del negocio hacia los trabajadores, la fragmentación de las tareas en microservicios sin garantía de continuidad y el uso de sistemas de reputación y control digital. Implica una reconfiguración de la relación salarial tradicional, favoreciendo una flexibilidad y una vuelta al trabajo por destajo que termina generando una precariedad enorme y una fragmentación mayor de la fuerza de trabajo, que sufre los efectos de una relación más individualizada con su empresa (Fernández Rodríguez, 2022; Riesco-Sanz y Lahera, 2024). Este modelo de la uberización va a convivir con el resurgimiento de un taylorismo digital aplicado en empresas como Amazon o el sector emergente de la inteligencia artificial, donde bajo condiciones de extrema vigilancia y cálculo algorítmico se somete a los trabajadores a un control orwelliano, destinando su esfuerzo a tareas mecánicas y repetitivas como buscar productos, empaquetar, monitorizar contenido digital o entrenar sistemas de máquinas inteligentes (ver por ejemplo Zuboff, 2020).

Progresivamente, la economía digital se ha ido imbricando de forma transversal en el resto de los sectores productivos, lo que ha derivado en que estas compañías de la nueva economía hayan alcanzado un poder sin precedentes. Y claro, al igual que el desarrollo de la industria tradicional había derivado en la creación de nuevas élites ultraliberales y enemigas de la intervención estatal (los capitanes de la industria británicos, los *robber barons* estadounidenses), a mediados de la década de los 2010 se empezó a visualizar una posición similar en el caso norteamericano en relación a estas nuevas élites tecnológicas, que se ha movilizado para evitar posibles regulaciones en sus negocios, ante un creciente malestar por sus prácticas monopolistas, su extractivismo y explotación de los datos personales de sus consumidores, su enorme impacto ambiental y sobre todo sus prácticas laborales draconianas (Morozov, 2018). Ello ha derivado en que, desde hace unos años, algunas voces hayan denunciado que estamos viviendo una transición desde el capitalismo liberal hacia una nueva forma de organización económica mediada por el entorno digital, denominada de forma crítica como *tecnofeudalismo* (Varoufakis, 2024). Lo cierto es que las grandes empresas tecnológicas, que han situado a algunos de sus miembros entre las personas más ricas del mundo, mantienen tanto la propiedad de una infraestructura imprescindible para la organización de la vida contemporánea, como un acceso histórico único a datos personales, hábitos, perfiles e intereses de los ciudadanos mediante la huella en internet y el uso de las redes sociales, además de nuevos altavoces mediáticos como son las redes sociales, dominadas por sus algoritmos (Brown, 2021). Ello les ha permitido tener una influencia extraordinaria en la esfera

pública, promoviendo no solo prácticas de desinformación y polarización política, sino apostando de forma cada vez más visible (sobre todo por parte de algunas voces) por nuevos modelos políticos cada vez más autoritarios.

El camino hacia el nuevo despotismo empresarial

Y es que esta extraordinaria acumulación de poder y enorme desigualdad rara vez tiene otra salida que la consolidación de un profundo autoritarismo, en forma de despotismo empresarial. Por una parte, hay un evidente deseo de capturar el espacio político con el objetivo de seguir incrementando el poder, la habilidad de evitar las regulaciones o dictar la política económica, exterior o militar del país; por otra, tenemos un proyecto destinado a controlar el espacio del trabajo, la actividad sindical y la distribución del excedente económico dentro de las empresas. Dos niveles que se encuentran imbricados estructuralmente, pues el espacio político es en el que se gestan las legislaciones de defensa de los derechos de aquellos que viven de su trabajo y que son empleados por estas corporaciones. Y las condiciones de una parte sustancial de la fuerza de trabajo se han ido deteriorando de forma significativa en los últimos tiempos, conforme la nueva economía de plataformas o *gig economy* se ha ido consolidando. Y es que sus inferiores condiciones laborales en términos de derechos, seguridad y salario suponen una degradación del trabajo evidente, que está permitiendo que las empresas estén obteniendo unas rentabilidades extraordinarias pero que al mismo tiempo está dando lugar a resistencias diversas que estimulan la puesta en marcha de esta mirada represiva por parte del ecosistema empresarial.

Históricamente la necesidad en el capitalismo de garantizar la rentabilidad de los negocios y la acumulación de capital ha favorecido una pulsión autoritaria, visible en el apoyo del empresariado a proyectos de carácter imperialista y fascista a lo largo de la historia. Sin embargo, con el final de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de los bloques de la Guerra Fría, parecía que la amenaza del socialismo real había favorecido la puesta en escena de una estrategia más dialogante con el espacio del trabajo organizado, de forma que la pervivencia del modelo capitalista implicaría la emergencia de derechos reconocidos para la población trabajadora, desde la legitimidad de la negociación colectiva hasta los derechos económicos y la construcción del Estado del Bienestar. Este pacto de posguerra keynesiano en el bloque occidental permitió una mejora del nivel de vida notable de las clases trabajadoras, la ampliación de las clases medias y una notable reducción de la desigualdad social (Alonso, 2007).

Sin embargo, ya desde la década de los sesenta las críticas de la derecha política a este sistema, en su opinión demasiado redistributivo, se fueron organizando y a finales de los años setenta fueron accediendo al poder en las democracias occidentales gobiernos de inspiración neoliberal, que tratan de fomentar mercados más desregulados, menor presión fiscal y una reducción sistemática de los derechos de los trabajadores con el fin de reforzar los intereses del mundo de la empresa. La posterior caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría alimentaron esa vía neoliberal, generando con las décadas un notable aumento de las desigualdades sociales y económicas ante la disminución de la redistribución fiscal, los recortes del Estado del Bienestar y la proliferación de empleos inestables y mal pagados (Fernández Rodríguez, 2007). Este escenario de profundización en el neoliberalismo coincidió con tres fenómenos de gran calado: primero la globalización económica, que permitió la deslocalización de numerosos negocios y un incremento de la elusión fiscal; en segundo lugar, la creciente financiarización de la economía mundial, que le ha otorgado un poder extraordinario al capital frente al trabajo; y finalmente, la explosión de las nuevas tecnologías, cuyos dispositivos van a ser centrales para forzar estos cambios hacia una sociedad neoliberal (Harvey, 2007). Pero claro, este florecimiento del capitalismo no está beneficiando a la población de forma generalizada, sino que está generando notables tensiones sociales y un malestar cultural ante la caída del nivel de vida de las clases obreras y partes significativas de las clases medias, que además experimentan angustias y temores crecientes ante una progresiva inseguridad laboral y económica, derivada no solamente de la competencia de otros países sino también de factores tecnológicos como el enorme poder mediador de las plataformas o la amenazadora inteligencia artificial (Morozov, 2018; Brown, 2021; Cant *et al.*, 2024). En esta sociedad descontenta y atemorizada, hay, como en el pasado, un espacio abierto para proyectos políticos autoritarios.

Y claro, tanto en las empresas tecnológicas como en las de otros sectores parece que se está empezando a apostar de forma muy visible por esta vía autoritaria. En el caso de las primeras este es un fenómeno curioso, una vez que la ideología californiana adoptada por el ecosistema digital estadounidense había articulado una combinación aparentemente paradójica entre el *libertarianismo* de mercado y el imaginario contracultural heredado de los años sesenta. Durante el boom de internet en los noventa, el emprendimiento se había convertido de forma paulatina en el centro de esta ideología, entendiendo a la empresa tecnológica como un agente de progreso social dentro de mercados innovadores, y donde ir contra las reglas y ser disruptivo se consideraba como una señal de identidad de esta industria. De ahí su apuesta por la diversidad, la ausencia de horarios y códigos de vestimenta, el énfasis de lo lúdico en el trabajo, etc.; aunque es verdad que esto convivía con culturas de empresa que favorecían la auto

explotación, dinámicas sacrificiales y el rechazo a la actividad sindical (Alonso y Fernández Rodríguez, 2018; Fernández Rodríguez, 2022). Sin embargo, durante las últimas dos décadas y con la expansión de gigantes como Google, Uber, Meta o Amazon, la ideología californiana ha experimentado una transformación muy significativa, abandonando los elementos contraculturales y libertarios en favor de una creciente vigilancia (clave para el proceso de extracción de datos: ver Zuboff, 2020) y una apuesta por el *solucionismo* tecnológico como fórmula de resolución de todos los problemas, una vez que desde su perspectiva las mejores decisiones no las tomarían nunca líderes políticos o funcionarios expertos, sino una gobernanza de carácter algorítmico que fundamentaría sus medidas de acción en base a la extracción y análisis de múltiples datos, en línea con la denominada inteligencia artificial, que construyen una serie de infraestructuras no solo tecnológicas sino conductuales para modular las subjetividades y comportamientos de los ciudadanos (Alonso y Fernández Rodríguez, 2024; Sadin, 2018; Wiener, 2021).

Este *solucionismo* significa fundamentalmente que hay una confianza ciega en la tecnología como herramienta de gestión, lo que tiene consecuencias importantes en la forma en que entendemos cuestiones como la democracia, el debate público o el papel de los expertos en la sociedad. Progresivamente, algunos miembros de las élites tecnológicas (Musk, Thiel y otros) empiezan a apostar por la posibilidad de gobiernos puramente tecnocráticos que marginen por completo la opinión ciudadana y lleguen a defender propuestas decididamente antidemocráticas, influidas además por la filosofía del aceleracionismo en su versión más derechizada, que promueve una disrupción permanente en la sociedad a través de la tecnología y un capitalismo totalmente descontrolado y enfrentado a la democracia (Brown, 2021). Todo esto se haría al margen del Estado, dentro de esa apuesta por el mercado desregulado en el que se generan desde medios de pago desligados del circuito monetario tradicional (las famosas criptomonedas) hasta la inteligencia artificial generativa, en manos de nuevo de grandes compañías norteamericanas (OpenAI, Meta, X.AI, Google DeepMind), cuyo objetivo es que nuevas herramientas de producción simbólica puedan sustituir, de forma efectiva, incluso el propio trabajo humano en un futuro cercano.

Además de la captura del poder político está, como se comentaba antes, el otro plano, que es el del propio trabajo que tiene lugar dentro de estas corporaciones, y que se desarrolla dentro de una hibridación entre taylorismo digital y gestión algorítmica que sitúa a sus trabajadores en una situación de gran vulnerabilidad. Numerosos estudios (por ejemplo Riesco-Sanz y Lahera, 2024; Cant *et al.*, 2024) han analizado las difíciles condiciones del trabajo en estas empresas: aumento de la informalidad, inseguridad y precarización, con el desplazamiento de costes

tradicionalmente asumidos por las empresas hacia los empleados, que terminan habitualmente empleados como autónomos; multiplicación en el trabajo por cuenta propia de las tareas cortas —contratos de cero horas, picos por demanda, proyectos cortos— sin garantías de continuidad; creciente competencia entre los empleados por precio del servicio o reputación en los rankings; uso por parte de las empresas de métricas opacas para distribuir las tareas a realizar; mayor presión y estrés por la evaluación continua a la que se someten los rendimientos individuales, en una lógica similar a la taylorista; y, con la irrupción de la IA generativa, riesgos de desaparición de una parte de la fuerza de trabajo empleada en trabajos de carácter más cognitivo. En este escenario, no se libran tampoco los gestores y directivos, que no solo ven su actividad y rendimiento más vigilado por estas nuevas herramientas, sino que también ven en muchos casos su rol subordinado a las soluciones aportadas por los programadores e ingenieros: la toma de decisiones en un entorno tecnológicamente tan complejo deriva en que incluso los gestores tradicionales (con formación de economista, derecho, etc.) estén perdiendo poder ante aquellos que tienen la capacidad de diseñar y programar algoritmos (Alonso y Fernández Rodríguez, 2024).

En este sentido, los promotores de esta gestión algorítmica se están encontrando con unas capacidades únicas para someter a la fuerza de trabajo a una dominación sin precedentes, una vez que su capacidad de extraer información a través de sus dispositivos tecnológicos se transforma automáticamente en una herramienta de poder. Y si se tiene ese poder, y no hay contrapesos, ¿por qué no usarlo? Una vez que la propiedad de estas herramientas y empresas se concentra en unas pocas manos, ¿qué incentivo tienen éstas de querer redistribuir los rendimientos económicos de estas nuevas tecnologías en la sociedad? Al final, la apuesta por el despotismo empresarial es inevitable, lo que arrastra a otros sectores productivos que ven una oportunidad histórica de domesticar y disciplinar de nuevo a la fuerza de trabajo.

Comentario final

El gran pensador Karl Polanyi (2016) afirmaba que el fascismo surgía cuando la sociedad de mercado entra en una crisis de rentabilidad tal que el capitalismo ya no puede sostenerse mediante mecanismos liberales, y entonces se recurre a formas autoritarias de reorganización social para restablecer el orden económico. Lo que estamos viviendo a nivel geopolítico en este momento recuerda mucho a esta sombría perspectiva. La nueva reorganización de la producción derivada de la definitiva consolidación de la economía digital representa un giro

copernicano similar al que supusieron la organización científica del trabajo o el sistema de producción flexible japonés, e implica un modelo de relaciones laborales en el que los trabajadores estén completamente subordinados a las necesidades del algoritmo. La forma más efectiva de llevar adelante esta transformación, tan lesiva para los intereses de las clases trabajadoras, es sin lugar a duda recurrir a un creciente autoritarismo, en un escenario complicado además por nuevas tensiones geopolíticas, el envejecimiento de la población y la amenaza del cambio climático.

La esfera del trabajo asalariado se enfrenta así a un momento complicado, una vez que la falta de regulación de estas nuevas tecnologías está promoviendo una explotación laboral descarnada y a la vez una captura de la esfera política y mediática por los nuevos señores feudales con el fin de justificar la inevitabilidad de su modelo de empresa, economía y sociedad. Detrás de este proyecto de gestión algorítmica se encuentra el objetivo de fragmentar el espacio del trabajo al máximo, tratando de debilitar los lazos colectivos y todo aquello que identificamos con lo social, con el fin de eliminar las últimas barreras que puedan encontrarse en términos de acumulación de capital. Y por supuesto, los sindicatos son ahora la última barrera de contención, sobre todo una vez que en algunas de estas empresas han encontrado ya considerables resistencias, con huelgas en Amazon, Tesla y otras compañías, y la promulgación de legislaciones que, en el caso europeo, han tratado de proteger a algunos colectivos de trabajadores vulnerables (como la famosa Ley Rider de España). No es por ello sorprendente que desde estas empresas se promueva un nuevo despotismo empresarial, que indudablemente está desarrollando estrategias a largo plazo para tratar de debilitar y eliminar el sindicalismo. En este sentido, desde el mundo sindical se hace imprescindible estar muy alerta y establecer estrategias ingeniosas para enfrentarse a este hostil escenario.

Referencias bibliográficas

- ALONSO, L. E. (2007): *La crisis de la ciudadanía laboral*, Barcelona, Anthropos.
- ALONSO, L. E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. J. (2018): *Poder y sacrificio*, Madrid, Siglo XXI.
- ALONSO, L. E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. J. (2024): *Capitalismo y personalidad*, Madrid, Catarata.
- BOLTANSKI, L. y CHIAPELLO, È. (2002): *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal.
- BROWN, W. (2021): *En las ruinas del neoliberalismo*. Madrid, Traficantes de sueños.

- CANT, C.; MULDOON, J.; GRAHAM, M. (2024): *Alimentando la máquina*, Barcelona, RBA.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. J. (2007): *El discurso del management*, Madrid, CIS.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. J. (2022): *Cadenas, redes y algoritmos*, Madrid, Catarata.
- HARVEY, D. (2007): *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal.
- MOROZOV, E. (2018): *Capitalismo Big Tech*, Madrid, Enclave de libros.
- POLANYI, K. (2016): *La gran transformación*, Barcelona, Virus.
- RIESCO-SANZ, A. y LAHERA, A. (Coords.) (2024): *Detrás de tu APP*, Madrid, Catarata.
- ROSA, H. (2016): *Alienación y aceleración*, Madrid, Katz.
- SADIN, É. (2018): *La siliconización del mundo*, Buenos Aires, Caja Negra.
- SRNICEK, N. (2018): *Capitalismo de plataformas*, Buenos Aires, Caja Negra.
- VAROUFAKIS, Y. (2024): *Tecnofeudalismo*, Barcelona, Deusto.
- WIENER, A. (2021): *Valle inquietante*, Barcelona, Libros del Asteroide.
- ZUBOFF, S. (2020): *La era del capitalismo de la vigilancia*, Barcelona, Paidós.

¿Cómo puede la transición ecológica y justa derrotar al imperio fósil?

Florent Marcellesi

Ex-eurodiputado y experto en acción climática y transición ecológica y justa

La economía es un suceso de ciclos. Ya sean cortos según Kitchin, medios según Juglar o largos según Kondratieff, se suceden periodos de recuperación o creación, auge y depresión o destrucción, y vuelta a empezar, en bucles infinitos aunque nunca parecidos.

De igual manera, la transición ecológica y justa se enfrenta a sus peculiares ciclos históricos. Desde que surgió la conciencia ecologista en los años 1960-70, ha pasado de ser un *outsider* para minorías concienciadas a convertirse desde el Acuerdo climático de París del 2015 en el alfa y omega del *mainstream* socio-político. Sin embargo, hoy, acosada sin piedad por los imperialismos renacientes, cuyos intereses se mimetizan con los del capitalismo fósil, se enfrenta a una potente fase depresiva. Libra una lucha existencial contra el «imperio fósil», buscando aire para que la depresión no se convierta en destrucción.

Al revés, para que llegue pronto su recuperación, es fundamental (re)pensar y adaptar la visión estratégica de las fuerzas que luchan por la justicia social y ambiental. Para ello, en este artículo repasaremos primero lo ocurrido a partir del Acuerdo de París desde la hegemonización de la transición ecológica hasta su demonización por las corrientes reaccionarias y negacionistas. En base a este análisis de ciclos cortos-medios, pensaremos en las nuevas estrategias ecosociales para que la transición ecológica y justa pueda resistir al *backlash* ecológico y consolidarse en este nuevo (des)orden mundial. Más concretamente, ¿qué hilos directores, prioridades socio-políticas y alianzas tendría que adoptar la transición ecológica y justa para iniciar cuanto antes un nuevo ciclo virtuoso, sinónimo de sostenibilidad y prosperidad? Dicho de otra manera, ¿cómo puede la transición ecológica derrotar al imperio fósil?

Érase una vez la hegemonía cultural climática

2015 no es una fecha cualquiera en nuestra historia reciente. El 12 de diciembre de dicho año, se aprueba por unanimidad en la COP21 el Acuerdo climático de París. Si bien imperfecto en muchos aspectos, pero grabando en el mármol de un Tratado internacional la meta de 1.5 °C de calentamiento global que no debería superar la Humanidad, este Acuerdo marca un antes y un después en la

acción climática¹. Impulsado por una amplia coalición de países alineados (islas del Pacífico, UE, Estados Unidos de Obama, etc.), de un Vaticano carburando al *Laudato si'* del Papa Francisco y de una sociedad civil con deseo de pasar página de la fracasada cumbre de COP15 en Copenhague, representa el inicio de un nuevo ciclo donde el clima ya no es una coordenada subalterna y secundaria sino el centro de atención mediático, una prioridad política y social, y el nuevo motor de una economía emergente en torno a la transición ecológica y las renovables. Dicho de otra manera, marca el inicio de un periodo con una profunda capacidad de transformación estructural y de los imaginarios colectivos bajo el dominio de la idea climática en la opinión pública, las instituciones y el mundo empresarial: la hegemonía cultural climática.

Tras años de depresión y austeridad social y económica, este cambio hegemónico impacta de forma intensa en varios frentes. Por un lado, las calles juegan un papel clave en la dinámica cultural y social internacional a favor del clima gracias a una presencia, tanto cuantitativa como cualitativa, de la juventud por el clima. Detrás de Greta Thunberg, figura central del movimiento, casi mesiánica y fuente de inspiración mundial para toda una generación, supone una visibilización sin precedentes de la causa climática en los medios y los debates a pie de calle, situando el clima como un asunto existencial –para la juventud y cualquier colectivo o nación que sufre directamente sus impactos– y de máxima prioridad socio-política. Mientras centenares de miles de personas llenan las calles de Berlín, Bruselas, Melbourne, Nueva York, Vancouver y también Madrid, con una manifestación multitudinaria el 6 de diciembre del 2019, la idea climática percola por los meandros de la conciencia colectiva española, europea y global.

En un bucle retroactivo constante e inscribiéndose en el camino abierto por París, este caldo de cultivo socio-climático tiene a su vez una fuerte repercusión en lo político e institucional. El 5 de diciembre de 2016 la ciudad de Darebin en Australia se convierte en la primera ciudad del mundo en declarar el «estado de emergencia climática»; el 1 de mayo de 2019 el Parlamento del Reino Unido es el primer parlamento nacional en hacerlo, mientras que España se suma oficialmente tras acuerdo de su Consejo de Ministros el 21 de enero del 2020². A día de hoy casi 2 400 jurisdicciones en 40 países, cubriendo una población de hasta

¹ Véase Marcellesi, Florent (2015): «El acuerdo de París sobre clima: entre milagro, desastre y (posible) punto de inflexión.» *EFeverde*, 15 de diciembre del 2015. Disponible en <https://efeverde.com/el-acuerdo-de-paris-sobre-clima-entre-milagro-desastre-y-posible-punto-de-inflexion-por-florent-marcellesi/>

² Fuente: <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/enlaces/210120-enlace-clima.aspx#:~:text=La%20Moncloa.%2021/01/2020.%20Declarada%20la%20emergencia%20clim%C3%A1tica%20%5BConsejo%20de%20Ministros%5D>

mil millones de ciudadanos, han declarado una emergencia climática³, convirtiéndose, en los años posteriores a 2015, el clima en una de las mayores prioridades políticas. Con total lógica, esta visibilización social e institucional tiene también su corolario en las urnas. En las elecciones europeas del 2019, cabalgando y promoviendo al mismo tiempo la ola climática, los partidos verdes consiguen un resultado histórico con más de 80 eurodiputados/as, transformando su agenda ecosocial en fuerza motriz del Parlamento Europeo.

Como si de un juego de dominó se tratara, esto desencadena a su vez otra consecuencia virtuosa. Bajo la presión combinada de las calles y de las urnas, y a pesar de que no formaba parte siquiera de las prioridades electorales del Partido Popular Europeo en aquel momento, la Comisión Europea recién designada bajo la primera presidencia de la conservadora Von der Leyen, pone encima de la mesa su principal respuesta: el *Green New Deal* o Pacto Verde Europeo. El debate ya no gira en torno a la necesidad o no de tener una política climática sino al grado de ambición de ésta. Si bien por debajo de lo que pedían el movimiento ecologista y la ciencia pero muy por delante del resto de bloques geopolíticos, la UE se erige en líder climático, comprometiéndose a reducir sus emisiones en al menos un 50% para 2030, al tiempo que convierte en legalmente vinculante el objetivo de neutralidad de carbono para 2050.

Si fuera poco, todas las políticas europeas, ya sean energéticas, industriales o agrícolas, tienen además que integrar o combinarse, al menos en el espíritu, con las preocupaciones climáticas. En este ambiente propicio a la ecología, la economía siente el soplo de la transición energética y de la sostenibilidad, piedra angular de los negocios post-París. Fin de la extracción de carbón en España y eliminación gradual en toda Europa, instalación acelerada de energías renovables, auge del coche eléctrico, descarbonización de la industria o reverdecimiento de la agricultura; la economía y el empleo verde viven su edad de oro, mientras que la transición justa se abre paso. París, la juventud por el clima y el electorado han hecho mella, la hegemonía cultural climática está en su cénit.

Pero cualquier edad de oro tiene un fin y cualquier cénit, un declive. El primer golpe viene de la COVID. La crisis sanitaria, junto con sus confinamientos, para en seco a la «generación clima»: desde 2020 no ha vuelto a haber una manifestación pro-clima multitudinaria. A pesar de quitarle a uno de sus más potentes

³ Fuente: <https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/#:~:text=2%2C366%20jurisdictions%20in%2040%20countries%20have%20declared,emergency%20amount%20to%20over%201%20billion%20citizens.>

brazos sociales, no para al Pacto Verde Europeo como recién estrenada brújula europea. Es más, gracias al capital social y político acumulado durante los años previos, y a pesar de las incipientes oposiciones de las derechas radicales en Hungría, Polonia o de la presidencia anti-climática de Trump 1.0, la transición ecológica se consolida como uno de los pilares de los Fondos de Recuperación *NextGen*. De los 275 000 millones de euros en inversiones de capital, se aprueba dedicar el 42% de los fondos a la acción climática, un verdadero maná para la gran transformación de un sistema fósil a otro renovable.

Pero apenas superado este primer golpe, viene el segundo en 2022. Rusia invade Ucrania, no solo poniendo en evidencia el hambre imperialista de Putin y la dependencia europea del gas fósil ruso, sino engendrando también una inflación de los precios de la energía y el coste de la vida, creando a su vez un creciente malestar social. Las corrientes reaccionarias y negacionistas huelen sangre. El Pacto Verde Europeo sigue vivo pero por las heridas de la crisis sanitaria y ucraniana se cuele el relato anti-clima y contra la transición ecológica, que se erige en un eje básico de la reacción fósil.

El imperio fósil contraataca

Ya sea a nivel político, cultural o económico, hemos entrado en un nuevo ciclo, el del *backlash* ecológico, es decir de los retrocesos en materia ambiental. Es la era de la cruzada y del ataque permanente contra la transición ecológica y justa, mientras se intenta reforzar por todos los medios el imperio de las energías sucias y su entramado político. Dicho de otra manera, el capitalismo fósil, en colaboración con la internacional reaccionaria y negacionista, ha declarado la guerra, casi santa, contra la ecología bajo todas sus formas.

Mientras que las personas defensoras del medioambiente son tachadas de «terroristas» o «fanáticos climáticos» y el cambio climático no es ni más ni menos, según Trump, que «una estafa» o un «timo», las políticas verdes están en la diana constante de las organizaciones climato-escépticas y de extrema derecha. Junto con la inmigración, estos convierten al *Green New Deal* en su enemigo a derrotar en España y Bruselas; pintan, en contra de toda evidencia, a las políticas ambientales como las responsables de las más de 200 muertes de la dana del 2025 en Valencia⁴ y atacan un día sí y otro también a las renovables, bien durante el

⁴ Sobre esta estrategia consciente de intoxicación mediática, política y social, véase, por ejemplo, Marcellesi, Florent (2024): *La máquina del fango en Valencia y cómo luchar contra la infodemia climática*, Green European Journal.

apagón del 2025 en la península ibérica⁵, bien alimentando el rechazo territorial a las energías eólicas y solares.

En este contexto de bulos y ofensiva continuos, donde la extrema derecha provoca y la derecha recoge los frutos (y parte de la izquierda flirtea con el retardismo), los retrocesos ecológicos son legiones en las instituciones. Por ejemplo, en Europa, donde el cordón sanitario entre conservadores y neo-fascistas es cada vez más fino desde las elecciones europeas del 2024⁶, se han rebajado los compromisos ambientales en la Política Agrícola Común, los requisitos de sostenibilidad ambiental para las grandes empresas, la ambición para terminar con los motores de coche fósiles, mientras que la desregulación ambiental, que permite más productos dañinos para la naturaleza y la salud pero económicamente competitivos y buenos para el bolso de las grandes multinacionales, tiene el viento en popa. Si fuera poco, en un movimiento orwelliano, el Gobierno de Estados Unidos, tras retirarse de nuevo del Acuerdo de París y de cualquier institución política o científica internacional que luche a favor de la acción climática, hasta prohíbe los términos «cambio climático» y «emisiones» en agencias federales y documentos oficiales nacionales, incluyendo la revisión de programas educativos. Más allá de la política, la batalla cultural es total.

Tras años de hegemonía climática, la reacción ha sido y sigue siendo inversamente proporcional a los avances de la transición ecológica en los últimos años. De hecho, al igual que la restauración monárquica fue una respuesta de restablecimiento de los intereses de la nobleza ante las ideas revolucionarias y republicanas en el siglo XIX, el *backlash* ecológico está siendo un intento de restauración fósil ante la revolución de las renovables del siglo XXI. Esto es una señal inequívoca de que la transición ecológica y justa ha tocado donde duele. Para el capitalismo fósil, la transición ecológica era tolerable mientras era algo sectorial y socio-económicamente marginal. Pero hoy se ha convertido en un obstáculo de primer orden para sus negocios que, recordemos, pesan en la actualidad 97 billones de dólares, casi tanto como el Producto Interior Bruto mundial⁷. Y de forma totalmente interrelacionada, representa también una amenaza

⁵ Para un análisis de este fenómeno en España y el resto de Europa, véase Nina Tea Zibetti (2026): *Left in the Dark: How Critics Are Using Blackouts to Undermine the Energy Transition*, Green European Journal, disponible en <https://www.greeneuropeanjournal.eu/left-in-the-dark/>

⁶ Por ejemplo, el Partido Popular Europeo ha resquebrajado por primera vez en 2025 en el Parlamento Europeo el cordón sanitario en torno a la sostenibilidad ambiental de las grandes empresas. Véase: <https://elpais.com/internacional/2025-11-23/el-acercamiento-de-la-derecha-a-los-ultras-tensa-la-cuerda-en-bruselas.html>

⁷ Según Carbon Tracker Initiative, citado en Santiago, E.; Olabe, A.: «La respuesta de Europa ante el retorno de las lógicas imperiales», en *El País*, 19/01/2026.

contra parte de las élites y población mundial cuyos modo de vida y valores, basados en la energía fósil y la fantasía del crecimiento ilimitado de la producción y del consumo, siguen siendo no negociables.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (ESN, noviembre del 2025)⁸ es, además de sibilina, paradigmática de cara a este intento de vuelta al orden mundial fósil. Además de volver a doctrinas ideológicas y geopolíticas imperialistas basadas en el poder duro y zonas de influencias, el autoritarismo y el supremacismo occidental no anda con rodeos ni usa eufemismos. En contra de «las desastrosas ideologías del “cambio climático” y del “cero neto”», su objetivo es «restaurar el dominio energético estadounidense (en petróleo, gas, carbón y energía nuclear)» y «ampliar el acceso de Estados Unidos a minerales y materiales críticos». En este contexto, la operación militar a principios de 2026 en Venezuela, siendo el eslabón más débil del continente por la debilidad orgánica y la falta de legitimidad social e internacional del régimen chavista, ha sido el primer ensayo de control ideológico y de los recursos naturales por parte de EEUU en su hemisferio de influencia. Envalentonado por el aparente éxito de esta estrategia, el imperialismo trumpista ha pisado el acelerador, intentando someter también al régimen iraní, quien, de paso, controla el Estrecho de Ormuz donde transita el 20% del petróleo y gas del mundo.

Pero este proceso de neo-colonización política, territorial y energética no se circunscribe únicamente a los enemigos históricos de EEUU. Europa está también en el menú del avasallamiento. Mientras la ESN reza que el «objetivo [de EEUU] debe ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual» a través de los «partidos patrióticos», hoy verdaderos caballos de Troya en la UE de este neo-imperialismo, asistimos en directo y sin tapujos a una injerencia externa en los asuntos internos europeos. En la visión ideológica de la internacional reaccionaria, y más allá del amago de controlar Groenlandia, el proyecto de la Unión Europea sobra. A pesar de las contradicciones y dobles varas de medir en conflictos internacionales por parte de la UE, a la derecha reaccionaria le sobran sus valores fundacionales basados en el derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad continental. Y, mimetizando sus intereses con los del capital fósil, les sobra su apuesta por la transición energética.

Ciertamente, dicha transición energética choca con el imperialismo fósil. Más allá de poner en duda los beneficios gigantescos del sector energético fósil, también rebate las cartas geopolíticas. Mientras EEUU, Rusia o los países del Golfo

⁸ Disponible en <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>

asientan gran parte de su poder en base a su liderazgo como primeros productores mundiales de crudo, la UE, pero sobre todo China, la nueva gran potencia del capitalismo verde, han acelerado el paso hacia las renovables. En esta «nueva guerra fría ecológica»⁹, la encrucijada y el choque se hace cada vez más acuciante entre los viejos petro-estados que no quieren morir y los aspirantes a electro-estados que no acaban de nacer.

En este sentido, quien apuesta por la transición energética apuesta *de facto* por reducir su dependencia del capitalismo fósil, sea empresarial o de estado, y por reforzar su soberanía en todas sus dimensiones ante el imperialismo, sea trumpista o putinista¹⁰. Por tanto, en el caso de la UE, además de todas las razones éticas y climáticas heredadas del Acuerdo de París y tan de actualidad hoy como ayer, la transición ecológica tiene capacidad de erigirse también en el imaginario político y colectivo como una potente herramienta de soberanía frente al vasallaje fósil, sea ayer del gas ruso u hoy del gas estadounidense, así como del crudo árabe. Convertir a la UE en un electro-continente y sus Estados Miembros en electro-estados es una de las claves centrales de la geopolítica mundial de los próximos años.

Estrategias ecosociales ante el nuevo (des)orden mundial

En este contexto, y de cara a los próximos años, asistimos por tanto a un cambio profundo en la lógica subyacente a la transición ecológica y justa. A partir del Acuerdo de París, ésta era el brazo ejecutivo de la «hegemonía cultural climática», impulsada sobre todo por motivos éticos y solidarios de cuidado del planeta, de las generaciones futuras o de las islas del pacífico. Sin embargo, a día de hoy la transición energética se hace principalmente en Europa por motivos geopolíticos de soberanía nacional y continental. A través de la electrificación de todo en todas partes, lo cual podríamos denominar la «hegemonía eléctrica», todavía naciente, la transición energética se resignifica en un marco de «independencia vs. imperio». Sin renunciar a los avances de la década anterior, este nuevo panorama obliga a todos los actores a repensar su visión, estrategias y alianzas.

⁹ Expresión de Nils Gilman: <https://foreignpolicy.com/2025/09/01/ecological-cold-war-climate-china-europe-usa-russia/>

¹⁰ Las similitudes entre Putin y Trump, y más allá de las corrientes políticas que representan, son cada vez más evidentes. A nivel ideológico, son defensores de los «valores tradicionales», basados en un mundo cristiano y blanco, que hay que salvar del declive, con una obsesión contra el colectivo LGBT y el feminismo, mientras que en la práctica política manejan de forma sistémica la mentira así como el desprecio a la democracia liberal y parlamentaria.

Para ello, primero, es importante no caer en una trampa. Por mucho que la acción climática ya no sea un objetivo en sí sino una consecuencia indirecta y posible de la búsqueda de soberanía, esto no quita un ápice a la urgencia climática. Ésta sigue tan o más de actualidad ante el grave y continuo calentamiento del planeta, que crea cada vez más estragos sociales, económicos, laborales y ambientales. Quitarle hierro, priorizar la competitividad ante la sostenibilidad, desregulando y desmantelando el Pacto Verde Europeo ante las presiones de ciertos sectores económicos¹¹, o tratar las cuestiones de soberanía y de clima de forma no transversal y complementaria serían profundos errores y goles en propia puerta. Hoy la transición energética es doblemente urgente. A la urgencia climática se añade la urgencia de construir soberanía a través de la transición ecológica; la segunda no sustituye a la primera, siendo ambas dimensiones tan relevantes la una como la otra y dos caras de la misma moneda. Cualquier retroceso en política climática será pan para hoy de cara a la competitividad y hambre para mañana de cara a la soberanía y la resiliencia.

Por otro lado, puesto que nos enfrentamos a urgencias climáticas y geopolíticas, lo cual significa que los tiempos apremian, hay una necesidad de actuar en Europa, y por tanto en España, a favor de la transición energética de forma rápida, masiva y a gran escala. Si bien sigue siendo importante y nada descartable, ya no es momento de limitarse a los laboratorios de ideas y al *small is beautiful* de los años 1970. A contracorriente de la ola negacionista, y aún más cuando las guerras, ya sea en Ucrania o Irán, calientan el precio de la energía fósil de la que todavía tanto dependemos, la transición requiere de más impulso político, industrial y social, a través de grandes inversiones públicas y privadas, para reducir de forma prioritaria, significativa y estructural la demanda energética y, dentro de este marco de suficiencia, llevar a cabo proyectos capaces en poco tiempo de transformar un consumo de masas hoy todavía mayoritariamente fósil en otro principalmente renovable y eficiente. Como sugiere Gorka Lurnaga, «si el cambio climático [y, añadido, la geopolítica] es un macro-problema, no se puede resolver con microrespuestas»¹².

¹¹ No confundamos simplificación y desregulación. Mientras siempre es posible mejorar la eficiencia administrativa simplificando procesos y leyes (por ejemplo para las pymes), no es lo mismo que la desregulación cuyo objetivo es debilitar el marco legal, en general a favor del gran capital. Véase González, E.; Saldaña, E.; Ruibal, B.; Ruiz, A.; Del Olmo, J. C. (2026): Desregulación en la UE: una amenaza para la salud, la seguridad alimentaria y la naturaleza, publicado el 18 de febrero del 2026, *El Español*, disponible en: https://www.elespanol.com/enclave-ods/opinion/20260218/desregulacion-ue-amenaza-salud-seguridad-alimentaria-naturaleza/1003744133846_13.html

¹² Véase Lurnaga, Gorka (2024): «Por las renovables a medida», disponible en: <https://www.ehnebizkaia.eus/gorka-lurnaga-por-las-renovables-a-medida/>

Para ello, es fundamental superar las contradicciones de la transición energética a nivel territorial donde alianzas *de facto* y *sui géneris* entre romanticismo paisajístico y agrícola, *nimby*, colapsismo y negacionismo climático obstaculizan proyectos de renovables necesarios para estos nuevos tiempos. Sin ninguna complacencia para multinacionales sin escrúpulos o la corrupción a nivel local, siempre protegiendo las salvaguardias participativas y ambientales necesarias en cualquier proyecto y apostando por el retorno socio-económico y laboral para las comunidades impactadas para que no haya tierras de sacrificio y la transición sea justa, es posible acelerar la transición energética. Aunque es bueno intentar que lo sea a nivel estético y cultural, lo grande y masivo no es necesariamente bello pero puede ser salvador ante los grandes retos climáticos y geopolíticos actuales y de las próximas décadas.

Ahora bien, para que haya transición energética se necesitan también materias primas fundamentales. Que hablemos de litio, cobalto o las llamadas «tierras raras»¹³, todas estas materias se usan para baterías, eólicas, paneles solares o bombas de calor y son por tanto imprescindibles a la electrificación y descarbonización del continente y de España. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas de la UE (2026)¹⁴, 10 de 26 materias primas fundamentales se importan íntegramente desde fuera de la UE y ninguna de las tierras raras utilizadas en la UE se procesan internamente. Dicho de otra manera, la UE es altamente dependiente de países terceros, empezando por China, para el acceso o la transformación de materias críticas fundamentales para su transición energética. Y sin recursos estratégicos directamente explotados y controlados a lo largo de toda la cadena de valor por la UE, la autonomía estratégica es un eslogan vacío y la transición energética como vector de soberanía, una quimera.

Por tanto, además de una reorientación estructural y a largo plazo de la producción y consumo en términos post-crecientistas, así como una apuesta industrial decidida por el reciclaje de materias primas, esto supone también una cierta e inevitable relocalización de la extracción en territorio europeo. Siendo honestos, y también solidarios desde una visión Norte Global-Sur Global, no podemos pretender mantener altos niveles de bienestar y servicios públicos, y activar una transición ecológica exitosa sin relocalizar cerca de casa parte de los impactos negativos de nuestro modo de vida, hoy externalizados a países con menos pro-

¹³ Estos 17 elementos químicos son en realidad óxidos metálicos no solubles en agua, siendo en el siglo XVIII el término «tierra» usado para referirse a los óxidos. Además, muchos no son elementos escasos (incluso pueden ser más abundantes que el plomo o el cobre) pero se las califica de «raras» debido a que es muy poco común encontrarlos en una forma pura.

¹⁴ Disponible en <https://www.eca.europa.eu/es/news/news-sr-2026-04>

tección social, laboral y ambiental. Siempre y cuando se haga con reglas democráticas, estrictos límites y condicionalidades sociales, climáticas, de protección de la biodiversidad y laborales, así como beneficios para las poblaciones locales implicadas, no habrá soberanía sin un mínimo de extracción en suelo europeo.

Al mismo tiempo, la soberanía nunca es absoluta. Por mucho que la globalización pase por turbulencias fuertes, existen y existirán en las próximas décadas todavía muchas interdependencias económicas, sociales y ecológicas en un mundo altamente interconectado. Para evitar caer en un vasallaje energético bajo la tutela colonial estadounidense, rusa o árabe, Europa debe apostar por diversificar aún más sus alianzas estratégicas. Ante la vuelta de hemisferios de influencia por parte de grandes potencias, la diversificación debería pasar por la defensa a ultranza del multilateralismo y la capacidad de sellar con diferentes países acuerdos de diferentes índoles, con un lugar central para la energía y las materias primas, con el fin de suplir lo que no se produce y no se puede reciclar en casa, sin nunca depender de unas pocas fuentes en exceso. Que el gas ruso o la poca fiabilidad política de Estados Unidos sirvan de lección. Eso sí, con una condición: que los acuerdos bilaterales se construyan bajo el paraguas del Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Agenda 2030, y claras cláusulas espejo en materia laboral y ambiental.

Más allá, es necesaria una profunda reflexión en torno a nuestra compleja relación con China. Por un lado, el gigante asiático, quien controla gran parte de las tierras raras necesarias para las energías renovables, se ha convertido en un motor de la transición verde y de la electrificación a marcha forzada de su economía e industria hacia convertirse, potencialmente¹⁵, en un electro-Estado. Es, por tanto, un actor central de la transición ecológica y un socio imprescindible de cara a contrarrestar el imperio fósil. Guste o no, en las cumbres climáticas y más allá, la coalición mundial por el clima pasa por China. Al mismo tiempo, además de ser un Estado profundamente autoritario y represivo, China es también un competidor feroz con la capacidad de hundir grandes partes de la transición ecológica europea al inundar los mercados de su sobreproducción, ya sean hace una década con los paneles solares y ahora con los coches o baterías eléctricas. *In fine*, con China se trata de buscar un equilibrio dinámico entre una firme de-

¹⁵ A día de hoy sigue contando con una fuerte generación energética a base de carbón y petróleo. Véase: https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-have-now-been-flat-or-falling-for-21-months/?utm_content=buffer419de&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

fensa de la soberanía económica europea, de su transición ecológica «*Made in Europe*» y de los valores democráticos, mientras al mismo tiempo se abren y refuerzan canales de colaboración geopolítica y comercial para el sostén y el empuje de la lucha climática a nivel mundial.

Pero la cuestión de las alianzas no solo se plantea a nivel internacional sino también a nivel doméstico. Al considerar la transición ecológica ya no solo como un asunto ético-climático sino también como un asunto de orden geopolítico y de soberanía, esto invita a ampliar las posibles alianzas para alcanzarla. A los *usual suspects* progresistas y ecologistas, en sus diferentes formatos (partidos, sindicatos, asociaciones, ONG, empresas, etc.), se suman corrientes liberales, con un fuerte ideario pro-europeo y de soberanía supraestatal, como otras conservadoras y/o (sinceramente) patrióticas, con un fuerte acento estatal y muy celosas de la defensa de su patria. De hecho, la perspectiva de colonización e injerencia externa representa una seria brecha ideológica para algunas corrientes nacional-negacionistas europeas, hasta convertir su cosmovisión, según Emilio Santiago, en un «patriotismo confuso»¹⁶. Al oponerse con vehemencia al *Green New Deal* y, *de facto*, defender política y económicamente al imperio fósil, cava en su interior una profunda contradicción: difícilmente puede uno defender su patria si al mismo tiempo la vende a potencias y fondos extranjeros y se convierten en meros vasallos suyos. Mientras ponemos con claridad el dedo en la llaga nacional-negacionista, toca reforzar alianzas clásicas –en torno al eje ético-climático– y añadir otras más incómodas –en torno al eje soberanía energética.

No son tiempos para quedarse ensimismados. Más allá de defender lo alcanzado en la última década, son tiempos de adaptación al nuevo contexto y reubicación estratégica para retomar la iniciativa. Para mayor sostenibilidad y soberanía, la transición ecológica y justa puede y debe ganar la batalla cultural y política al imperio fósil.

¹⁶ En respuesta a Vox en la Comisión de Transición ecológica y reto demográfico, en el Congreso de los diputados, el 10 de octubre del 2025. Véase https://www.eldiario.es/rastreador/cientifico-csic-planta-cara-bulos-vox-peligroso-pais_132_12674693.html

Las ciudades pequeñas e intermedias: un retrato del problema de España

Esteban Hernández

Escritor, periodista, corresponsal político de El Confidencial

Hace 10 años, la publicación del libro de Sergio del Molino *La España vacía* (Ed. Turner) contribuyó a fijar la mirada nacional sobre zonas del país que estaban quedándose sin habitantes. Desde que, en las décadas centrales del siglo XX, millones de españoles abandonaran sus pueblos natales para buscar una vida mejor en las ciudades, el país se construyó desde la potencia de las urbes. Esa pérdida de vigor regional adquirió caracteres preocupantes. La «España vacía», que se convirtió poco después en la «España vaciada», una expresión políticamente más correcta, se abandonó poco después para emplear un término más neutro, «despoblación». La visualización del problema tenía un poso de inevitabilidad: era la lástima que latía ante un fenómeno irreversible.

La situación no ha mejorado con el tiempo. Según datos publicados por *El Confidencial*, de los 8 131 municipios del país, tres de cada cuatro pierden habitantes año tras año; 6 827 municipios no superan los 5 000 vecinos y reúnen apenas al 12% de la población española, unos 5,7 millones de personas. En la última década, ocho de cada diez pueblos han visto reducir su censo, perdiendo más de 410 000 personas. Los municipios de menos de 1 000 habitantes han perdido más de 200 000 vecinos en los últimos diez años.

En 2021, Sergio Andrés Cabello publicó *La España en la que nunca pasa nada* (Ed. Akal), un texto que ponía el acento en las ciudades pequeñas y medianas. Resaltaba su decrecimiento demográfico, pero también la pérdida de oportunidades laborales, el cierre de servicios básicos y su sensación de invisibilidad en el mapa político y mediático.

Eran poblaciones atrapadas en tierra de nadie, porque no gozaban de la atención y las ayudas que se estaban destinando a la despoblación, pero tampoco atraían ni las inversiones ni la población, que iba a parar a las grandes ciudades. Muchos de estos lugares subsistían en una desalentadora mezcla de autónomos que buscaban la subsistencia creando su propia empresa, pensionistas, funcionarios, subcontratados de empresas públicas, empleados del sector servicios y establecimientos cerrados y polígonos a medio construir. También contaban con empresas exitosas, pero cada vez menos.

El libro suscitó un interés bastante menor, no ya entre el público generalista, sino entre los mismos especialistas. En realidad, era un asunto al que nadie le interesaba. Las pequeñas y medianas ciudades carecen del hálito romántico de la vida rural: nada de comunión con la naturaleza en paisajes idílicos. Tampoco poseen la potencia de las grandes ciudades, sus ofertas de ocio, su vitalidad y su dinamismo. Eran entornos en decadencia, que nos generaban cierto pesar, y a los que se miraba con resignación: los tiempos eran así.

Con los pequeños pueblos, las voces de alarma se podían apaciguar con medidas compensatorias: más recursos públicos para que no pierdan servicios sanitarios o educativos, más fibra óptica para que gocen de conexión, ventajas fiscales para los emprendedores rurales y clases de capacitación digital para las personas mayores, en especial para las mujeres. Los nómadas digitales aparecían como esperanza repobladora.

Las ciudades medias e intermedias tienen una solución bastante más complicada, porque su declive apunta directamente a cuestiones estructurales. Conseguir un camino de salida para ellas implica cambiar muchas variables del sistema. De modo que los discursos habituales se centraron en los lugares vacíos y en las urbes dinámicas, y pasaron de puntillas por esa España desgastada. Quedaron, una vez más, fuera del radar.

Las ciudades desconectadas

La globalización cambió la configuración física de España, como lo hizo con el conjunto de Occidente. Las ciudades globales (Nueva York, Tokio, París, Fráncfort, Zúrich, Ámsterdam, Los Ángeles, Sídney, o Hong Kong) concentraron gran parte de los recursos y del talento, se convirtieron en los centros comerciales y financieros del mundo y se erigieron como nudo de las conexiones. En España ocurrió igual, solo que contábamos con dos ciudades globales, Madrid y Barcelona. Conforme fue avanzando el siglo, Barcelona perdió vitalidad y Madrid la ganó. En la capital residen hoy los núcleos inversores, las grandes consultoras, los despachos de abogados más prestigiosos, empresas del IBEX, los lobistas, los principales medios de comunicación, la alta administración, la judicatura, las universidades. La capital es el lugar al que acudir si se quiere hacer carrera, si se pretende hacer dinero o si se quiere influir en el gobierno.

Al mismo tiempo, España giró hacia el exterior y lo hizo de manera decidida: los esfuerzos económicos se dirigían a captar inversión exterior, a poner en marcha empresas de mayores dimensiones que tuvieran recorrido internacional, a captar

turistas y a importar mano de obra. Madrid es el lugar que vehiculaba esos flujos, hacia dentro y hacia fuera.

La capital se convirtió en una economía dirigida a los servicios. La mayor parte de las compañías se especializaban en ofrecerlos al capital internacional que pretendía tener recorrido en España, a través de asesoramiento, oferta de oportunidades de inversión, redes de contactos y soporte técnico-jurídico. Una parte de la ciudad prestaba servicios a estas clases gestoras y a las dependientes de ellas; otra se los prestaba al turismo; los jubilados y los funcionarios completaban el mapa humano de la urbe.

En este modelo, el centro de la red tiende a absorber la potencia del resto de territorios, en especial de las regiones más cercanas. Así ha ocurrido con Madrid: los beneficios empresariales de buena parte de España no van a parar a los lugares que los producen, sino que se destinan a la esfera financiera o inmobiliaria madrileña; los jóvenes acuden a ella a estudiar o a buscar una carrera profesional; los trabajadores cualificados encuentran los mejores puestos en la capital, y la inmigración, empleo. Las localidades cercanas que ganan población lo consiguen gracias a la mano de obra que trabaja en Madrid y que emigra hacia lugares más baratos o con mejores condiciones de vida. El corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid registró más de 2,8 millones de viajeros en 2024, más que la población de Castilla y León.

Dado que las pequeñas y medianas poblaciones, y tampoco las capitales de provincia, pueden reproducir condiciones ni siquiera similares a las que llevan a Madrid al éxito, tienden a perder vitalidad. El cambio en la economía que consagró a la capital, centrado en las finanzas, la economía de servicios, la logística y el turismo, ha provocado un vaciamiento de oportunidades para estas ciudades. La pérdida de industria, el decaimiento de la agricultura y la ganadería, las dificultades para crear nuevas empresas exitosas y las complicaciones evidentes para poner en el mapa del ocio y del turismo a tantas ciudades, las deja sin un lugar definido. Ni siquiera el carácter de centro comercial de la mayoría de las cabeceras de comarca funciona ya con vigor. La facilidad de los desplazamientos y la compra telemática han vaciado locales de muchas calles mayores. Las tiendas tradicionales fueron sustituidas por franquicias, y cuando estas decayeron, no encontraron reemplazo. Los pequeños locales de carcasas de móvil y de objetos de recuerdo son ya habituales.

La decadencia de las pequeñas y medianas ciudades no es una simple consecuencia de la evolución de las costumbres y de los deseos de las poblaciones de gozar de una vida más abierta y con posibilidades mayores. Es el efecto de una transformación económica que ha tenido lugar durante las últimas décadas,

que ha orientado la actividad hacia el exterior y que ha pensado en las interconexiones como la única dirección del progreso. El agotamiento de espacios sin voz y sin presencia se está dejando sentir. Cambiar esa dirección es una tarea que, a pesar de su urgencia, nadie está llevando a cabo. Las grandes soluciones que se han ofrecido a estas ciudades han sido las de potenciar el turismo, convertirse en núcleos logísticos y crear condiciones atractivas para que las poblaciones urbanas las elijan como residencia permanente o como lugar para fines de semana. En esa indefensión se manejan. Una de las demandas más frecuentes es «que nos podamos quedar en nuestra tierra».

Los cambios en el humor

Esa tierra de nadie en que se mueven las ciudades pequeñas e intermedias también se refleja en un sentido político. La gran variedad de ellas, así como su posición geográfica (costas, interior), la conservación o no de tejido productivo y las lenguas que en ellas se hablan (castellano, catalán, vasco, gallego, etc.), producen resultados electorales muy diferentes en función de esos factores. Sin embargo, el clima dominante es el que transita entre dos estados anímicos, que se acentúa en las ciudades del interior. La decadencia percibida da forma a un pesimismo aceptado que no pretende grandes transformaciones. En cierta medida, se conforman con no seguir perdiendo, con mantener más o menos aquello con lo que ahora cuentan. Las ofertas políticas tradicionales siempre incluyen una serie de medidas que prometen mejorar lo existente, por lo que continúan prestándoles su apoyo. Están en una posición de repliegue: el pesimismo anticipa un futuro peor, les bastaría con frenar la situación.

El otro sentimiento dominante opera en términos individuales. En un entorno en el que no se confía demasiado, los caminos de salida suelen buscarse desde las acciones privadas. La formación es la vía más habitual: los jóvenes, especialmente los que cuentan con recursos familiares, acuden a las universidades de las grandes ciudades con el objetivo de conseguir las credenciales suficientes para iniciar una carrera laboral exitosa. Dado que los empleos más prestigiosos, y los que mejores salarios ofrecen, se ofertan en las grandes urbes, suelen emigrar a ellas. Este fue un camino tradicional desde los años del crecimiento español: los abuelos no deseaban que sus hijos se empleasen en los duros trabajos manuales que ellos tuvieron que sufrir, y los descendientes tuvieron la aspiración de salir de los entornos cerrados locales para encontrar nuevos caminos. Ahora la dificultad reside para encontrar la continuidad en los negocios de aquellos que se quedaron. Sus hijos no quieren hacerse cargo de las empresas familiares, algunas relativamente prósperas, porque su lugar ya está en otra parte.

El pesimismo y el deseo aspiracional han dominado en muchas ciudades pequeñas e intermedias, y lo siguen haciendo, pero cada vez con menos fuerza. Son sentimientos que están transformándose. El apoyo prestado a los partidos tradicionales no se ha visto correspondido con acciones satisfactorias, por lo que el descontento crece. Las ciudades pequeñas suelen ser lugares conservadores, en el sentido de mantener la fidelidad de voto, y la media de edad de sus poblaciones es elevada, lo que explica que el malestar no haya derivado hacia partidos rupturistas. Pero eso no significa que no exista, y que no esté manifestándose cada vez con mayor intensidad: es complicado creer en promesas que no se cumplen nunca.

En segunda instancia, el aspiracionismo a través de la marcha a la gran ciudad es en muchas ocasiones un proyecto frustrado. Los años de apoyo a los hijos que se marcharon no terminan de ofrecer réditos. Algunos regresan, porque no hay nada en la ciudad para ellos, o lo que hay es demasiado caro. Ambos aspectos están tejiendo los cambios en la política.

El territorio como razón política

Hasta la fecha, la canalización del malestar está encontrando dos caminos políticos. La vertiente localista es la más acentuada. Aparece en las formaciones soberanistas, en las nacionalistas y en las regionalistas. La idea de que, ante una situación complicada, la gestión «por los nuestros» de los recursos públicos beneficiará a esas pequeñas ciudades está muy asentada. En el País Vasco es una de las fortalezas tanto de Bildu como de PNV, dependiendo de la provincia, y en Cataluña estos sectores, en especial de zonas catalanoparlantes, han impulsado a fuerzas como Junts y ERC, y ahora a Aliança Catalana. En la izquierda, lo que el partido socialista ha ido perdiendo se ha recogido por fuerzas regionalistas como BNG, Chunta, Compromís o Más Madrid. IU tiene presencia en muchos lugares, pero fuerza fundamentalmente en Andalucía y Asturias. Sin embargo, y al contrario que los soberanistas, muchos de estos partidos encuentran su mayor apoyo en las capitales, y no enganchan tanto con las ciudades pequeñas. Ocurre igual con los partidos provinciales, como Teruel Existe, Soria Ya o Unión del Pueblo Leonés, que tienen cierto arraigo en el territorio, pero su principal baza son las capitales.

La otra opción que está creciendo, y que vehicula el descontento, es Vox. Su crecimiento es más transversal, porque recoge voto urbano pero también rural. Las campañas que ha realizado en las autonómicas tenían la misma estructura: preeminencia del candidato nacional sobre la marca, una estructura local al ser-

vicio de las ideas y de las siglas, y un recorrido frecuente por localidades pequeñas y medianas, porque entienden que son los puntos clave. Es un partido que encuentra obvias conexiones con el mundo agrícola y ganadero, y algunos aspectos culturales, como los toros y la caza, fueron temáticas en las que incidieron. Los perjuicios que causan a esos sectores la normativa verde y su rechazo de los acuerdos de comercio internacionales, como Mercosur, favorecen su penetración. Por otra parte, en muchas zonas de España, el desplazamiento del voto de PP hacia Vox es relativamente sencillo, ya que los de Abascal añaden un plus de contundencia que el votante de derechas, en un entorno crispado, entiende pertinente.

Se han conformado así dos vías de fuga del bipartidismo. La constante española, pero también europea, es que los partidos que tradicionalmente dominaron la escena política están perdiendo voto. En algunos países continentales esas formaciones han desaparecido o se han convertido en minoritarias, y nuevos actores toman el primer plano. En España no es así, pero el porcentaje electoral disminuye paulatinamente. Podemos, Ciudadanos y ahora Vox están recogiendo la necesidad de cambio que aparece cada vez con más frecuencia entre las sociedades. Los partidos regionalistas y provincialistas forman parte del mismo escenario.

Son los mecanismos de salida que aparecen en zonas que, por un motivo u otro, se perciben desgastadas y frustradas. Sin embargo, estas propuestas contienen límites significativos respecto de lo que pueden aportar acerca del futuro. Las opciones nacionalistas, y algunas regionalistas, cifran su esperanza en la consecución de una mayor cantidad de recursos públicos, ya sea exigiendo mayores transferencias al Estado, mediante la captación de fondos europeos, o articulando mecanismos de financiación que permitan que lo que se recauda en ese territorio vaya a parar a él. El razonamiento de fondo tiene que ver con la relación entre el decaimiento de los servicios públicos y de las condiciones de vida apañadas y la falta de recursos mediada por un mal reparto estatal.

La atención sanitaria empeora por la falta de médicos y de plazas hospitalarias, o la educativa por los presupuestos en los centros y por la ausencia de profesores. Las personas que viven en pequeños pueblos encuentran muchas dificultades para realizar su vida cotidiana, en especial si son mayores y carecen de vehículo propio, lo que se agrava con una red de transporte público muy deficiente. Son estos aspectos los que quieren arreglarse mediante la demanda de más recursos. En este sentido, hay una diferencia evidente entre las regiones ricas y pobres, ya que en las primeras opera una reclamación de justicia según la cual eviten que lo que se recauda en su territorio vaya a parar a otros lugares, y las segundas esperan que el gobierno central aporte las transferencias precisas

en lugar de destinarlas a zonas más ricas. Son dos visiones de la justicia territorial que chocan entre sí y que explican las tensiones entre el gobierno y las comunidades autónomas, y de estas entre sí.

Una mala fórmula

Sin embargo, y más allá de estas confrontaciones, lo cierto es que las fórmulas para que las ciudades pequeñas e intermedias que resisten razonablemente no pierdan empuje y para que aquellas, las mayoritarias, que están en declive lo recuperen, suelen limitarse a una visión voluntarista, que se corresponde con la solución que se dio a las crisis laborales en términos individuales. La idea central era que, ante un mercado que demandaba menos mano de obra laboral, el camino de salida era una mejor formación: más títulos, más aprendizaje en áreas demandadas, más idiomas. De ese modo, se generaría interés en el empleador. Había que destacar, hacerse atractivo para el mercado, y los buenos resultados llegarían. Es el tipo de mentalidad que afirmaba que las personas que fueron expulsadas del sector de la construcción durante la crisis tendrían éxito si se reciclaban en programadores o que los mineros que perdían su trabajo podrían volver a encontrarlo si se formaban como cuidadores de residencias.

Con las ciudades, la visión era la misma: hacerse atractivas. Si se reformaban los centros urbanos y se generaba oferta turística, gracias a la construcción de museos o al desarrollo de festivales, se creaban clústeres tecnológicos y se potenciaban las capacidades digitales, se generaría la sensación de que se estaba ante ciudades vibrantes que atraerían turistas e inversión, lo que se acabaría traduciendo en empleo y en nuevos pobladores. Algunas ciudades lo consiguieron, como Málaga, pero la mayoría de las pequeñas y medianas poblaciones lo único que lograron fue malgastar/perder recursos. Suele funcionar al revés: en la medida en que una población cuenta con empleos, retiene o atrae población. Sin embargo, la idea pareció brillante: se trataba de hacer de la ciudad una marca, y si esta funcionaba, se recuperaría la prosperidad. Las medidas que ahora se promueven apenas distan de ese marco mental: si se ofertan buenas condiciones fiscales, las empresas se trasladarán a ellos; si cuentan con buenos servicios públicos y buenos transportes, la gente se mudará a ellas por sus mejores condiciones de vida; si las pequeñas empresas de esas localidades se digitalizan, lograrán crecer; si sus poblaciones se forman adecuadamente, encontrarán oportunidades. Es el tipo de ideas que han resultado fallidas desde hace dos décadas y que, sin embargo, encuentran permanentemente nuevas formulaciones con las que reciclarse.

Frente a ellas, Vox apuesta por un cambio de marco, que insiste en constantes típicas de las nuevas derechas. Las pequeñas y medianas ciudades viven en crisis permanente por lo que denominan «prohibición de la prosperidad»: una regulación excesiva que dificulta la iniciativa individual; normas demasiado rigurosas que impiden el aprovechamiento real de los recursos agrícolas, ganaderos y energéticos de esas zonas, tejidas desde la lucha contra el cambio climático; cierre de posibilidades provocadas por los acuerdos de comercio que permiten que productos baratos y producidos en condiciones de competencia desleal inunden nuestros mercados, y una inmigración que resta empleos a los nacionales y que genera una sangría de los recursos públicos.

Estas soluciones para los problemas de las ciudades pequeñas e intermedias comparten algo: la responsabilidad del Estado respecto de sus males; ya sea porque asignan los recursos a zonas ricas en lugar de destinarlos a las que más lo necesitan (lo que conlleva una crítica respecto de las condiciones de privilegio de Cataluña, Euskadi o Navarra); o porque realizan transferencias a regiones improductivas mientras que niegan el desarrollo a las que sí lo son (lo que conlleva una crítica desde comunidades como la catalana por recibir menos de lo que aportan); porque el gobierno central no descentraliza la administración del Estado; o porque un gobierno izquierdista ahoga las posibilidades de crecimiento mediante gasto improductivo y normativas ideológicas. Todas estas visiones colocan a la política estatal en el centro de sus diatribas y reivindicaciones. Sin embargo, tales enfoques pierden de vista el aspecto estructural, el que mejor explica la situación complicada de estas poblaciones.

La imprescindible acción estatal

Madrid, la ciudad global, se ha convertido en una aspiradora de recursos, porque la organización de nuestra economía obliga a ello. En la medida en que ha girado hacia los servicios como motor principal, y casi único, se convierte en inevitable que un punto geográfico recoja la mayor parte de las oportunidades. La financiarización de la economía conlleva la concentración de riqueza, en determinados sectores sociales, pero también en espacios geográficos concretos. Es una dinámica mundial: las grandes urbes poseen conexiones, vínculos y accesos que no se pueden reproducir en las pequeñas.

El mapa queda configurado como una red, en la que unos cuantos puntos disponen de conexiones (Madrid, y en mayor medida Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga o Sevilla) y el resto del territorio se constituye como simple periferia,

cuya suerte dependerá de la cercanía o lejanía con los nodos. Este es el mapa real de España, y no el administrativo, en la medida en que es el que delimita las posibilidades vitales de cada espacio geográfico.

Pero esta configuración de la economía es producto de una dinámica, la que ha apostado por derivar la actividad industrial hacia lugares de bajo coste, la que no refuerza las economías locales, la que mira permanentemente hacia el exterior. En ese escenario, Madrid siempre gana, porque los beneficios obtenidos se derivan hacia el circuito en el que la urbe está inmersa, y no revierten en el territorio: llenar de placas solares el campo puede ser necesario, pero solo beneficia a las cuentas de resultados de las grandes empresas urbanas. El músculo productivo, el que podría revitalizar las ciudades pequeñas e intermedias, ha ido desapareciendo, al igual que las pequeñas y medianas empresas arraigadas cada vez tienen más difícil su subsistencia. Sin esas piezas es complicado que las periferias cuenten con el desarrollo suficiente como para no ir languideciendo.

En cierta medida, los reproches al Estado pueden estar justificados, pero no el sentido en que habitualmente se formulan, el de una acción injusta. Lo que es relevante es su inacción. La falta de una estrategia de Estado para impulsar las capacidades del país, para aprovechar su mercado y su capital (ese que suele fugarse a la esfera inversora anglosajona), así como para desarrollar aquellos ámbitos económicos en los que se cuenta con cierta potencia, es el principal error. Y más aún en tiempos tan complicados como estos. Hemos entrado en una época diferente, en la que el Estado está desempeñando un papel principal en las naciones más importantes del mundo. Las dificultades cada vez mayores en las cadenas de suministro y la falta de capacidad productiva están generando serios problemas en Occidente. La inteligencia artificial amenaza con una reducción de puestos de trabajo y ha comenzado por el ámbito cualificado del sector servicios. Las enormes perturbaciones en el orden internacional auguran un futuro complejo. Son tiempos que requerirán mirada larga, planificación y reforzamiento de las capacidades nacionales, así como una relación diferente con los principales países europeos.

Es una época nueva, que debería ser provechosa para las ciudades intermedias, siempre y cuando el marco mental dominante se transforme: hay que examinar el mapa nacional y articular todas las posibilidades que nos permitan tener más fuerza interior y conectarnos exteriormente con más potencia. Eso requiere de una acción estratégica que el mercado no puede hacer y que la política no se ha atrevido a desarrollar aún. Este es el momento de un cambio de paso.

Nuevo contrato social y política de lo común

María Eugenia Rodríguez Palop

*Ecofeminista y profesora de DD. HH. y Filosofía del Derecho
Universidad Carlos III de Madrid*

Tanto la legitimidad del poder político como la relación del individuo y la comunidad dependen desde hace siglos del imaginario del contrato social. Un imaginario según el cual los seres humanos libres solo logran escapar de la inseguridad del estado de naturaleza cuando se someten a un orden político que les garantiza protección. Ese es el relato que ha estructurado durante siglos nuestra comprensión de la ciudadanía, del Estado y de los derechos individuales.

Sin embargo, hoy ese relato parece haber entrado en crisis. La sensación es que la desigualdad económica no se ha superado, el deterioro ambiental agrava nuestras condiciones de vida, la transformación digital es acelerada y excluyente y las instituciones democráticas sufren un déficit preocupante de legitimidad y legitimación. O sea, que el sistema no cubre las expectativas de todos por igual ni consigue ofrecer la seguridad material que la gente necesita.

En el plano socioeconómico, la promesa que articulaba el contrato social de las democracias industriales –trabajo relativamente estable, salarios crecientes, Estado de bienestar y movilidad social intergeneracional– se ha ido erosionando con el tiempo. Desde el punto de vista ecológico, el contrato social moderno fue siempre muy deficiente dado que ignoraba límites físicos fundamentales y se apoyaba en la ideología del crecimiento ilimitado. El crecimiento económico se ha considerado durante décadas el indicador casi exclusivo de progreso, pero ha conducido a una explotación intensiva de recursos, a la pérdida de biodiversidad y al calentamiento global, minando la mismísima base que lo hacía posible. Por lo demás, la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas se ha traducido en abstención, auge de discursos antipolíticos y la implosión de los marcos culturales de la extrema derecha. La incertidumbre, la falta de control y la impotencia de la política frente a algunos problemas importantes ha restado credibilidad al pacto democrático: si las decisiones relevantes se toman lejos del espacio público, el contrato deja de ser una construcción común para devenir un dispositivo opaco al servicio de ciertos intereses.

En este contexto, hablar de «un nuevo contrato social» exige cuestionar un modelo que se apoya en el individuo propietario más que en las relaciones sociales que lo constituyen, concibe la naturaleza sólo como un recurso disponible, y oculta las desigualdades reales de poder, género, clase o raza sobre las que se construyen los pactos efectivos. En definitiva, exige volver a la filosofía del bien común y a una visión antropológica más relacional y vinculada. Volver al bien común como resultado provisional de una deliberación continuada, no de la imposición unilateral de las élites tecnocráticas o de mayorías circunstanciales.

Digo esto porque al lenguaje del bien común han recurrido también proyectos autoritarios que lo han utilizado para reforzar sus propias estructuras de dominación y ahora se trata de conectar el discurso del contrato social y la política de lo común con prácticas concretas de democratización, redistribución de la riqueza y descentralización del poder. Aunque el viejo contrato social liberal, con todas sus conquistas, ya no sea suficiente, su núcleo emancipador –la idea de que la legitimidad del poder viene asociada al consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce– sigue siendo totalmente irrenunciable.

II

Este nuevo contrato social tiene que girar alrededor de cinco ejes interdependientes: radicalidad democrática y nueva institucionalidad; distribución de la riqueza y justicia social; descentralización del poder político y autogobierno; identidad relacional y reconocimiento; y feminización de la política.

1. La profundización democrática consiste en facilitar el diálogo y la interacción entre la política institucionalizada y la no institucionalizada (movimientos sociales, asociaciones y comunidades autogestionadas) evitando, en todo caso, su cooptación por parte de la «expertocracia» corrupta: mediaciones, lobbies y órganos tecnocráticos aparentemente imparciales, a los que se considera representativos, pero que sólo potencian el corporativismo.

Esta deliberación tiene que articularse en el seno de procedimientos democráticos depurados que aseguren una participación relevante. La fidelidad a tales procedimientos e instituciones (acordados también democráticamente) no ha de servir, por supuesto, para garantizar el inmovilismo sino precisamente para lo contrario: para cuestionar los consensos alcanzados y canalizar el descontento.

De manera que esta profundización democrática se apoya en una ciudadanía activa, exigente, nerviosa, educada en virtudes cívicas y en deberes de civildad, e identificada racionalmente con la política de lo común. Convencida de que cada reflexión individual sobre lo que se considera bueno es una reflexión también sobre lo que es bueno para las comunidades a las que cada cual está ligado; convencida de que la propia libertad individual, la autoconsciencia y la autoestima sólo pueden realizarse en una vida social que inspire un compromiso con lo común.

Este es un proceso que requiere superar los límites de una democracia representativa en la que la participación política venga estimulada únicamente por la búsqueda del interés propio y en la que el objeto del Estado sea garantizar fundamentalmente la satisfacción de expectativas privadas y grupos de interés. Requiere superar la democracia como mercado y la política *business*, fruto del regateo y la negociación; el partido «atrapalotodo», con perfil empresarial, el binomio elector-cliente, militante-inscrito y líder-producto; la centralización, la burocratización y la carrera por el caudillaje. En definitiva, el sistema democrático no puede concebirse únicamente como un campo de batalla en el que se enfrenten egos irreconciliables y en el que predomine el cálculo prudencial y la acción estratégica.

2. La gestión de lo común exige, además, enfrentar un sistema productivo capitalista y patriarcal cuyo puntal ha sido históricamente la acumulación por desposesión violenta, la explotación, y la distribución desigual de los recursos, y que, como bien denuncia Silvia Federici (en *Calibán y la bruja*)¹ se ha cebado no solo con los comunes, sino también con los cuerpos de las mujeres y con todos aquellos que fueron masacrados en los «nuevos mundos». Capitalismo, patriarcado y colonialismo han formado y forman parte todavía de una tríada secular de dominación y expolio.

El nuevo contrato social pasa por confrontar y superar esa tríada sustituyéndola por una redistribución de la riqueza basada en necesidades básicas y no en políticas sociales subsidiarias del sistema productivo, orientadas únicamente a incrementar la capacidad de consumo y el crecimiento indefinido. Pasa por un sistema productivo anticapitalista, en el que se diluya por completo la distinción entre producción y reproducción (sostenimiento de la vida y cuidados) y en el que se internalicen los costes sociales y ecológicos de nuestros excesos.

¹ *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2010.

Por eso, la redistribución de la riqueza requiere garantizar seriamente el derecho de subsistencia (acceso y disfrute), reformular y defender los derechos sociales, y limitar la propiedad privada, que debe cumplir siempre una función social y ser funcional a la protección de los comunes. De hecho, como decía Rousseau, toda propiedad es pública porque el poder último de decisión sobre la titularidad de un bien pertenece a la comunidad. O sea, que el fundamento último de la propiedad privada es político y no pre-político, como defendió Locke. El derecho de cada particular sobre su bien, subrayaba Rousseau, está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes, y, consecuentemente, su valor es instrumental (y no moral, esto es, «sagrado»)².

En fin, se trata de evitar tanto la especulación como la concentración excesiva de riqueza que puede llegar a suponer la propiedad privada entendida como dominio absoluto, exclusivo y excluyente sobre los bienes de los que depende el sostenimiento de la vida. Y es que esos bienes no pueden reducirse a la suma de opciones y utilidades individuales, ni ser objeto de un proceso de reparto o distribución.

No debemos olvidar que la cultura del bien común es la cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas; responsabilidades individuales y compartidas que se traducen tanto en la asunción de deberes negativos (omisión), que son los clásicos, como deberes positivos (acción). Una cultura de la responsabilidad que, además, no se agota en el presente, sino que tiene una dimensión temporal, que apela a una solidaridad sincrónica hacia el pasado (deber de memoria) y hacia el futuro (generaciones futuras).

La «justicia entre generaciones» no se reduce a la búsqueda de equivalencias milimétricamente individualizadas entre el antes y el después, porque incorpora la lógica de la ética del cuidado. Y el cuidado es una responsabilidad compartida, basada en la deuda que hemos contraído con los que sufren o el beneficio (también implícito e indirecto) que hemos extraído a partir de su sufrimiento. Es decir, lo relevante aquí es el elemento relacional resultante de la interdependencia. Lo diacrónico es lo que nos da pistas sobre el carácter permanente del mundo que compartimos y resulta esencial para que la vida humana pueda tener un significado.

² «El derecho que tiene cada particular sobre su bien está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos [los bienes], sin lo cual no habría solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía» (*El contrato social*, 1762).

En definitiva, los bienes esenciales no son bienes libres sino bienes vinculados a una determinada comunidad humana, que es la que los define y los redefine, independientemente del sistema de derechos de propiedad (contingente) en el que se encuentren.

Para acabar, puede decirse que redistribuir la riqueza es hacer comunidad, y no se hace comunidad sin derechos políticos, soberanía y autogobierno. Por eso, la justicia social no se ocupa únicamente de esa redistribución, sino que también ha de considerar y valorar los vínculos que garantizan y cultivan la existencia de lo común. Como bien señala Michael Sandel, la justicia no sólo trata de la manera debida de distribuir las cosas, sino también de la manera debida de valorarlas³. Por eso, en una sociedad realmente justa la gente no sólo disfruta de un cierto bienestar, sino que puede razonar sobre el significado de lo que es y de lo que quiere ser, y, desde luego, puede tomar decisiones al respecto (creando una cultura pública que acoja las discrepancias).

Garantizar los derechos sociales exige estimular (y no impedir) una política de participación ciudadana; fortalecer un espacio y una actividad común que nos permita definir y redefinir nuestra comunidad de pertenencia. Como ya reconocía Marshall en su *Ciudadanía y clase social*, los derechos sociales tienen un carácter comunitario que solo puede realizarse en el ejercicio de una democracia amplia e incluyente. Y ese ejercicio no se da ni se puede dar en el vacío, sino que siempre consiste en interpretar la historia de nuestra vida personal en relación con la de los otros. No hay derechos sociales sin ciudadanía democrática, y no hay ciudadanía sin comunidad y autogobierno.

3. Dado que la comunidad de pertenencia es definida por lo común, y es también la que define y redefine los bienes comunes (sus rasgos y/o titularidad), la gestión de tales bienes solo puede estar protagonizada por sus propios destinatarios presentes y futuros. Esto significa, obviamente, que esa gestión ha de ser sustentable y, además, que los factores endógenos de la comunidad (cultura, reglas, tradiciones) y sus bienes relacionales no son ni pueden ser irrelevantes. Un bien se convierte en común a partir de la práctica de compartir y cuidar que el bien produce y define (*commoning*), así como de las relaciones sociales y las funciones que tal práctica genera. El *commoning*, de hecho, es el que restringe el uso de los comu-

³ Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, Debate, Madrid, 2011.

nes a la consecución de objetivos personales/colectivos compatibles entre sí y excluye de raíz cualquier orientación mercantil. Los bienes de los que depende la vida no pueden ser mercancías. Su valor es esencialmente el valor de uso (y no el de cambio) y son indisponibles e inalienables por definición, porque no son producidos por una economía convencional, no pueden ser ni comprados ni vendidos y su consumo es siempre relacional (solo tiene sentido en el seno de una comunidad concreta).

Lo cierto es que desde el individualismo posesivo y antisolidario del viejo contrato social no se pueden ni captar ni resolver los problemas genuinamente comunes, uno de los cuales es, obviamente, el de nuestra propia supervivencia. Si la crisis de civilización que estamos viviendo tiene algún interés para nosotros es porque nos amenaza como conjunto, porque amenaza aquellos elementos de continuidad que nos sitúan en el mundo.

En la práctica, la descentralización y el autogobierno exigen redistribución del poder político y competencias administrativas. Exigen delegar en instancias infraestatales tanto el control sobre el territorio propio como la definición y la gestión de los comunes locales; entre otras cosas, porque hace tiempo que el Estado dejó de tener la medida de todas las cosas y quedó atrapado entre fuerzas centrífugas y centrípetas tendencialmente contradictorias. Esto significa que los procesos de internacionalización han de ser democratizados y el municipalismo permeable y cooperativo.

4. Con identidad relacional y reconocimiento quiero decir que las prácticas comunes, los bienes relacionales –los vínculos que apreciamos– y los factores endógenos con los que una comunidad se autoidentifica, deben ser políticamente relevantes. Las narrativas comunitarias y el discurso del (auto)reconocimiento, contruidos desde abajo y siempre en el marco de una sociedad democratizada, no han de leerse como anécdotas colaterales, ni tienen simplemente un valor psicológico, social o cultural. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes, con naciones históricas o identidades en conflicto, porque lo importante aquí no es tanto la conservación de determinados valores culturales, cuanto la comprensión de los fenómenos y realidades en cuya conservación y construcción existe un interés común. De manera que el relato común sólo tiene valor político cuando es el fruto de un proceso consciente de (auto)construcción.

5. Por último, cuando algunas feministas hablamos de feminización de la política, nos referimos también a esta transformación integral que exige el nuevo contrato social. No se trata únicamente de articular una política con presencia de mujeres –aunque no faltan quienes hablan de feminización y piensan, únicamente, en paridad–, sino una política organizada en torno a la interdependencia, la ecoddependencia y el cuidado. Somos seres finitos, vulnerables, inacabados, estamos en continuidad con otros, y tenemos que ser continuados; nuestra experiencia es la de vivir inmersos en un entorno concreto y en un nudo de relaciones, y este inacabamiento es lo que nos desposee de toda inmunidad y autosuficiencia, de manera que nuestra autonomía sólo puede ser entendida en su dimensión relacional.

Así entendida, la feminización de la política exige que nuestras prioridades éticas (la justicia y los derechos) aparezcan conectadas con nuestra experiencia relacional y el aprendizaje moral que se deriva de ella (destilado en un proceso comunicativo y en un diálogo con los «otros»); canaliza dialógicamente nuestras vivencias más cotidianas y las sitúa en un espacio contextual y narrativo (una *política de localización*⁴ construida desde abajo); y pone en valor nuestros *saberes situados*⁵ para que podamos elaborar desde ahí las estrategias de resistencia que necesitamos para subvertir los códigos dominantes.

III

Releer los derechos humanos desde este nuevo contrato social implica poner en cuestión la concepción reificada de la autonomía privada que hemos heredado de la modernidad. Dicho de otro modo, los derechos no pueden ser concebidos como cotos vedados en favor de la protección y la garantía de intereses privados definidos autónomamente, sino como frutos de una reflexión democrática no excluyente, en la que también pueda debatirse sobre nuestros intereses colectivos y sobre nuestras diferentes concepciones de la vida buena.

⁴ Vid. A. Rich: «Notes towards a politics of location», *Blood, Bred, and Poetry: Selected Prose 1979-1985*, Norton, Londres, 1987.

⁵ Vid. D. Haraway: *Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, trad. M. Talens, Cátedra, Madrid, 1995, pp. 313-344 y, en esta línea, vid. también R. Braidotti: *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*, trad. G. Ventureira y M. L. Femenías, Gedisa, Barcelona, 2004, pp. 15-16.

En una filosofía de lo común, los derechos humanos son siempre el resultado de un diálogo que sólo puede articularse desde la implicación en los asuntos *compartidos*, desde un espacio que cultive lo que hay «entre» nosotros, y desde una ética de la responsabilidad y del cuidado sin la que ese «nosotros» no es conceptualmente posible, ni viable, ni sostenible.

Ciertamente, esta concepción relacional de los derechos exige adoptar lo que Marina Garcés ha llamado una visión periférica, la visión del ojo implicado. Una visión que ni es focalizada, porque no aísla, ni es panorámica, porque no totaliza, sino que relaciona lo enfocado con lo no enfocado. Y es que es exactamente en esa periferia en la que se sitúa el mundo que hay «entre» nosotros, el espacio de lo común. «La periferia excede nuestra voluntad de visión y de comprensión, a la vez que les da sentido porque las inscribe en un tejido de relaciones»⁶.

Lo cierto es que sin una política de lo común no hay futuro para nosotros, ni para ningún otro «nosotros» posible o imaginado; un «nosotros» que no es un sujeto en plural sino «el sentido del mundo entendido como las coordenadas de nuestra actividad común, necesariamente compartida»⁷.

Con esta relectura se subraya la indudable relevancia que tienen los derechos políticos y sociales, porque son estos derechos los que fomentan la radicalidad democrática, la participación pública y la cohesión social; porque es esta categoría de derechos la que mejor refleja que no somos nodos aislados, sino seres vulnerables profundamente vinculados. Como decía Dewey hace ya algunos años, los derechos políticos no son relevantes porque proporcionen un mecanismo para ponderar equitativamente todas las preferencias individuales, sino porque facilitan una forma de organización social que alimenta y sostiene las capacidades de cada uno, así como las responsabilidades colectivas y la formación y garantía del bien común⁸.

Dicho de otro modo, la importancia de los derechos no reside tanto en que con ellos logremos defender las pretensiones de un individuo o las de una comunidad; su fuerza moral no deriva ni de los fines individuales, ni de los valores compartidos a los que pudieran responder, sino del modo en que fomentan la discusión acerca de la valía moral de los fines que promueven. De manera que si la autonomía y los derechos individuales han de protegerse en una sociedad

⁶ M. Garcés en *Un mundo común*, Bellaterra, Barcelona, 2013, pp. 141 y ss.

⁷ *Op. cit.*, p. 30.

⁸ *Vid.* J. Dewey: *Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación*, trad. L. Luzuriaga, Ediciones Morata, 2004.

dada es porque satisfacen o promueven algún bien humano de importancia en el seno de una práctica relacional.

En definitiva, la decisión sobre la importancia que ha de tener en la vida de una persona un determinado bien no puede ser independiente de las decisiones que se adopten sobre la importancia de ese bien en el espacio relacional al que pertenece.

Los derechos tienen que concebirse como el fruto de una reflexión democrática, y esa reflexión siempre está ligada a la adscripción, a ser parte de algo. Si, como ya he dicho, la propia libertad individual, la autoconsciencia y la autoestima, sólo pueden realizarse en una vida social que inspire un compromiso con lo común, no podemos seguir desvinculando derechos, procesos de empoderamiento, autogobierno y radicalidad democrática.

El nuevo contrato social está estructuralmente conectado con la revolución de lo común y con esta visión relacional de los derechos humanos⁹.

⁹ A todas estas cuestiones me he referido en mi contribución al libro de F. Prats, Y. Herrero y A. Torrego: *La Gran Encrucijada. Reflexiones en torno a la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico*, Libros en Acción, Madrid, 2016; en «Reformular los derechos humanos desde una visión relacional. El fin de la inmunidad y la autosuficiencia», *Derechos y Libertades*, vol. 36, 2017, pp. 135-166; y en «Diez pasos hacia una conclusión inconclusa en la revolución de lo común», *Comunismos por venir*, Arcadia Editorial, 2019.

El debate sobre la libertad y otros ideales ilustrados para un futuro sostenible

Alicia H. Puleo García

*Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política
Universidad de Valladolid*

La sociedad actual en la que vivimos es, en gran parte, para bien y para mal, resultado de ese gran movimiento intelectual y político del siglo XVIII que ha recibido el nombre de «Ilustración». En nuestro presente, hace ya varias décadas que el neoliberalismo tiene como correlato ideológico un pensamiento postmoderno que ejerce una crítica implacable a la Ilustración, convirtiéndola en el enemigo a batir. Desde una prosa oscura, hermética, relativista y supuestamente progresista, se culpó a la Ilustración de todas las injusticias y errores existentes. Pero ¿qué es la Ilustración? A esta pregunta, Kant respondió con su célebre definición de la Ilustración como la salida de la culpable minoría de edad, es decir, de la costumbre y la cobardía de dejarse guiar por tutores religiosos o políticos sin atreverse a pensar por sí mismo. *Sapere aude*, «atrévete a saber», fue la divisa de la Ilustración. Atrévete a usar tu propio entendimiento. El nombre mismo de Ilustración remite a la iluminación de la realidad por medio de la luz de la razón, emancipada de dogmas y fanatismos. ¿Hay algo más necesario en estos tiempos de pensamiento único?

La Ilustración impulsó la educación, confió en la posibilidad de acercarse a verdades objetivas a través de la observación y el razonamiento, promovió la tolerancia hacia formas de vida y pensamiento distintos a los propios, reivindicó la libertad de expresión, abolió la tortura en los procesos penales y promulgó los ideales de libertad e igualdad que han dado lugar a las democracias modernas. ¿Realmente no hay nada que se pueda rescatar de su legado?

Libertad positiva y libertad negativa

Para comprender los debates modernos sobre el Estado, la autonomía individual y la justicia social, debemos tener clara la diferenciación que la Filosofía Política hace entre la *libertad negativa* y la *libertad positiva*. Esta distinción fue formulada de manera clásica por el filósofo británico Isaiah Berlin en su influyente ensayo *Two Concepts of Liberty* (1969), basándose en tradiciones de pensamiento anteriores.

La *libertad negativa* se define como ausencia de interferencia externa. Un individuo es libre en la medida en que nadie —ni el Estado, ni otros individuos— obstaculiza sus acciones. Desde esta perspectiva, la libertad consiste en un espacio protegido frente a la coerción. Esta concepción se asocia históricamente al liberalismo clásico y a pensadores como Thomas Hobbes o John Locke, para quienes la función principal del poder político es evitar la violencia y garantizar derechos básicos, como la propiedad y la seguridad personal. Pero también está estrechamente ligada a filósofos como John Stuart Mill, partidario del cooperativismo y defensor de la emancipación de las mujeres. La influencia de Mill es fundamental en Berlin. En *On Liberty*, Mill defiende un ámbito inviolable de autonomía individual frente al Estado y la sociedad, salvo para evitar daño a terceros. Así, para Mill, el Estado no puede prohibir el suicidio o el uso de drogas. Pero señala que, si bien no debe interferir en el deseo de un alcohólico de vivir una existencia que lo daña incluso físicamente, tiene que intervenir si éste comete algún acto de agresión hacia otra persona. En el concepto de *libertad negativa* de Berlin, es visible la preocupación de Mill por proteger la pluralidad de formas de vida en una sociedad. Para poner un ejemplo cercano de cómo ha de entenderse esta concepción milenaria de la libertad, recordemos el debate que se dio cuando en nuestro país el Estado prohibió fumar en espacios públicos. Muchos protestaron porque consideraban que vulneraba la libertad personal; sin embargo, no era así, ya que no se interfería en la decisión de fumar en espacios privados. De esta manera, se protegía tanto la libertad de quienes querían fumar como la de quienes no deseaban estar expuestos al humo cancerígeno.

La *libertad negativa* es muy importante porque limita el poder del Estado y protege a los individuos frente al autoritarismo. Sin embargo, puede resultar formal y desigual en la práctica. Aunque nadie interfiera directamente, las condiciones materiales de pobreza, ignorancia o discriminación pueden impedir que muchas personas ejerzan efectivamente su libertad. En este sentido, no toda ausencia de coacción equivale a una libertad real. Como los pensadores y militantes socialistas han señalado contundentemente, la libertad del proletariado para aceptar un salario irrisorio no es tal si la única alternativa es la miseria. Para resumir de manera elocuente la limitación de este concepto, podemos decir que la libertad de dormir bajo un puente cuando no se dispone de los medios para hacerlo en una vivienda adecuada no puede calificarse de libertad real.

Frente a esta concepción, la *libertad positiva* se entiende como capacidad efectiva de autodeterminación. Ser libre no implica sólo no ser impedido coercitivamente de hacer algo, sino tener el poder y los medios para realizar los propios fines. Esta idea se vincula a tradiciones republicanas, y suele asociarse a autores como Jean-Jacques Rousseau, para quien la libertad auténtica implica obedecer

leyes que el individuo se da a sí mismo de manera racional como miembro de una comunidad política.

Podemos ver, por lo tanto, que la diferencia entre libertad negativa y positiva refleja dos formas distintas de entender la relación entre individuo, poder y sociedad. Mientras la *libertad negativa* prioriza la protección frente a la interferencia del Estado, la *libertad positiva* enfatiza la capacidad real de autodeterminación, que requiere ciertas condiciones materiales previas. Gran parte de la teoría política contemporánea busca compatibilizar ambas formas, garantizando espacios de no coacción sin ignorar las condiciones sociales necesarias para que la libertad sea algo más que un ideal abstracto.

Al subrayar acertadamente que sin ciertas condiciones sociales no hay verdadera autonomía, el concepto de *libertad positiva* ha inspirado proyectos de emancipación colectiva, políticas de bienestar y derechos sociales (acceso a la educación, atención sanitaria gratuita...). No obstante, Berlin advirtió de un riesgo importante ya avistado por J. S. Mill en esta concepción de libertad: cuando se identifica la «verdadera» libertad con un ideal racional o moral, el poder político puede justificar la coacción en nombre del bien del propio individuo o del pueblo. Históricamente, esta deriva ha sido utilizada por regímenes autoritarios que afirman «liberar» a las personas incluso contra su voluntad. Este peligro es hoy particularmente notable con la extensión y aplicación de las nuevas tecnologías.

Por ello, el concepto de *biopolítica* se ha convertido en una categoría central para analizar las formas contemporáneas de poder. Elaborado por el filósofo francés Michel Foucault, designa un tipo de racionalidad política que ya no se limita a gobernar territorios o imponer leyes, sino que administra la vida misma; es decir, los cuerpos, la salud, la reproducción, la natalidad, la mortalidad y los comportamientos cotidianos de las poblaciones. El peligro que hoy detectamos no es simplemente la existencia de la *biopolítica* (inevitable en sociedades complejas), sino su deriva hacia nuevas formas de totalitarismo, más sutiles y normalizadas que las del siglo XX.

En sus cursos del Collège de France, Foucault mostró cómo, a partir del siglo XVIII, el poder soberano clásico de «dar la muerte y dejar vivir» fue sustituido progresivamente por un poder de gestión de la vida. La *biopolítica* opera mediante saberes expertos (medicina, estadística, demografía, epidemiología...) y mediante dispositivos de gestión que pretenden optimizar la vida colectiva. A diferencia del poder represivo tradicional, el poder biopolítico no actúa principalmente por prohibición, sino por regulación, normalización y prevención. Por ello, resulta especialmente eficaz y es más difícil descubrir su carácter opresivo y rebelarse ante él.

El riesgo biopolítico surge cuando la vida se convierte en objeto de gestión técnica despojada de su dimensión ética y política. En este punto, la *biopolítica* puede deslizarse hacia una lógica totalitaria sin necesidad de campos de concentración ni terror explícito. Como ya advirtió Hannah Arendt, el totalitarismo no se define solo por la violencia extrema, sino por la eliminación de la pluralidad humana y la reducción de los individuos a meros portadores de funciones biológicas o sociales. Cuando el poder decide qué vidas deben ser protegidas, optimizadas o sacrificadas en nombre de la salud colectiva, se abre una zona peligrosa de indistinción entre cuidado y dominación.

A diferencia de los totalitarismos clásicos, el biopolítico no necesita imponer una ideología única de forma explícita. Se legitima a través del lenguaje de la ciencia, la seguridad y la protección, lo cual dificulta la crítica. Medidas presentadas como neutrales o necesarias pueden producir exclusión, vigilancia masiva y control social profundo. La normalización de indicadores biomédicos, conductuales o genéticos puede derivar en nuevas formas de discriminación, donde lo «anómalo» o «de riesgo» es tratado como problema a corregir o aislar. Este peligro se intensifica en el contexto de la tecnociencia contemporánea. El cruce entre *biopolítica*, *big data*, inteligencia artificial y biotecnología permite un seguimiento continuo de los cuerpos y las conductas. Como ha señalado Giorgio Agamben (2005), la visión de los seres humanos como *nuda vida* (vida reducida a su mera existencia biológica) tiende a generalizarse cuando se normaliza el estado de excepción. En este marco, la ciudadanía puede quedar subordinada a criterios sanitarios o biológicos, debilitando derechos fundamentales y anulando toda disidencia y deliberación democrática.

Advertir del peligro de un totalitarismo biopolítico no implica rechazar toda política de la vida. La salud pública, la protección ambiental o el cuidado colectivo son indispensables. El problema surge cuando priman intereses económicos que se presentan en nombre de la defensa de la vida, anulando otros valores igualmente fundamentales como son la libertad, la dignidad, la autonomía, la justicia y el pluralismo. La *biopolítica* se convierte en un nuevo totalitarismo potencial cuando deja de ser objeto de debate público y se transforma en administración incuestionable de lo viviente, humano y no humano. Frente a este riesgo, la Filosofía Política tiene la tarea de reivindicar valores centrales de la Ilustración como son el espíritu crítico, la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad de estilos de vida frente a cualquier poder que aspire a gobernar a ésta por completo (Puleo, 2023).

En este sentido, la creciente influencia del pensamiento transhumanista (Bostrom, 2003; Harari, 2016) plantea nuevos retos a la Bioética. El proyecto de mejora del ser humano (*enhancement*) a través de la tecnología abre un horizonte de pro-

mesas que es muy posible que queden incumplidas, si nos atenemos a los datos de la crisis ecológica y de la emergencia climática (Riechman, 2016). Promete incrementar en un futuro nuestras capacidades, eliminar la agresividad interviniendo en los cuerpos, evitar el envejecimiento e incluso vencer a la muerte, alojando la mente en un ordenador. En el contexto de esta sociedad hedonista, hay también alguna propuesta de retrasar con inyecciones la pubertad de niñas o niños para que padres y madres puedan disfrutar más tiempo de la gracia infantil de su prole. Estos objetivos no son simple fantasía de películas y series futuristas, sino proyectos económicos y filosóficos en marcha en los que se está invirtiendo enormes cantidades de dinero. En caso de que estas promesas se cumplieran, ¿en qué medida se vería amenazada la propia naturaleza del ser humano? Es indudable que, más allá de su concreción real en el porvenir, el proyecto transhumanista nacido en Silicon Valley tiene que ser examinado por la Ética en el presente.

El transhumanismo tiene sus defensores entusiastas y sus detractores radicales. Uno de los más inquietantes temas del debate es si las diferentes «soluciones» y «mejoras» que plantea deberían ser optativas o, por el contrario, obligatorias para los individuos en nombre del bien de la sociedad en su conjunto. La libertad y la autonomía de cada ser humano reclamadas por Kant y por el conjunto de pensadores ilustrados son cuestionadas por esa nueva forma de poder que es la *biopolítica* contemporánea.

La idea de igualdad en la Ilustración: naturaleza humana, razón y ciudadanía

La democracia moderna debe su fundamentación teórica a los pensadores que en los siglos XVII y XVIII impugnaron las jerarquías y los privilegios de los nobles en nombre del derecho natural, situando la idea de igualdad en el centro de su proyecto filosófico-político. Frente a las sociedades estamentales del Antiguo Régimen, legitimadas por la tradición, la religión y el privilegio heredado, los pensadores ilustrados defendieron que todos los seres humanos comparten una misma naturaleza racional y, por ello, deben ser considerados iguales en dignidad moral y en derechos fundamentales. La igualdad se convirtió en un principio crítico, orientado a cuestionar las jerarquías sociales, políticas y jurídicas existentes. En John Locke, considerado el fundador del liberalismo clásico, la igualdad aparece vinculada al estado de naturaleza, concebido como una situación originaria en la que todos los seres humanos son libres e iguales por no estar sometidos a ninguna autoridad común. Esta igualdad no implica ausencia de diferencias individuales, sino igualdad moral y jurídica. Implica que nadie tiene derecho natural

a dominar a otro. De este principio se deriva la legitimidad del gobierno basada en el consentimiento y la idea de que la ley debe aplicarse de manera general, sin privilegios arbitrarios.

La Ilustración francesa desarrolló esta concepción en un sentido más radical. En el *Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres*, ensayo publicado en 1755, Jean-Jacques Rousseau afirma que la propiedad privada y las instituciones sociales generan formas de dominación que destruyen la igualdad originaria propia del estado de naturaleza. El ideal ilustrado de igualdad no consiste en hacer a los individuos idénticos, sino en impedir que las diferencias se conviertan en relaciones de subordinación. La igualdad es, por tanto, un principio normativo que debe guiar la organización política. En la Revolución de 1789, la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* proclamó que «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos», consagrando así la igualdad política y jurídica como fundamento de la ciudadanía moderna. Se trataba de una concepción revolucionaria destinada a destruir el poder de la nobleza y el clero al establecer que los seres humanos son iguales por naturaleza y deben gobernarse por leyes racionales, no por privilegios de cuna ni por mandatos divinos. Este principio alimentó las revoluciones americana y francesa y dio lugar a los «derechos del hombre y del ciudadano», a la soberanía popular y al constitucionalismo. Pero la sociedad que surgió de estas revoluciones fue capitalista, no igualitaria en el plano material. La igualdad jurídica coexistió con enormes desigualdades económicas. Desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, muchos pensadores percibieron que la Ilustración proclamaba la libertad y la igualdad, pero las había realizado sólo parcialmente. La propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado y el mercado libre generaban nuevas formas de dominación a través de la explotación, la pobreza, la alienación y la desigualdad estructural. La carestía y el hambre que sufrió el pueblo francés en 1769 llevó a los pensadores ilustrados radicales Diderot, D'Holbach y Helvetius a alejarse de las tesis del *laissez faire*, *laissez passer* de Turgot y de «la mano invisible» de Adam Smith, porque constataron que una economía de libre mercado dejaba bienes básicos como el grano librados a la especulación de los poderosos.

El socialismo surgirá precisamente como una radicalización del ideal ilustrado de igualdad. Ya en el siglo XVIII, Graco Babeuf, considerado por Marx como el precursor del comunismo, sostiene, en su *Conspiración de los Iguales* de 1796, que la Revolución ha traicionado al pueblo francés al limitarse a instalar la igualdad ante la ley, dejando intacta la desigualdad económica. Su proyecto de igualdad incluía la abolición de la propiedad privada de la tierra, la comunidad de bienes y el derecho universal a la subsistencia. Tras fracasar el golpe de Estado

que organizó contra el Directorio, Babeuf fue guillotinado. Pero su tesis de que sin igualdad económica no hay libertad ni ciudadanía real dará origen a distintas formas de socialismo en el siglo XIX.

El ideal de igualdad ilustrado dio también origen al combate contra el racismo y el sexismo. Junto a este ideal, la Ilustración introduce un principio decisivo: la posibilidad de someter a crítica racional cualquier forma de poder, tradición o jerarquía. Ya en el siglo XVIII, Montesquieu ironizaba sobre quienes hacían del color de la piel un pretexto para la explotación de parte de la humanidad, y el caballero de Jaucourt, en las entradas «Humanidad» y «Esclavitud» de la *Enciclopedia* (Puleo, 2023), condena sin paliativos, en nombre del derecho natural, el trato a los pueblos indígenas en la colonización de América y todas las formas históricas de esclavización desde la Antigüedad hasta su época. La exclusión de las mujeres de los nuevos derechos de ciudadanía fue denunciada tempranamente por pensadores ilustrados, que entendieron que el lema «la igualdad de todos los hombres» debía ser entendido como «la igualdad de todos los seres humanos» y no como «la igualdad de todos los varones».

Algunos de estos pensadores que podemos denominar «feministas», aunque el término aún no existía; pensadores que, además, luchaban por la abolición de la esclavitud en las colonias del Caribe, terminaron trágicamente en el año del Terror 1793, durante la Revolución Francesa; entre ellos, Olympe de Gouges, autora de la *Declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana* (1790), que fue guillotinado, y Condorcet, filósofo y diputado revolucionario, que se suicidó en la prisión para no ser ejecutado en público. Por reclamar la presencia política de las mujeres, las líderes republicanas revolucionarias tuvieron que exiliarse tras caer en desgracia entre los jacobinos, a quienes, por cierto, ellas habían brindado todo su apoyo. Del otro lado del canal de la Mancha, Mary Wollstonecraft criticó, en su *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792), que se proclamara la igualdad natural de los seres humanos mientras se negaban derechos civiles y educativos a la mitad de la humanidad. Su obra demostró que la igualdad ilustrada debía extenderse coherentemente a todos los sujetos racionales, sin distinción de sexo.

La relación entre Ilustración y feminismo es compleja y ambivalente. El feminismo moderno surge históricamente en el seno del proyecto ilustrado y se nutre de sus categorías fundamentales de razón, igualdad, autonomía y universalismo. Como ha señalado Cèlia Amorós, el feminismo es «la idea racionalista e ilustrada de la igualdad entre los sexos» (Amorós, 1997:70) y surge de la lógica generalizadora de la democracia. El feminismo emerge, así, como una crítica inmanente a la Ilustración; es decir, como una exigencia de coherencia interna del propio

proyecto ilustrado. No se trata de rechazar la razón ilustrada, sino de denunciar su aplicación parcial y sesgada. Desde esta perspectiva, la razón ilustrada no debe abandonarse, sino reconstruirse. C. Amorós defiende un universalismo crítico, consciente de sus sesgos históricos, pero indispensable para la emancipación. Sin categorías universales como igualdad, ciudadanía o derechos, el feminismo perdería su capacidad de impugnación normativa. Al rechazar toda pretensión de universalidad, la crítica posmoderna a la Ilustración termina privando a las mujeres de instrumentos emancipatorios, subraya Amorós. El feminismo no ha de ser la negación de la Ilustración, sino su profundización crítica.

Hacia un futuro sostenible

El feminismo necesita la herencia ilustrada de igualdad, libertad, autonomía, derechos y crítica de los dogmas, pero para comprender los retos de nuestro siglo XXI también debe incorporar la nueva conciencia ecológica que nos revela que los seres humanos somos parte de una amenazada red de la vida. El ecofeminismo ilustrado que propongo no renuncia a la razón, sino que la amplía, incorporando una ética de la vida que hay que cuidar (Puleo, 2011).

Sostengo que el ecofeminismo es una conciencia feminista profunda de la crisis socioambiental contemporánea. Parte del diagnóstico de que esta crisis no puede comprenderse ni abordarse adecuadamente sin analizar las estructuras históricas de dominación patriarcal, capitalista y antropocéntrica. Desde esta perspectiva, la degradación de la naturaleza y la subordinación de las mujeres no son fenómenos independientes, sino procesos entrelazados que responden a una misma lógica de explotación, jerarquización y negación de la vulnerabilidad. La exclusión histórica de las mujeres está ligada a la desvalorización de todo aquello asociado estructural y culturalmente a lo femenino: la emoción, la empatía, la dependencia y la relación con la naturaleza.

Frente a lecturas simplificadoras, basadas en un rechazo global de la Ilustración, propongo una relectura crítica de la herencia ilustrada, capaz de rescatar sus ideales emancipatorios de igualdad, libertad, universalismo moral y derechos humanos, al tiempo que se cuestione sus sesgos androantropocéntricos. El problema no reside en la razón ilustrada en sí misma, sino en su reducción instrumental y en su uso histórico para legitimar la dominación sobre las mujeres, los pueblos colonizados, los animales y la naturaleza.

Debemos distanciarnos tanto del rechazo total de la modernidad como de las versiones ambientalistas tecnocráticas que se limitan a un *greenwashing*. La

razón crítica capaz de reconocer los límites biofísicos del planeta y la interdependencia de todos los seres vivos tiene que estar acompañada de empatía y compasión. Esta razón ampliada permite pensar una ética y una política orientadas a la justicia y al cuidado de los seres humanos, los animales y los ecosistemas.

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la integración de la ética del cuidado en un marco universalista. Las teorías del cuidado desarrolladas por autoras feministas pusieron en cuestión la jerarquización moral tradicional que había despreciado la empatía, la atención a la dependencia y la responsabilidad por los otros como valores «menores» frente a la justicia abstracta. Visibilizaron prácticas históricamente feminizadas como el cuidado de personas dependientes, la crianza y la atención a la vulnerabilidad, mostrando su relevancia moral y política.

Esta revalorización del cuidado no ha de convertirse en una nueva trampa normativa para las mujeres. No se trata de sustituir la ética de la justicia por una ética del cuidado, sino de compatibilizarlas. El cuidado debe ser desgenerizado, enseñándolo tanto a niños como a niñas, universalizándolo más allá de nuestra especie y sosteniéndolo con estructuras sociales y políticas justas. Solo así puede convertirse en un principio emancipador y no en una justificación de la desigualdad.

Esta integración resulta especialmente fecunda y transformadora cuando se amplía el círculo de consideración moral más allá de la comunidad humana. El ecofeminismo extiende la ética del cuidado al mundo no humano, cuestionando el antropocentrismo que ha legitimado la explotación ilimitada de los ecosistemas y el sufrimiento animal más atroz en la ganadería industrial y los laboratorios de experimentación (Tafalla, 2025). Reconocer la vulnerabilidad compartida y la interdependencia no implica renunciar a la razón ni a los principios universales, sino profundizarlos (Puleo, 2019). La ética ilustrada, reinterpretada desde el ecofeminismo, puede y debe incorporar la responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia los demás seres vivos.

De esta manera, el ecofeminismo es una crítica estructural al modelo de desarrollo dominante, basado en el crecimiento económico ilimitado, la contaminación ambiental, la mercantilización de la vida y la invisibilización de los cuidados. La sostenibilidad no es compatible con un sistema que depende de la explotación intensiva de recursos naturales finitos y del trabajo gratuito o precarizado de las mujeres. Por ello, el ecofeminismo no se limita a una ética individual, sino que exige transformaciones profundas en la economía, la política y la cultura.

La propuesta ecofeminista para el futuro se articula, así, en torno a los ejes normativos de justicia social, igualdad entre mujeres y hombres, sostenibilidad ecológica, democracia participativa y consideración moral más allá de nuestra especie. Estos ejes se sostienen mutuamente. No puede haber justicia ambiental sin igualdad, ni emancipación femenina en un planeta devastado (Garzón, 2020). Tampoco puede construirse una ética del cuidado efectiva sin derechos sociales, políticas públicas y un reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres.

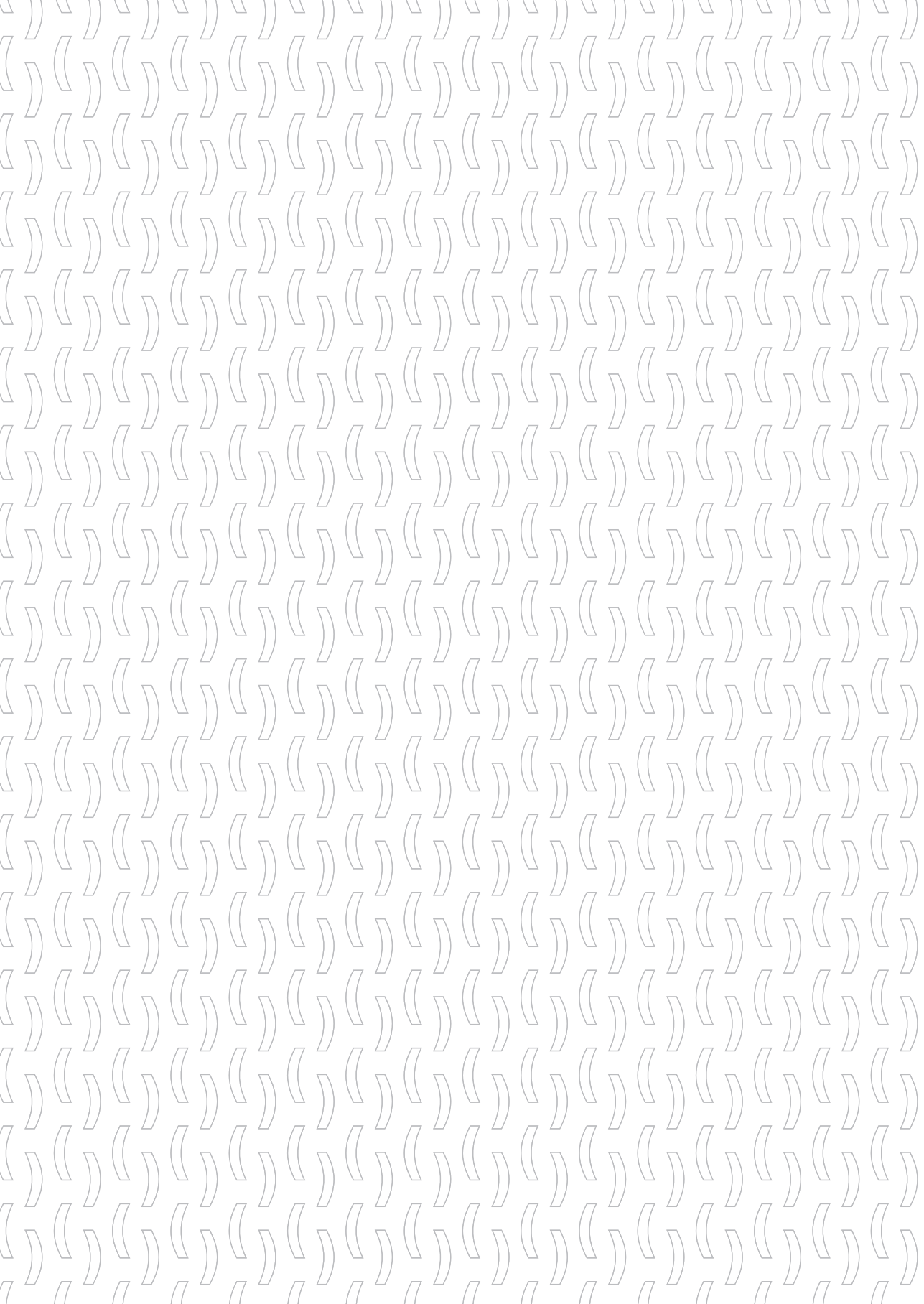
La transformación ecofeminista ha de incluir también aspectos simbólicos, artísticos, literarios... (Antón, 2018; Balza, 2023; Bernárdez, 2023). Es preciso cuestionar los ideales de dominio, competitividad y falsa autosuficiencia que han definido el imaginario moderno y promover valores como la empatía, la cooperación, la sobriedad y el cuidado de los seres vivos. Estos valores, lejos de ser «prepolíticos» o privados, constituyen la base de una ciudadanía ecológica. Necesitamos repensar y remodelar el modelo de comunicación para que sea capaz de transmitir eficazmente estas ideas fundamentales para la transición ecosocial (De Andrés y Chaparro, 2022).

Tal como lo concibo, el ecofeminismo es una propuesta filosófica y política integral para afrontar la crisis ecológica y civilizatoria actual. Al vincular los valores ilustrados con la ética del cuidado, ofrece un marco normativo que combina universalismo y atención a la vulnerabilidad, razón crítica y sensibilidad moral, justicia y sostenibilidad. No se trata de volver a un pasado idealizado ni de confiar ciegamente en soluciones tecnológicas. Corregir el rumbo suicida del proyecto moderno de dominio de la naturaleza, reorientándolo hacia el cuidado de la vida humana y no humana y su casa común que es la Tierra, es emprender el camino hacia un futuro sostenible.

Referencias bibliográficas

- AMORÓS, Cèlia (1997): *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*, Col. Feminismos, Cátedra, Madrid.
- ANTÓN, Eva (2018): *Género y naturaleza en las narrativas contemporáneas francesa y española*, Colección Igualdad, Ediciones Universidad de Valladolid.
- AGAMBEN, Giorgio (2005): *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Ed. Pre-Textos, Valencia.
- BALZA, Isabel (2023): *De lo salvaje y de la escritura animal*, Col. Dilemata, Plaza y Valdés Ed., Madrid.
- BERNÁRDEZ, Asunción (2023): *Ecoficciones: Cine para sentipensar la crisis climática*, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia.

- BOSTROM, Nick (2003): *The Transhumanist FAQ*, World Transhumanist Association.
- DE ANDRÉS, Susana; CHAPARRO, Manuel (2022): *Comunicación radical. Des-patriarcalizar, decolonizar y ecologizar la cultura mediática*, Gedisa, Madrid.
- GARZÓN, Dina (2020): «No hay planeta B», en Puleo, A., *Ser feministas. Pensamiento y acción*, Col. Feminismos, Cátedra, Madrid.
- HARARI, Yuval (2015): *Homo Deus. Breve historia del mañana*, Ed. Debate, Madrid.
- PULEO, Alicia H. (2011): *Ecofeminismo para otro mundo posible*, Col. Feminismos, Cátedra, Madrid. Trece ediciones.
- _____. (2019): *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*, Plaza y Valdés Ed., Madrid. Cuatro ediciones.
- _____. (2023): *Ideales ilustrados. La Encyclopédie de Diderot, D'Alembert y Jaucourt*, Plaza y Valdés Ed., Madrid.
- RIECHMANN, Jorge (2016): *¿Derrotó el Smartphone al movimiento ecologista? Para una crítica del mesianismo tecnológico*, Ed. de la Catarata, Madrid.
- TAFALLA, Marta (2025): *Paradojas de la experimentación en animales. Ética, salud y crisis ecológica*, Plaza y Valdés Ed., Madrid.





()